C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CECILIO VALVERDE MAZUELAS

Sesión Plenaria núm. 53

celebrada el martes, 29 de abril de 1980

ORDEN DEL DIA

Acta de la sesión anterior, celebrada los días 15 y 16 de abril de 1980.

Ruegos y preguntas:

- Del señor Picazo González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre criterios seguidos en la fijación de las subvenciones a los agricultores por el consumo de gasóleo agrícola («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie I, número 39, de 15 de febrero de 1980).
- Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático), sobre reducción de las líneas de la Compañía Transmediterránea respecto a Canarias («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie I, número 37, de 1 de febrero de 1980).
- Del señor Arévalo Santiago (Grupo Parlamentario Socialista), sobre planes del Gobierno en relación con la autonomía de Castilla y León («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie I, número 43, de 15 de marzo de 1980).
- Del señor Cercós Pérez (Grupo Parlamentario Mixto), sobre inmediata puesta en pleno servicio de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social ya construida en Soria

(«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie I, número 26, de 9 de noviembre de 1979).

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley:

- De la Comisión de Sanidad y Seguridad Social, sobre la proposición de ley de autopistas clínicas («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie II, número 74 b), de 25 de abril de 1980).

Interpelaciones:

- Del señor García Duarte (Grupo Parlamentario Socialista Andaluz), sobre planes que tiene previstos el Gobierno para solucionar el grave problema de la vivienda en la provincia de Málaga («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie I, número 32, de 21 de diciembre de 1979).

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley:

- De la Comisión de Educación y Cultura, sobre el proyecto de ley del Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie II, número 75 d), de 25 de abril de 1980).

Petición de creación de Comisiones Especiales de Investigación:

- De los señores Laborda Martín y Villodres García, sobre la creación de la Comisión Especial de Investigación de los Trabajadores Emigrados («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie I, número 47, de 18 de abril de 1980).

Conocimiento directo del Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

- Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular Polaca, para evitar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Capital («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie IV, número 30, de 12 de abril de 1980).
- Acuerdos alcanzados durante las negociaciones conducentes al Acuerdo entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Cambio («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie IV, número 31, de 12 de abril de 1980).
- Acuerdos bilaterales sobre comercio de productos agrícolas entre España y Austria; España y Finlandia; España y la República de Portugal; España y Suecia; España y la Confederación Suiza, así como el intercambio de cartas entre España y Noruega sobre el comercio de dichos productos («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie IV, número 32, de 12 de abril de 1980).
- Acuerdos entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Cambio y sobre la validez del Acuerdo entre los países de la Asociación Europea de Libre Cambio y España para el Principado de Liechtenstein («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie IV, número 33, de 12 de abril de 1980).

- **Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie IV, número 34, de 12 de abril de 1980).**
- **Convenio básico de colaboración científica y técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Cuba («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie IV, número 35, de 12 de abril de 1980).**

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

Se entra en el orden del día.

Acta de la sesión anterior.—Se da por leída, y aprobada, el acta de la sesión anterior, celebrada los días 15 y 16 de abril de 1980.

Página

Excusas de asistencia 2330

El señor Secretario (Casals Parral) da cuenta de las excusas de asistencia recibidas.

Página

Ruegos y preguntas:

— **Del señor Picazo González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre criterios seguidos en la fijación de las subvenciones a los agricultores en el consumo de gasóleo agrícola 2331**

El señor Picazo González explica su pregunta. Le contesta el señor Subsecretario de Agricultura (Mardones Sevilla). En turno de réplica intervienen de nuevo los señores Picazo González y Subsecretario de Agricultura.

Página

— **Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático), sobre reducción de las líneas de la Compañía Transmediterránea respecto a Canarias 2337**

En ausencia del señor Soriano Benítez de Lugo explica su pregunta el señor Alvarez

Pedreira. Le contesta el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones (Sánchez-Terán Hernández). En turno de réplica interviene nuevamente el señor Alvarez Pedreira.

Página

— **Del señor Arévalo Santiago (Grupo Parlamentario Socialista), sobre planes del Gobierno en relación con la autonomía de Castilla y León 2341**

El señor Arévalo Santiago explica su pregunta. En representación del Gobierno le contesta el señor Subsecretario de Administración Territorial (De Uriarte y Zulueta). El señor Ministro de Transportes y Comunicaciones (Sánchez-Terán Hernández) pide la palabra y el señor Laborda Martín (Grupo Parlamentario Socialista) plantea cuestión de orden en relación con esta petición de palabra. El señor Presidente indica que, interpretando debidamente el Reglamento, puede intervenir sobre este tema el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, quien, seguidamente, hace uso de la palabra.

Página

— **Del señor Cercós Pérez (Grupo Parlamentario Mixto), sobre inmediata puesta en pleno servicio de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social ya construida en Soria 2346**

El señor Cercós Pérez explica su pregunta. Le contesta el señor Subsecretario para la Sanidad (Segovia de Arana). En turno de réplica intervienen nuevamente los señores Cercós Pérez y Segovia de Arana.

	<u>Página</u>
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley:	
— De la Comisión de Sanidad y Seguridad Social, sobre la proposición de ley de autopsias clínicas.	2352

El señor Dorrego González (Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático) defiende el dictamen. En turno de portavoces intervienen los señores Vallejo Rodríguez (Grupo Parlamentario Socialista Andaluz), Paulino Pérez (Grupo Parlamentario Socialista) y García Arroyo (Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático). Se entra en el debate del articulado.

	<u>Página</u>
Artículos 1.º y 2.º	2358

Sin discusión, fueron aprobados los textos del dictamen.

	<u>Página</u>
Artículo 3.º	2358

El señor Fábregas Giné (Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático) defiende un voto particular. Turno en contra del señor Vallejo Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Rodríguez López y por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático el señor Bolea Foradada. El señor Fábregas Giné sugiere la sustitución de una palabra en el texto del voto particular antes de someterlo a votación. Se manifiestan en contra de esta sustitución los señores Duarte Cendán, De Armas García y Vallejo Rodríguez. En consecuencia, no se admite dicha sustitución. Seguidamente fue aprobado el voto particular, por lo que queda incorporado al dictamen. A continuación se aprueba el resto del artículo 4.º de acuerdo con el texto del dictamen.

	<u>Página</u>
Artículo 4.º y Disposiciones adicional y final	2364

Sin discusión, fueron aprobados los textos del dictamen.

El señor Presidente anuncia que queda concluido el debate sobre este dictamen, cuyo texto se trasladará al Congreso de los Diputados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución.

	<u>Página</u>
Interpelaciones:	
— Del señor García Duarte (Grupo Parlamentario Socialista Andaluz), sobre planes que tiene previstos el Gobierno para solucionar el grave problema de la vivienda en la provincia de Málaga	2364

El señor Presidente anuncia que se ha producido una alteración del orden del día. El señor Monge Recalde muestra su disconformidad por el procedimiento seguido para este cambio. A continuación el señor García Duarte explana su interpelación. Le contesta el señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo (Sancho Rof). En turno de portavoces intervienen los señores Montaner Roselló (Grupo Parlamentario Socialista Andaluz), Laborda Martín (Grupo Parlamentario Socialista) y García Duarte (Grupo Parlamentario Socialista Andaluz). Nuevamente hace uso de la palabra el señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

	<u>Página</u>
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley:	
— De la Comisión de Educación y Cultura, sobre el proyecto de ley del Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional	2373

El señor Román Ruiz (Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático) defiende el dictamen.

	<u>Página</u>
Artículos 1.º y 2.º	2376

En discusión, fueron aprobados de acuerdo con el texto del dictamen.

Página

Artículo 3.º 2376

El señor Beviá Pastor defiende una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Castro García un voto particular del mismo Grupo Parlamentario. Interviene a continuación el señor Valdecantos García (Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático). Fue rechazado el voto particular y aprobado el texto del dictamen.

Página

Artículo 4.º 2381

El señor Beviá Pastor defiende una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. A continuación interviene el señor Estrella Pedrola (Grupo Parlamentario Socialista Andaluz). De nuevo usa de la palabra el señor Beviá Pastor, quien plantea una cuestión de orden respecto a su enmienda. Intervienen a continuación los señores Villodres García Vicepresidente (Guerra Zunzunegui) y Beviá Pastor. Seguidamente usa de la palabra el señor Román Ceba. En turno de alusiones interviene el señor Estrella Pedrola, el señor Beviá Pastor y el señor Vicepresidente (Guerra Zunzunegui).

Puesta a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, fue rechazada por 64 votos a favor y 76 en contra.

A continuación el señor Villodres García solicita que el texto del artículo 4.º se vote por apartados. Intervienen los señores Laborda Martín y Vicepresidente (Guerra Zunzunegui).

Sometido a votación el apartado 1.º del artículo 4.º conforme al texto del dictamen, fue aprobado por 76 votos a favor y 63 en contra.

Efectuada la votación del apartado 2.º, fue rechazado por asentimiento de la Cámara.

Sometido a votación el apartado 3.º fue aprobado por 76 votos a favor y 64 en contra.

Página

Artículo 5.º y Disposiciones finales primera a tercera 2389

A pregunta del señor Vicepresidente (Guerra Zunzunegui), y no habiendo sido objeto de votos particulares, fueron aprobados por asentimiento de la Cámara conforme al dictamen de la Comisión.

El señor Vicepresidente (Guerra Zunzunegui) manifiesta que tal como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en los términos que procedan.

Seguidamente la Cámara acuerda por asentimiento continuar la sesión hasta terminar el orden del día.

Página

Petición de creación de una Comisión Especial de Investigación de los Trabajadores Emigrados 2390

Intervienen los señores Martínez Ovejero, Ferrer i Gironés y Villodres García.

La Cámara, por asentimiento, aprueba la creación de la Comisión Especial de Investigación de los trabajadores emigrados.

Página

Conocimiento directo del Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

— **Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular Polaca, para evitar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Capital** 2393

Intervienen los señores Subirats Piñana y Sevilla Corella.

A pregunta del señor Vicepresidente (Guerra Zunzunegui), la Cámara aprueba por asentimiento la ratificación del citado Convenio.

Página

— **Acuerdos alcanzados durante las negociaciones conducentes al Acuerdo entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Cambio** 2395

Usan de la palabra los señores Baeza Martos y Alonso Almodóvar.

La Cámara, a pregunta del señor Vicepresidente (Guerra Zunzunegui), acuerda por asentimiento la ratificación de los Acuerdos alcanzados durante las negociaciones conducentes al Acuerdo entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Cambio.

Página

— Acuerdos bilaterales sobre comercio de productos agrícolas entre España y Austria; España y Finlandia; España y la República de Portugal; España y Suecia; España y la Confederación Suiza, así como el intercambio de cartas entre España y Noruega sobre el comercio de dichos productos 2398

Interviene la señora Raposo Llobet.

La Cámara, a pregunta del señor Vicepresidente (Guerra Zunzunegui), aprueba por asentimiento la ratificación de dichos Acuerdos.

Página

— Acuerdos entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Cambio y sobre la validez del Acuerdo entre los países de la Asociación Europea de Libre Cambio y España para el Principado de Liechtenstein 2398

A pregunta del señor Vicepresidente (Guerra Zunzunegui), la Cámara aprueba por asentimiento los referidos Acuerdos.

Página

— Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes 2399

Interviene el señor Baguena Candela y a pregunta del señor Vicepresidente (Guerra Zunzunegui) la Cámara aprueba por asentimiento el Tratado de Budapest.

Página

— Convenio básico de colaboración científica y técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Cuba 2399

Intervienen los señores Díaz-Marta Pinilla y Román Ceba.

La Cámara, a pregunta del señor Vicepresidente (Guerra Zunzunegui), aprueba por asentimiento la ratificación del citado Convenio.

Seguidamente el señor Vicepresidente anuncia a la Cámara que la próxima sesión plenaria tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo próximo.

Se levanta la sesión.

Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 1980

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Iniciamos la sesión dándose por leída y aprobada el acta de la sesión anterior, que tuvo lugar los días 15 y 16 de este mismo mes.

EXCUSAS DE ASISTENCIA

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Por el señor Secretario segundo se dará lectura de las excusas que hubiere de Senadores ausentes.

El señor SECRETARIO (Casals Parral): Han excusado su asistencia los señores Senadores Delgado Ruiz, Delgado Sánchez-Arjona, Clemente Torrijos, López Gamonal y Marco Tabar.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

- DE DON ANDRES JOSE PICAZO GONZALEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE CRITERIOS SEGUIDOS EN LA FIJACION DE LAS SUBVENCIONES A LOS AGRICULTORES POR EL CONSUMO DE GASOLEO AGRICOLA.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Señor Alvarez Pedreira, como quiera que el Ministro de Transportes está en Barajas recibiendo al Presidente de la República de Guinea, si no tiene inconveniente, pasaremos su pregunta al último lugar del punto segundo del orden del día.

Entonces en primer lugar figurará la pregunta formulada por el Senador don Andrés José Picazo González, del Grupo Socialista, sobre criterios seguidos en la fijación de las subvenciones a los agricultores por el consumo de gasóleo agrícola, publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de 15 de febrero de 1980.

El señor Picazo González tiene la palabra.

El señor PICAZO GONZALEZ: Señoras y señores Senadores, efectivamente, como acaba de decir el señor Presidente, la pregunta fue presentada el día 21 de enero, pero ya no es una novedad en esta Cámara que las cosas vayan con esta celeridad.

De todas maneras, lo que está claro es que sigue teniendo actualidad la pregunta, porque en este primer semestre del año 1980 de nuevo se van a dar subvenciones a los agricultores por el gasóleo agrícola. Esperemos que estas subvenciones no las reciban los agricultores de la misma manera que las del segundo semestre de 1979, puesto que todavía hay Cámaras Agrarias que ni siquiera las han pagado. Se ha producido una gran cantidad de irregularidades, tales como la propia fijación de las cantidades a cobrar, que lógicamente suponen en el cereal más del doble por ciento por hectárea que en el viñedo, siguiendo por la confección de censos, habiéndose empleado los del año 1977, y continuando por una serie de retenciones a través de las Cámaras Agrarias. En una palabra, que la mayoría de los agricultores des-

confían de que van a cobrar subvención alguna.

Pues bien, quiero recordar a Sus Señorías que los sindicatos agrarios, fundamentalmente el sindicato agrario de la UGT, la Federación de Trabajadores de la Tierra, pidieron que estas subvenciones se dieran llana y simplemente en el surtidor del gasóleo. ¿Por qué? Para evitar la serie de corruptelas que se realizan con frecuencia. Puedo decirles nombres y apellidos de gentes que tienen declarado en su ficha casi triple de tierra de la que realmente labran. ¿Por qué? Porque muchas veces para conseguir créditos para adquirir maquinaria agrícola había esa necesidad, muy puesta en práctica en las anteriores Hermandades de Labradores y Ganaderos.

Como el censo que se ha empleado es el del año 1977, se da la paradoja de que hay gente que no va a recibir ni una sola peseta de subvención por el gasóleo agrícola, mientras que otros señores van a recibir cuatro o cinco veces más de lo que en buena lógica les corresponde.

Si no es cansar mucho a Sus Señorías, tengo que decir que se han pagado por una hectárea de cereales 275 pesetas de subvención, mientras que por una de viñedo se han pagado 125.

Creo que no es difícil suponer que una hectárea de cereal y una de viñedo en algunas zonas, como en la de la Mancha, de la que yo procedo, tiene similar gasto en horas de maquinaria agrícola, por no decir que más; sin embargo, se ha cobrado menos de la mitad. ¿Podría haber sido porque el viñedo es un cultivo social, de explotación familiar, mientras que el cereal es un cultivo fundamentalmente de terratenientes? Esta pregunta quisiéramos que nos la aclarara el Subsecretario que va a subir a la tribuna a continuación, porque realmente no lo entendemos.

En el primer semestre de este año esperamos que se paguen estas subvenciones con criterios más realistas, con censos elaborados ahora; pero sobre todo queremos insistir en que se paguen en tiempo y forma, porque si seguimos con este procedimiento resulta que los agricultores van a tener que financiar sus propias subvenciones, puesto que las abonan

en las gasolineras y a los seis u ocho meses reciben el dinero.

¿No sería más cómodo que cuando llegase a la gasolinera con su cartilla agrícola se le redujera ya por cada litro de gas-oil que compra esa cantidad de dinero? ¿O sería esto pedir demasiado a la Administración?

Queremos que se nos conteste a estas preguntas, así como a las siguientes: ¿quién ha empleado estos criterios? ¿Quién los ha fijado realmente? Y ¿cuáles han sido los baremos empleados para la fijación de estas subvenciones?

Creemos que el tema es suficientemente sensible, y como muchas centrales sindicales hemos augurado un verano caliente, esperamos que el Ministerio de Agricultura no colabore a que este verano sea más caliente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): En nombre del Gobierno contestará el señor Subsecretario de Agricultura, don Luis Mardones.

El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA (Mardones Sevilla): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en ausencia del señor Ministro de Agricultura, que está con el Gobierno en la comitiva de recepción al señor Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, me cabe la satisfacción de volver a dirigirme a esta digna Cámara para contestar a la pregunta oral que los señores Senadores Picazo y Delgado han dirigido sobre la cuestión de los criterios de distribución de las subvenciones del gas-oil agrícola y sobre cómo se ha fijado realmente este parámetro.

Quisiera comenzar diciendo, para ilustrar a Sus Señorías, que de los problemas de instrumentación con que a lo largo de 1979 se ha encontrado el Departamento de Agricultura y toda la responsabilidad económica de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno ninguna ha alcanzado las cotas de dificultad instrumental como la del reparto de la subvención del gas-oil y, dentro de la parte puramente mecánica de hacer las cifras, la de los criterios de valoración y de aplicación.

Lo que sí es cierto, Señorías, es que el Gobierno y, concretamente, el Ministerio de

Agricultura se encontró al inicio del año 1979 con dos graves y trascendentales problemas. Por un lado, la subida de los precios de los crudos decretada por la OPEP. Esto obligaba a un replanteamiento de toda la política de subvenciones que sobre el gas-oil agrícola hacía el Departamento de Agricultura. Y, por otra, la magnitud de las cifras que se iban a derivar del alto índice de mecanización agraria que tiene España, de las cifras de las distintas maquinarias consumidoras de gas-oil. Puedo decirles a Sus Señorías que en tractores-oruga, tractores de rueda, motocultores, cosechadoras, trilladoras y motores para elevación de aguas, principalmente, estamos cerca de la cifra de 730.000 unidades; 730.000 unidades consumidoras de gas-oil que, políticamente, son consumidoras de un producto de importación, de un producto caro, que conlleva un desequilibrio de la balanza de pagos española y un coste adicional, por supuesto, para todos los sectores que están implicados en la economía de cascada que generan los «inputs» exteriores al sector agrario. No estamos hablando aquí de un proceso de mecanización a través del tradicional animal de trabajo, superado desde hace veinticinco años en la explotación agraria española. Entramos en este componente.

En las cifras que en un estudio de simulación realizó el Departamento de Agricultura, de acuerdo con los censos de maquinaria agraria de 1977 —en la actualidad disponemos ya del censo del año 1978—, había una banda de uso de gas-oil que no se le encontraba justificación de que se estuviera empleando en usos agrícolas. Esto quería decir, en un análisis muy rápido de la cuestión, solamente dos cosas alternativas: o bien se estaba empleando maquinaria agrícola para usos y fines no terminantemente agrícolas, o se estaba haciendo una desviación fraudulenta al Tesoro Público español yendo un gas-oil, teóricamente de destino agrícola, pese a su calificación de gasóleo B y a su coloración, a otra maquinaria de la construcción de obras públicas o de simple automoción, cosa que resulta para un sistema democrático responsable totalmente inadmisible e impresentable si queremos defender los fondos públicos.

En cuanto a la primera alternativa, no de-

ben olvidar Sus Señorías que el agricultor, en el proceso de enriquecimiento de la dotación de la maquinaria en el campo, junto a la clasificación de maquinaria agrícola del censo que realiza el Ministerio de Agricultura que antes les he citado —y les recuerdo que son tractores en su variedad de oruga o ruedas de goma, cosechadoras, trilladoras y motocultores— hay un componente hoy en día en la explotación agraria, que es el vehículo todo terreno con motor de gas-oil. Los usos y abusos de estos vehículos con motor de gas-oil son una realidad concreta, y una Administración responsable, sea del signo político que sea, de un erario público, debe intervenir para evitar esa desviación fraudulenta.

Quiero llevar al ánimo de Sus Señorías que todos debemos comprender que resulta tremendamente dificultoso, por no decir que está en cotas de lo imposible, llevar un control exhaustivo de agricultor por agricultor y de explotación por explotación del uso que haga de su vehículo todo terreno o de cualquier otro vehículo no catalogado como maquinaria agrícola, que por la tecnología sustitutoria del motor de gasolina se está produciendo en el mundo del motor de explosión dirigido hacia el motor Diesel. No podríamos ni disponer siquiera de todo un equipo de guardería rural o forestal para estar haciendo una labor policial de saber quién carga con gas-oil agrícola subvencionado por el Estado su motor Diesel de gas-oil que no está destinado a una finalidad agrícola pura.

Comprendo las razones e inquietudes que han movido a los señores Senadores del Grupo Socialista a hacer partícipe a esta Alta Cámara de su preocupación, por lo que se lo agradezco, y les puedo ratificar que es una preocupación que siente hondamente también el Departamento de Agricultura y cómo, en mi calidad de Subsecretario, custodio y vigilante de la aplicación del Presupuesto, me preocupan tremendamente todas las desviaciones atípicas si saltan cualquier franja de seguridad de las estadísticas en los fondos de que ha podido disponer el Departamento en 1979 para la subvención del gas-oil agrícola: cinco pesetas con cargo a un fondo de 5.000 millones de pesetas. Teóricamente, Señorías, teóricamente nada más, la operación era muy

sencilla si se tomaban en cuenta solamente tres parámetros: primero, el número de motores Diesel empleados en la agricultura (730.000, como les he dicho hace un momento en mi intervención); segundo, estimación estadística del número horario de funcionamiento de esa maquinaria; tercero, el componente en pesetas económicas, cinco pesetas litro y 5.000 millones de fondo para subvencionar esta operación. Pero esta operación ha de ser controlada con unos criterios de rigor. La Intervención Delegada de Hacienda en el control del Presupuesto, Señorías, no permite hacer ninguna estimación estadística en que las cifras de compromiso de gasto queden por encima de la cantidad presupuestariamente aprobada. Este es un dato de la Ley General de Presupuestos que Sus Señorías conocen perfectamente. Podemos hacer una programación de inversiones que sea igual o esté por debajo del total del montante económico del concepto presupuestario. Lo que no nos tolera la Intervención Delegada de Hacienda, y ésta es la fiscalidad legal que le corresponde, es hacer una estimación por un valor por encima de la consignación presupuestaria. De aquí que en la experiencia de 1979 hubiera que adoptar unos criterios eminentemente restrictivos.

¿Cómo se instrumentó en el Ministerio de Agricultura, en 1979, a partir del mes de julio, el procedimiento para llegar a eso? En síntesis, se convocaron unas mesas de trabajo en las que, junto a expertos y técnicos del Departamento de Agricultura, estuvieron los representantes de las agrupaciones empresariales y sindicales, cinco en total, para consultarles sobre cuál era la fórmula adecuada para ello.

En los meses anteriores, un equipo de trabajo del Centro de Documentación y Gabinete de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de la Promoción Agraria del Departamento estuvieron manejando las distintas alternativas que se pueden utilizar en la fórmula de hacer llegar al agricultor la subvención correspondiente aprobada por el Gobierno.

Se habló, Señorías, del uso de tarjetas de crédito especiales, dadas a los agricultores, en sustitución —el señor Picazo se ha referido a ello— de la cartilla agrícola, documen-

to complejo y que tiene que tener otras finalidades. El uso de la tarjeta, de alguna manera llamada de crédito, fue desechado por imposible.

Se manejaron cuestiones, desde ese punto de control exhaustivo hasta el surtidor libre. Precisamente la práctica del surtidor libre al agricultor que llegaba a cargar gas-oil agrícola era la que, por culpa de una banda de irresponsables, de un sector no presentable a una sociedad que tiene que defender su Presupuesto, y si queremos emplear un calificativo más literario, de un sector dedicado a la picaresca, había producido las desviaciones fraudulentas, porque no había nada que pudiera significar un control de equidad entre el gas-oil que pedía determinado agricultor, que se le despachaba en el puesto de combustible, y el que realmente estaba aplicando en su maquinaria agrícola.

No nos olvidemos tampoco, Señorías, de que en el fondo de toda esta subvención —criterio muy debatido en el campo de las subvenciones agrícolas— estamos en presencia de una auténtica política de subvenciones, creando, por tanto, precios políticos en los productos de consumo procedentes del campo.

Las alternativas que se presentaron fueron simplificadas por la Dirección General de la Promoción Agraria, ofreciendo a la mesa consultiva y de trabajo cuál era la realidad de las subvenciones en distintos países de la Comunidad Económica Europea. Y esto porque estábamos —vuelvo a repetirlo— incidiendo en la creación o en el mantenimiento de un precio político.

Pero de lo que sí hemos sentido responsabilidad es de no generar, a través de una política plenamente aceptada por administrados agrarios y Administración, un precio agrícola, de dar un producto subvencionado, pues no por ello se iba a hacer abandono y dejación de la responsabilidad de evitar la banda de desviaciones o la franja de desviaciones que se dan por actuaciones fraudulentas o por uso o aplicaciones fraudulentas de este gas-oil, cada vez más caro en el consumo español.

En estos momentos el grado de subvenciones al gas-oil agrícola que existen en cinco países de la Comunidad Económica Euro-

pea fluctúa entre 0,50 pesetas para Bélgica, aproximadamente, y 18 pesetas para un Estado comparativo como es la República Helvética Suiza.

Lo que sí es cierto es que una vez aplicados los descuentos que al agricultor le supone la subvención del Estado, España en estos momentos resulta con la cifra más baja en costes del gas-oil agrícola, concretamente para el agricultor 14 pesetas, descontadas las cinco en la facturación de 19 que en el surtidor y en la facturación de CAMPSA se realiza de este gas-oil.

También es cierto que existe un componente encubierto —y de esto quiero informar a Sus Señorías— de subvención adicional al gas-oil agrícola. El precio de facturación del gas-oil agrícola en este momento en España, por parte de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, es de 21,80; si se está vendiendo libremente en surtidor como gasóleo B a 19 pesetas, tenemos ahí 2,80 pesetas de subvención encubierta que de cualquier manera va a costa del erario público o de una imposibilidad o restricción de recaudación de unos fondos que en manos de ese erario y en manos de un Parlamento, a la hora de aprobar un Presupuesto General del Estado, podían estar dedicados por lo menos a alternativas de ejecución de obras de inversión generadoras de empleo en el sector agrario; y digo esto con el más profundo sentido crítico de responsabilidad y convicción.

Los criterios que se llevaron a esta mesa de discusión fueron al principio planteados sencillamente en otorgar la subvención por potencia de tractor. Los cuadros estadísticos del censo de maquinaria agrícola de 1978, últimos editados por el Ministerio de Agricultura, junto a la clasificación de esta maquinaria, daban su potencia en caballos de vapor. Era relativamente fácil, con el uso de ordenadores, permitir al Ministerio de Agricultura encontrar la correlación potencia de la máquina o potencia del motor con la correspondencia de la cantidad expresada en litros, hectárea y año, y traducida a pesetas, multiplicado por cinco, que le deberían llegar al agricultor.

La distribución de estos 5.000 millones se plantea, pues, otorgando la subvención por

potencia de tractor, pero fueron las agrupaciones y organizaciones profesionales agrarias las que desaconsejaron al Ministerio de Agricultura emplear este sistema. En honor a la verdad, quiero decir que posteriormente, a la vista de las tremendas dificultades que se han encontrado para hacer llegar adecuadamente en forma y tiempo estas subvenciones —como bien recoge la propia pregunta oral de los señores Senadores del Grupo Socialista que la han formulado—, las propias agrupaciones reconocieron que había habido un error de comprensión por falta de experiencia en instrumentar algo tan complicado como es hacer llegar de una u otra manera, a través de una intervención delegada de Hacienda, hasta la última intervención que se produzca en una provincia, nada más ni nada menos que a 730.000 máquinas consumidoras este gas-oil. El problema del espacio de tiempo no tiene otra explicación que esta dificultad instrumental que hubo a lo largo de todo el año 1979.

Estas agrupaciones agrarias solicitaron del Ministerio de Agricultura un sistema que, creyendo ellas que era el que tenía mayores garantías, y de hecho así lo es, para evitar estas desviaciones atípicas y fraudulentas, ha significado una mayor complejidad. Hubo que preparar inclusive todo un programa del ordenador para poder digerir y admitir todas las distintas variantes que a lo largo y a lo ancho de la tan diversificada estructura de la explotación agraria española nos íbamos a encontrar.

Se pidió, y aquí entro en la vía de la contestación concreta a los señores Senadores preguntantes, que se tomaran datos relativos a la explotación, dimensión de la misma, proporción de superficie de secano y de regadío. Todo eso motivó diseñar una encuesta que se envió a través de las Cámaras Agrarias provinciales para que fuera cumplimentada por las mismas y por todos los agricultores.

Han tenido que transcurrir, Señorías, más de cinco meses para que el Ministerio de Agricultura tuviera en su poder una cantidad significativa estadísticamente del orden del 75 por ciento de los listados de ordenador remitidos por las Cámaras Agrarias provinciales. Se refería el Senador don Andrés José Picazo a que algunas Cámaras Agrarias, al

día de esta fecha, no habían podido cumplimentar este tema.

El Ministerio de Agricultura ha venido insistiendo reiteradamente en los últimos meses de 1979 y los primeros de 1980 para que las Cámaras Agrarias, dentro de la responsabilidad que tienen como corporaciones de derecho público de prestación de servicios al agricultor, agilizaran toda la instrumentación humana, personal, mecánica y financiera encaminada a poner a disposición los créditos, porque prácticamente cuando el Ministerio de Agricultura tuvo más del 50 por ciento de los listados conformados por las Cámaras Agrarias se dio la orden por la Subsecretaría de hacer las transferencias reales de capital a las distintas provincias y a sus Cámaras Agrarias a través del Banco de España. Y cuando se estaban alcanzando unas cifras entre el 90 y el 95 por ciento de la disponibilidad ya transferida de los 5.000 millones de pesetas a las provincias, nos encontramos con la realidad de que las Cámaras Agrarias, por problemas o procedimientos burocráticos, por corrección de listados, por asambleas, etc., estaban en una situación de dificultad de conseguir entregar el cheque final del pago que, de acuerdo con estos baremos establecidos, que después detallaré, le correspondía a cada agricultor.

Para 1980 el Ministerio de Agricultura ha adoptado la línea de no dar ningún paso atrás, buscando utópicamente modelos de sencillez que no existen —lo repito, modelos de sencillez que no existen—, porque ese punto de la subvención, por esa vía, no es una subvención a los fabricantes ni es una subvención en precios finales como un simple asiento contable, ya que aquí estamos manejando físicamente 5.000 millones de pesetas. No estoy hablando de asientos contables, como anteriormente hacía la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos que facturaba en surtidor ya con este descuento, por las razones de desviación y de fraude que he señalado y reiterado a Sus Señorías.

Hecha toda esta labor analítica por ordenador de las encuestas mandadas a las Cámaras Agrarias, se adoptó, de acuerdo con las normas internacionales de baremos de consumo de gas-oil en maquinaria agraria, un cuadro que puede haber tenido determi-

nadas desviaciones atípicas que no tienen más diagnóstico que la falta de virtualidad o realidad o errores en la toma de datos en base agrícola para contabilizar la potencia del tractor, las dimensiones de la explotación y el concepto de si la explotación era de secano o era de regadío.

Les quiero adelantar que las explotaciones de regadío se incrementarán en 1980 en un 20 por ciento sobre la subvención tipo establecida por cultivo. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*)

La gama de actuaciones que en este momento tiene el Ministerio de Agricultura, hecha de acuerdo con estas Confederaciones, escuchando su parecer y tratando de meter esos pareceres en un programa de ordenador (lo que no ha resultado muy fácil y en algunos casos algunas propuestas sencillas no era posible canalizarlas por ordenador), ha llevado a un parámetro de medidas que están a disposición de los señores Senadores en toda su extensión (porque no quiero abrumar a la Cámara con unas secas cifras) y van desde las 50 pesetas hectárea, litro y año por viñedo (doy cifras litro, hectárea, año y con relación a cultivos) hasta las 200 en cultivos mecanizados de hortalizas, bien porque estén mecanizados, desde un punto de vista de la tracción física de la máquina, o porque tengan quemadores de gas-oil para conseguir temperaturas correlativas a la producción agrícola en invernaderos. Cifras medias en cultivos de arroz, 140; en oleaginosas, 100; en cítricos, 85; en frutales, 60, etc.

Efectuado todo este proceso con ordenador, se han elaborado las subvenciones correspondientes a cada explotación agrícola este año, y quiero traer aquí un mensaje de tranquilidad a Sus Señorías en el sentido de que la dificultosa experiencia recogida a lo largo de 1979 (hechos los programas de ordenador) permite ya una agilidad mucho mayor, superada esta inexperiencia, a lo largo de 1980.

Fundamentalmente se van a dirigir unas atenciones especiales de incremento para las zonas de praderas naturales, frutales intensivos, en regadíos que afectan especialmente a provincias como Lérida, Huesca, Gerona, Baleares, Murcia, etc., todas con una gran base hortofrutícola, y los cultivos de regadío de remolacha, forrajeros y patatas en las

provincias de las zonas del centro y del Duero.

En síntesis, ésta es, digamos, una explicación somera de las tremendas dificultades instrumentales, que no han sido debidas a ninguna voluntad de entorpecimiento, porque había que emplear una cantidad de 5.000 millones. Creo que de alguna manera he dado una imagen de, cuando se trata de promocionar un nuevo instrumento de subvención, hacerlo garante, con todas aquellas exigencias de honestidad presupuestaria y de correcta aplicación.

¿Que en determinadas explotaciones y a determinados agricultores, como ha señalado el Senador don Andrés José Picazo, no han llegado las cantidades que ellos estimaban sobre cifras de 1980? Este es un caso que entra en las clásicas vías de la reclamación administrativa, de dirigirse a la Administración, porque todo listado hecho por los procedimientos de 1979 implica un porcentaje de error, pero preferimos un error subsanable que una desviación fraudulenta de los Presupuestos del Estado, que son los intereses de la nación.

Muchas gracias, Señorías.

El señor PRESIDENTE: El Senador Picazo tiene la palabra para replicar por tiempo de dos minutos.

El señor PICAZO GONZALEZ: Lo primero que quiero es agradecer al señor Subsecretario esas cifras que ha dado, pero me he quedado más asustado que al principio, como representante de una organización agraria, porque si, efectivamente, con toda la complejidad que ha anunciado, ahora nos hemos visto en una serie de riesgos tan grandes para cobrar, en el futuro me temo que no van a cobrar los agricultores, habida cuenta de la edad que tienen, antes de jubilarse.

Pero lo que más me sorprende es que hable el señor Subsecretario de que escuchan en las mesas de trabajo a las organizaciones agrarias. Las escuchan, pero no las oyen, y esa es la pena.

Y quiero decirle otra cosa, y es que si esa complejidad de mecanización les ha llevado a esos otorgamientos, yo le digo que sí, que hay procedimientos sencillos que son los que las organizaciones agrarias quieren. Lo que ocurre es que cuando habla de desviación se ha olvidado de decir que el gas-oil agrícola

se emplea también para calefacciones y con bastante abundancia.

Y, finalmente, cuando utiliza criterios internacionales se olvida de que no todas las administraciones de otros países son como la nuestra, afortunadamente para ellos, porque dejar en manos de las Cámaras Agrarias y otras organizaciones este tinglado trae los resultados que tenemos a la vista.

Por tanto, le digo sinceramente que me he quedado asustado y deseo que no nos pase nada en el presente ejercicio.

El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra para intervenir de nuevo.

El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA (Mardones Sevilla): Brevemente, señor Presidente, nada más para decir, tanto al señor Senador presentante de la pregunta oral, como a cualquier otro que sea capaz de tener una fórmula magistral para instrumentar con mayor agilidad toda esta distribución de las subvenciones de gas-oil, que el Ministerio de Agricultura, el Servicio de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría y de la Dirección General de la Producción Agraria, están abiertos para adoptar esa fórmula.

Pero vuelvo a tranquilizar al señor Senador y a todas Sus Señorías. Los sistemas de instrumentalización en 1980 están más perfeccionados y serán más rápidas las entregas de estas subvenciones dentro de todas las garantías cautelares que esto exige.

Vuelvo a insistir en que si hay una fórmula admisible y transparente de honestidad ante toda la sociedad de la distribución ágil y rápida de las primas, el Ministerio de Agricultura la hará suya con todas las consecuencias positivas.

Muchas gracias.

— SOBRE REDUCCION DE LAS LINEAS DE LA COMPAÑIA TRANSMEDITERRANEA RESPECTO A CANARIAS DE DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO (DEL GRUPO UNION DE CENTRO DEMOCRATICO).

El señor PRESIDENTE: Volvemos atrás para conocer la pregunta que figura en pri-

mer lugar en el punto segundo del orden del día, cuyo titular es el Senador don Vicente Alvarez Pedreira, del Grupo de Unión de Centro Democrático, sobre reducción de las líneas de la Compañía Transmediterránea respecto a Canarias, publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de fecha 1 de febrero de 1980.

Tiene la palabra el señor Alvarez Pedreira, por un tiempo máximo de cinco minutos, como sabe.

El señor ALVAREZ PEDREIRA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, señor Ministro, el hecho insular canario, reconocido en la Constitución, encierra realidades geográficas de lejanía y aislamiento que condicionan a los habitantes de las islas que sienten imperiosamente la necesidad de contar con unas comunicaciones rápidas, económicas, eficaces, que unan el territorio canario, y éste, a su vez, con el resto del territorio nacional.

Ello explica suficientemente el que los Senadores de Unión de Centro Democrático de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuando en el mes de noviembre de 1979 comprobaron una reducción en las líneas de la Compañía Transmediterránea que unían Canarias con la Península, preguntaran al Gobierno si conocía esta reducción y qué medidas se iban a adoptar para paliar las graves dificultades y los perjuicios que entrañaba.

Efectivamente, en el mes de noviembre de 1979, se observaban en relación con la situación anterior las siguientes modificaciones:

En lo que se refiere a la línea Cantábrico-Canarias, se había pasado de tres barcos a dos, y se había pasado de admitir carga y pasaje a admitir sólo carga. En la línea Barcelona-Canarias, de tres barcos anteriores, se había pasado a que no existiera ningún barco en ese servicio, se había suprimido la línea y, por tanto, no se admitía carga ni pasaje. Y la línea Sevilla-Canarias, anteriormente atendida por un barco semanal que admitía carga y pasaje, también se había suprimido al no tener ningún barco asignado.

Es cierto —y lo reconocemos— que desde la fecha que presentamos la pregunta, —noviembre de 1979, insistimos— hasta el día de hoy, por el interés puesto en resol-

ver esta cuestión por el Ministro de Transportes, secundado por la propia Compañía Transmediterránea, se han adoptado una serie de medidas, una serie de actuaciones, se han hecho una serie de gestiones y de promesas que conjuntan, de una parte, las realizaciones conseguidas, y de otra las gestiones que se encuentran en marcha. Parece ser que con una perspectiva de futuro esto nos va a traer un servicio más eficaz y completo que el que anteriormente estaba establecido.

En este sentido, digamos que, en primer lugar, el problema de la carga está totalmente resuelto por cuanto a la oferta existente de la propia Compañía Transmediterránea se ha unido la autorizada a otras compañías navieras privadas que cubren suficientemente la demanda.

En lo que se refiere a la línea Cantábrico-Canarias, la reducción de escalas con supresión de aquellas de ínfimo rendimiento hace posible que en la actualidad el servicio pueda ser atendido de mejor manera con dos barcos que anteriormente con tres.

Por otra parte, existe la promesa formal de la Compañía Transmediterránea de sustituir los actuales barcos por dos barcos «multipurpose» que van a hacer posible unir el continente con Canarias pasando por el Cantábrico y por Portugal.

En lo que se refiere a la línea Barcelona-Canarias, existen también gestiones muy avanzadas para asignación de dos barcos «multipurpose» que van a hacer posible atender a las necesidades de carga desde Barcelona a Canarias y desde Valencia a Canarias.

Pero, además de ello, vamos a completar las líneas Cádiz-Canarias y Alicante-Canarias que ha sido reforzada últimamente con el fletamento de tres barcos.

En lo que se refiere a las necesidades de la línea desaparecida Sevilla-Canarias, ésta queda compensada por la mejora establecida en la línea Cádiz-Canarias que está atendida por dos ferrys que permiten tres salidas conjuntas semanales, dos cada día en los meses de verano, y que constituyen un puente marítimo óptimo para la navegación de personas y vehículos desde Canarias a Cádiz.

Vemos, por tanto, que desde la presentación de la pregunta hasta el día de hoy se

han adoptado una serie de acciones, hay una serie de promesas de actuaciones futuras que van a hacer posible mejorar el servicio de Canarias con la Península. Pero tenemos que hacer constar aquí, en el día de hoy, que con esta fecha, precisamente esta mañana, nos hemos visto sorprendidos con el anuncio de que a partir del 1 de mayo, y de acuerdo con lo publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día de ayer, van a aumentarse las tarifas entre Canarias y la Península en una cantidad aproximada al 20 por ciento.

Entendemos que este incremento de tarifas (y lo vamos a decir en primer lugar) no puede estar nunca justificado en la mejora del servicio, y no puede estar justificado por ello porque, en primer término, hemos dicho que esta mejora no está totalmente consolidada; pero es que, además, todas las actuaciones que se han adoptado han ido encaminadas a lograr una mayor rentabilidad en el servicio y, en consecuencia, pensamos que se va a producir un mayor costo. Sin embargo, parece un contrasentido que la mejora del servicio Canarias-Península pueda entrañar una mejora también en los costos de las tarifas, en los precios, puesto que, en definitiva, se nos pone entonces en el dilema de no poder utilizar las mejoras, o, si se utilizan, ello es con grave perjuicio para la economía canaria.

Tengamos en cuenta que todos los estudios relativos a la situación económica canaria que se están haciendo en este momento hablan incluso del establecimiento de una prima de penetración que compense los gastos de transporte de los productos, que permita colocar los productos canarios en la Península sin este incremento, sin este sobreprecio del gasto de transporte, y, en contra de esta necesidad, lo que se establece es un aumento en el precio del transporte. No se crea la prima de penetración, pero, por el contrario, se suben las tarifas del transporte de Canarias con la Península.

Vuelvo a aludir a lo que decía al principio, al hecho insular canario, que encierra lejanía y aislamiento, lo que trae consigo fundamenta un trato preferencial en materia de transporte. Por ello, nosotros aprovechamos esta ocasión para solicitar del señor Ministro de Transportes y Comunicaciones

que reconsidere la medida adoptada en orden a la subida de las tarifas de los servicios marítimos de Canarias con la Península.

Termino insistiendo en mi agradecimiento al señor Ministro por la preocupación en mejorar los servicios marítimos con Canarias. Muestro mi satisfacción ante las acciones adoptadas y me permito, asimismo, pedir el reforzamiento del servicio interinsular como una consecuencia de la mejora en el servicio Canarias-Península. Hoy en día las Islas pueden ser perfectamente comunicadas entre sí a través de buques ferrys. La Transmediterránea tiene en proyecto la adquisición de dos ferrys para realizar este servicio. La adquisición de estos ferrys va a hacer posible que no se distraigan buques destinados al servicio Canarias-Península para realizar este servicio y que tampoco se distraigan del puente marítimo Tenerife-Las Palmas, que resulta inoperante por no saberse en la actualidad ni las horas de salida ni las de llegada. Si dedicamos estos dos ferrys al servicio interinsular, garantizamos un excelente servicio del mismo y, al mismo tiempo, al no distraer estos buques del servicio Canarias-Península, el mismo se mejora.

Por último, ya dentro de todas estas peticiones que estamos haciendo en orden a este servicio, reiteramos de nuevo se estudie, se vea la posibilidad de reconsiderar la decisión adoptada de incrementar las tarifas del servicio Canarias-Península.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Transporte y Comunicaciones para responder en nombre del Gobierno.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (Sánchez-Terán Hernández): Señor Presidente, Señorías, contesto con sumo gusto a la cuestión formulada por el Senador Alvarez Pedreira en nombre del Grupo de Senadores de UCD de la provincia de Tenerife.

Son ciertos los datos que ha dado, que más que un aspecto negativo indican la dinámica de una reestructuración para un mejor servicio de los transportes marítimos que efectúa en las Islas Canarias la Compañía Transmediterránea.

Es cierto el mandato constitucional sobre la consideración especial al carácter de insularidad, y creo que mi Ministerio ha asumido en el caso de las Islas Canarias, y también en el de las Baleares, el significado de lo que representa, en materia tan importante como la de los transportes, esta insularidad. De ello creo que es una prueba, no definitiva, sino una prueba dinámica de un proceso que avanza, mi visita reciente, con el equipo de mi Ministerio, a las Islas Canarias.

Circunstancialmente, mi intervención ante el Senado con motivo de esta pregunta coincide con la aparición en el «Boletín Oficial del Estado» de las tarifas de la Transmediterránea, Compañía que ha llegado a tener unos déficits superiores a los cuatro mil millones de pesetas. La Transmediterránea está siendo objeto de atención especial por parte del Ministerio en una línea de transformación de los servicios, de mejora de su material, con una modernización de su flota de buques y, también de una actualización de sus tarifas.

En el período en que la Compañía Transmediterránea estuvo en la situación intermedia de pase del sector privado al sector público, durante más de tres años las tarifas no se alteraron. A pesar de la subida que ayer se anunciaba en el «Boletín Oficial del Estado», las tarifas de la Transmediterránea para 1980, a pesetas constantes, son inferiores a las del año 1975. Creo que es uno de los pocos servicios en los que se puede dar este dato. Evidentemente, el desfase de estas tarifas había llegado a tal nivel, que no ya impedía el equilibrio financiero y económico de la Compañía, sino que llevaba a déficits crecientes. Por eso, junto a la reestructuración de servicios se está haciendo una paulatina adecuación de tarifas, con objeto de salvar el «gap» tarifario que se produjo durante más de tres años; los años de mayor elevación de los costes, de mayor inflación en la vida nacional, las tarifas de Transmediterránea estuvieron congeladas y eso repercute en sus resultados.

Evidentemente, en un 50 por ciento este déficit es imputable como aportación al tráfico marítimo en las Islas Canarias, tanto con

la Península como en los servicios interinsulares.

He dado esta explicación porque, si bien nunca es grato subir las tarifas, es uno de los deberes de quien tiene la responsabilidad de ejercer la dirección de importantes servicios públicos y vemos con frecuencia cómo la degradación de estos servicios se produce cuando no hay la suficiente energía o responsabilidad en quien tiene misiones directivas para adecuar las tarifas.

Paso a contestar a las cuestiones específicas que el señor Senador, en nombre de Senadores de UCD tinerfeños y en el del sentimiento de los Senadores canarios, ha planteado sobre los servicios de Transmediterránea.

En primer lugar plantea el Senador la línea Canarias-Cantabria. Bien, esta es una línea básicamente de carga y no de pasaje. Los ingresos por carga fueron en el año 1978 de 163 millones de pesetas y los de pasaje de 26 millones. A lo largo de todo el año sólo 2.208 pasajeros en un sentido y 2.300 en otro utilizaron esta línea y cada vez iban descendiendo los porcentajes de utilización.

Evidentemente, esta es una línea —y así sigue la tendencia de todo el transporte marítimo— no de pasajeros, que en largas distancias ya no se está utilizando el pasaje en transporte marítimo, sino una línea de carga, y la servidumbre de ser considerado como línea de pasaje exigía unas prestaciones de personal verdaderamente ruinosas: 326 millones de pesetas de gastos de personal anuales. Junto a esto, el que tocara tantos puertos en el Cantábrico llevaba unos gastos portuarios excesivos: del orden de 162 millones de pesetas.

Creo que hasta en el informe que hizo sobre esto la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de las Islas Canarias se admitía esta realidad, y la línea que se está siguiendo con el tráfico de Canarias-Cantábrico es la supresión del pasaje (con lo cual se reducen los ingresos en 26 millones de pesetas, pero los gastos en 163 millones, er una línea cada vez menos utilizada) y sustituir los tres buques convencionales que había por dos buques no convencionales con el propósito de mejorar la capacidad de carga de esta línea.

Nuestro propósito es sustituir los buques convencionales por buques «multipurpose», con lo cual mejorará la calidad de esta línea, que, además, queremos que pase no sólo por el Cantábrico, sino por Portugal, Madeira y Canarias, con lo cual mejorará la calidad de la prestación de los servicios. Es, por tanto, una reestructuración, suprimiendo los servicios de pasaje, que eran prácticamente poco utilizados e innecesarios, por una mejora en la calidad de los servicios de carga.

En cuanto a la línea Canarias, Mediterráneo y Sur Canarias el planteamiento es el mismo: tres mil pasajeros en un sentido, dos mil en otro, indicaban la escasa utilización de esta línea. Los costes de personal que verdaderamente gravan son los de restauración y atención al viajero, innecesario mantenerlos a lo largo de todo el año con estos elevados grados de ocupación, y la línea, como la anterior, se especializa en el criterio de suprimir el pasaje y mejorar los barcos, pasando de buques convencionales a buques «rorrós» de Cádiz y Alicante con Canarias, y nuestra idea es que el servicio con Barcelona y Valencia sea hecho con barcos especializados «multipurpose».

Igualmente podríamos decir de la línea Canarias-Sevilla-Canarias. Evidentemente ha habido una excelente comunicación de carretera y ferroviaria entre Cádiz y Sevilla y los buques especializados son mucho más eficaces para el transporte, y más rápido, que lleguen al puerto de Cádiz, y este es el motivo de la supresión de esta línea.

En síntesis, señoras y señores Senadores, no se trata de una reducción del servicio, no es una supresión, sino una reestructuración en la línea de mejorar la calidad de los servicios de las Islas Canarias con la Península, así como de los servicios interinsulares.

Por no abrumarles con excesivas cifras y datos técnicos haré una síntesis del mismo.

Los servicios de carga de las Canarias con la Península estaban servidos por cinco buques convencionales de más de veinticinco años de edad. Se han modificado estos servicios; hoy hay tres «rorrós» para el servicio con Cádiz y Alicante, dos «multipurpose» en línea de adquisición para el tráfico con Barcelona y Valencia y dos convencionales, que

se sustituirán por «multipurpose» para la línea del Cantábrico.

En resumen, la capacidad de oferta de carga, que es el dato que verdaderamente debe interesar, de las Islas Canarias con el Mediterráneo se ha incrementado en un 50 por ciento; con el Cantábrico, en un 20 por ciento; con Cádiz, en un 400 por ciento, y con Alicante, en un 700 por ciento. Si a esto añadimos que los viejos buques tradicionales y convencionales se están sustituyendo por buques «rorrós» y «multipurpose», es evidente una mejora en la realidad del servicio.

En cuanto al servicio de viajeros con la Península, suprimido el tráfico de pasaje de las innecesarias líneas con el Cantábrico y el Mediterráneo, se ha concentrado el servicio en el eje Cádiz-Canarias con el puente marítimo servido por los dos buques tan conocidos por los canarios: el «J. J. Sister» y el «Soto». La prueba de la mejora de esta calidad es que hoy tenemos un servicio alterno en la época intensiva que ha aumentado su capacidad de oferta en enlaces en un 33 por 100, y muestra de su utilidad es el hecho de que en la época punta de verano llegan a grados de ocupación superiores al 60 por ciento. Y en cuanto a los importantes servicios interinsulares entre las diversas Islas Canarias, un criterio básico: todo ello se va a establecer, y en un plazo breve, con servicios tipo ferry.

Entendemos que esto es lo que redonda en beneficio de un tráfico más fluido, más eficaz, de cara a los pasajeros con sus vehículos.

Está en servicio el puente marítimo Las Palmas-Santa Cruz de Tenerife con el «Ciudad de La Laguna» y el «Ciudad de Zaragoza», que se extiende a las islas menores, a las islas de Fuerteventura y de Lanzarote. Pero faltan dos ferrys —como muy bien decía, perfectamente conocedor del tema, el Senador Alvarez Pedreira— para completar el ciclo de servicios ferrys interinsulares. Uno de ellos esperamos contratarlo cuando acabe la temporada de verano, bajen los costes y bajen los precios, y el otro he asumido también públicamente el compromiso en las Islas Canarias de incorporarlo a la Transmediterránea.

No cito, por no abrumar a Sus Señorías,

las cifras de incremento con esta reestructuración en los servicios interinsulares, tanto en capacidad de viajeros como, sobre todo, el incremento espectacular en capacidad del tráfico de vehículos, que es una mejora importante de los servicios.

Estamos, en síntesis, señoras y señores Senadores, señor Senador que ha efectuado en nombre de sus compañeros la pregunta, en una importante reestructuración de los servicios de la Transmediterránea, tanto en el interinsular como en sus relaciones de pasaje y carga con la Península, en una línea dinámica, cuyos resultados hasta el presente estimo que son positivos y que faltan ser concretados con buques especializados, como los que he dicho, para la carga con la Península y con el complemento de los dos nuevos buques ferrys para el servicios interinsular.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Para réplica tiene la palabra el Senador Alvarez Pedreira.

El señor ALVAREZ PEDREIRA: Para agradecer al señor Ministro, reiterándole el agradecimiento anterior, todas las gestiones realizadas para una mejora del servicio marítimo con las Islas Canarias. Confío en que se complemente la reestructuración, que se lleve a cabo y que se vea la posibilidad de compensar el incremento de tarifas recientemente acordado con algún tipo de subvención, si es posible, dada la importancia que el transporte marítimo tiene para las Canarias.

— DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE PLANES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA AUTONOMIA DE CASTILLA Y LEON.

El señor PRESIDENTE: El señor Arévalo Santiago expondrá ahora su pregunta sobre planes del Gobierno en relación con la autonomía de Castilla y León, según fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de fecha 15 de marzo pasado.

Tiene la palabra el señor Arévalo Santiago.

El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, anteayer el pueblo castellano-leonés celebró el Día de la Región, pese a todos los malos augurios y a todos los temores que se habían inculcado al propio pueblo para que celebrara este día, temores y augurios de los que tiene gran parte de culpa el partido del Gobierno, mayoritario en el Consejo General de Castilla y León, que se inhibió del Día de la Región, como se ha inhibido durante este tiempo de otras muchas cosas.

Me interesa saber, para que los ciudadanos de la región castellano-leonesa tengan un conocimiento inmediato, cuál es la opinión que tiene el Gobierno sobre la autonomía de Castilla y León; qué pretensiones tiene el Gobierno; por qué el partido del Gobierno en la región está mostrando tal cantidad de contradicciones que es imposible saber lo que la propia UCD allí piensa.

Queremos saber cuál es la interpretación que se hace en cuanto a las instituciones regionales, si se piensa que debe de existir una asamblea legislativa y elegida por representación proporcional o si la interpretación del humanismo significa dar el voto a las hectáreas y no a las personas.

Es necesario que el Gobierno se manifieste sobre esto, porque dentro de la región la organización regional de UCD se ha manifestado por la igualdad en la representación de las provincias y miembros muy distinguidos del partido del Gobierno se han manifestado por la representación proporcional. Aclárenos, entonces, desde el Gobierno qué es lo que se pretende, cuál es el proyecto sobre la autonomía de Castilla y León, si es que el Gobierno tiene algún proyecto sobre la política autonómica.

Se han amontonado los obstáculos durante todo el proceso, desde hace seis meses hasta ahora, en que ha concluido el plazo en que los Ayuntamientos deberían manifestarse en su adhesión al proceso autonómico; se ha utilizado una dinámica de obstáculos que ha impedido que terminara este plazo con la adhesión de todas las provincias.

En mi pregunta escrita se hace una referencia a la provincia de León, que a última hora se ha incorporado, pero queda pendien-

te el problema de Segovia, y el problema de Segovia no es un problema del pueblo de Segovia, ni es un problema de la Unión de Centro Democrático de Segovia, sino que es un problema del Partido del Gobierno. Queremos que se nos conteste de una vez por el Gobierno qué es lo que piensa sobre el caso concreto de Segovia: si lo va a dejar descolgado como una provincia de Derecho común o si va a arbitrar algún procedimiento y nos va a hacer alegaciones de Estado para que detengamos de nuevo el proceso autonómico. Qué es lo que piensa de Segovia, cuando en Segovia se dice una cosa y el Presidente del Consejo General de Castilla y León, distinguido miembro de Unión de Centro Democrático, que ha pasado dos años predicando la unión de los hermanos separados, vuelve hace unos pocos días a decir que no comprende cómo Segovia no se une al proceso autonómico —se refería, naturalmente, a la Unión de Centro Democrático de Segovia, no a Segovia—; pero es que, al mismo tiempo, se nos dice desde otros altavoces del Partido del Gobierno que Segovia lo tiene que pensar mejor.

Señores del Gobierno, lo que interesa es claridad, lo que interesa es que, de una vez se nos diga qué es lo que se pretende: si Segovia se utiliza como arma arrojadiza contra la autonomía de Castilla y León, como se han venido utilizando otros artilugios durante estos meses, o si el Gobierno está dispuesto a que la Región Castellano-Leonesa vaya adelante con su autonomía, y para cuándo.

En Villalar de los Comuneros se han concentrado en llamada popular, se han citado mutuamente los ciudadanos; allí se han reunido para exigir su autonomía, los derechos que corresponden a Castilla y León... Castilla y León, que me parece que está teniendo muy escaso eco en el propio Gobierno, que cuenta con tantos miembros nacidos políticamente allí ya desde hace bastante tiempo. Castilla y León no cuentan en absoluto con la ayuda del Gobierno en su etapa preautonómica, y mucho me temo que ahora tampoco.

¿Para cuándo, entonces, la autonomía de Castilla y León? ¿Está dispuesto el Gobierno a tomárselo en serio? ¿O es que el Gobierno lo que tiene es encendido permanentemente

un semáforo rojo como éste para impedir la marcha normal de la autonomía?

Nada más y muchas gracias. (*Aplausos en los bancos socialistas.*)

El señor PRESIDENTE: Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el Subsecretario del Ministerio de Administración Territorial, señor Uriarte.

El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (De Uriarte y Zulueta): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, es para mí un honor contestar y dirigirme a Sus Señorías en nombre del Gobierno, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de esta Cámara, y voy a tratar de contestar a las preguntas que formula el Senador por Valladolid, señor Arévalo Santiago, lo más escuetamente posible, y en el mismo orden en que han sido formuladas.

El señor Arévalo Santiago nos plantea cinco preguntas, que son las siguientes:

Primera: ¿Tiene el Gobierno alguna opinión sobre la autonomía de Castilla y León? Evidentemente, el Gobierno tiene una opinión sobre la autonomía de Castilla y León? Evidentemente, el Gobierno tiene una opinión sobre la autonomía de Castilla y León, y esa opinión no es ni puede ser otra que la del absoluto respeto a las normas constitucionales y, por lo tanto, la de absoluto respeto a la voluntad de las poblaciones de cada una de las regiones españolas. Esto se aplica a Castilla y León: yo diría que exactamente en los mismos términos, ni más ni menos que al resto de las regiones españolas. Son las provincias limítrofes de características comunes las que deben tomar la iniciativa para la constitución de una comunidad autónoma, según el artículo 143 de nuestra Constitución. Y la iniciativa para constituir esas comunidades autónomas corresponde, como saben perfectamente los señores Senadores, a las Diputaciones y Ayuntamientos y, en su caso, a los órganos preautonómicos; en este caso, al Pleno del Consejo General de Castilla y de León, que ha hecho uso de su facultad promoviendo la iniciativa autonómica.

La redacción de los estatutos tampoco corresponde al Gobierno, sino a las asambleas,

de distinta composición, según los casos, y la decisión suprema sobre el texto y la redacción definitiva de estos estatutos corresponden a las Cortes Generales. Por lo tanto, repito, la postura del Gobierno no puede ser otra en Castilla y León, como en cualquier otra región española, que de absoluto respeto a lo que decidan los organismos locales y regionales, tanto en cuanto a la creación como en cuanto al texto de los estatutos, si bien en cuanto a estos estatutos no es a esos organismos a los que corresponde la última palabra, sino, como es lógico, a las Cortes Generales.

La segunda pregunta que formula el Senador Arévalo Santiago es si está dispuesto el Gobierno a que Castilla y León cuenten con un Consejo Ejecutivo, una Asamblea legislativa de representación proporcional y un Tribunal Superior de Justicia. Como los señores Senadores saben, el artículo 147 de la Constitución dispone que los estatutos deben contener, en todo caso, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas. Cuáles son esas instituciones es algo que deben determinar los estatutos, y vuelvo a repetir lo dicho anteriormente: el Gobierno no interviene en la redacción de los proyectos de estatutos ni interviene en su redacción definitiva; su redacción definitiva corresponde a las Cortes Generales y, por lo tanto, será a estas Cortes Generales a las que corresponderá decidir cuáles son los órganos de la comunidad autónoma de Castilla y de León, no al Gobierno que, por tanto, no puede pronunciarse sobre este tema.

La tercera pregunta que formula el Senador Arévalo Santiago es, si tiene el Gobierno un mapa autonómico, dónde incluye a la provincia de León. Respecto a esta cuestión, hay que contestar que el Gobierno no tiene —hay que afirmar rotundamente que no lo tiene— un mapa autonómico porque, como acabamos de afirmar, la iniciativa para la formación de las comunidades autónomas le corresponde a las provincias limítrofes o, eventualmente, a las provincias con entidad regional histórica. Si existe, evidentemente, un mapa preautonómico: el determinado por el Real Decreto-ley de 13 de junio de 1978, ratificado por las Cortes, y en ese mapa preautonómico la pro-

vincia de León, efectivamente, no puede formar parte del Consejo General de Castilla y León, aunque de hecho no lo forme, porque para incorporarse a esa región es necesario, como los señores Senadores saben, la decisión de los dos tercios de sus parlamentarios. Por lo tanto, insisto, el Gobierno no tiene prejuzgado el lugar que corresponde a León en un futuro mapa autonómico español.

La cuarta pregunta que formula el Senador Arévalo es la de qué opinión tiene el Gobierno sobre la situación de Segovia. La expresión resulta un tanto ambigua. No sé a qué situación de Segovia se refiere el señor Senador, pero supongo que se refiere a la situación de Segovia en relación con la iniciativa autonómica de Castilla y de León. El Gobierno no conoce actualmente cuál es la situación de Segovia en relación con la iniciativa autonómica por una razón muy sencilla: porque el plazo para la conclusión del período de iniciativa terminó el día 26 de abril. Por tanto, el Gobierno no ha recibido todavía el expediente. Sin embargo, oficiosamente sí le puedo decir al señor Arévalo que la información de que el Gobierno dispone parece indicar que no se han completado los dos tercios de la provincia de Segovia —ni los dos tercios de los Ayuntamientos ni la mayoría del censo— a favor de la autonomía. Por lo tanto, la provincia de Segovia, si estos datos se confirman, quedaría voluntariamente excluida de la comunidad autónoma de Castilla y de León.

La postura del Gobierno respecto a este tema —y vuelvo a afirmarlo—, como en todos los casos anteriores, es una postura de absoluto respeto a la decisión expresada por las Corporaciones locales de la provincia de Segovia, y únicamente quiero expresar que el Gobierno considera que las corporaciones locales de la provincia de Segovia son tan representativas como las de cualesquiera otras provincias españolas.

Por último, la quinta pregunta trata de en qué lugar en el tiempo ha puesto el Gobierno a la autonomía de Castilla y de León. Ya he expresado que al Gobierno no le corresponde tomar la iniciativa en materia de autonomía ni determinar las características de esta autonomía, ni, por lo tanto, le corresponde tampoco urgir ni retrasarla. El expediente no se

ha recibido todavía por el Gobierno, y lo único que puedo expresar es que el Gobierno está dispuesto a convocar inmediatamente la asamblea para la elaboración del estatuto, supuesto que se cumplan todos los requisitos necesarios para la convocatoria de la misma. Insisto, por ello, en que el Gobierno no hace sino respetar la voluntad de las poblaciones expresada a través de las corporaciones locales de Castilla y de León. Nada más. *(Aplausos en los bancos de UCD)*.

El señor PRESIDENTE: El Senador señor Arévalo tiene la palabra, para rectificar, por un tiempo máximo de dos minutos.

El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, realmente el señor Subsecretario ha tenido que venir a cumplir una función de trámite para él, dada la situación que la política autonómica tiene en este momento en el Gobierno, y dado que no sabemos quién va a ser Ministro de Administración Territorial mañana. Realmente la situación es dolorosa; es doloroso que para Castilla y León no haya contestación de Ministro; no haya Ministros que se interesen seriamente por el asunto; que el Gobierno esté completamente en «off side» por el asunto de Castilla-León, así como por el desconocimiento que acaba de demostrar el señor Subsecretario respecto al caso de la provincia de León, que tiene ya solucionado su problema; no hay problema ya con la provincia de León, señor Subsecretario.

El que se nos haya dado aquí algunas explicaciones concretas sobre las relaciones constitucionales con los procesos autonómicos se lo agradecemos, pero las conocíamos. Desgraciadamente, lo que no conocemos, y seguimos sin conocer, es la política autonómica del Gobierno. Con respecto a la región castellano-leonesa, no tenemos ni idea; y decimos aquí que el pueblo castellano-Leonés lo sepa; que sepa qué es lo que piensa el Gobierno respecto a la provincia de Segovia. Se dice que ahí están las instituciones y los organismos; que se decidan, señores, que la mayoría es de UCD, que la mayoría es del Partido del Gobierno. El Gobierno tendrá alguna opinión sobre esto. ¿O es que no sabemos cuál es el juego democrático del Partido?, ¿cómo fun-

cionan los Partidos políticos en un país democrático? ¿Cuál es, entonces, el Partido político que está detrás del Gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Que las opiniones sean contradictorias dentro de la propia región? ¿De dónde procede todo esto?

Señores, estamos en la política de la abstención, en vez de en la política autonómica. ¡Política de abstención! Absténganse, señores, en Andalucía. Allí sí que opinaba el Gobierno. (*Muy bien.*), en ese momento. ¡Que se abstenga! La abstención se inició en Andalucía y allí propuso el Gobierno la abstención, en contra de todos los principios que debía aplicar el propio Gobierno en un referéndum. Mucha abstención en el Consejo General de Castilla y León; mucha abstención en el Gobierno en la política autonómica; mucha abstención para convocar «el día de la región»; mucha abstención para contestar hoy. Hoy no ha habido ninguna palabra por parte del representante del Gobierno que pueda, no digo medianamente tranquilizar, sino que de nuevo alarmar lo que pasa en nuestra región, a la que se está tomando como una cosa marginal para seguir con la historia de marginación que ha venido sufriendo siempre la región castellano-leonesa. Así es como se está tratando a Castilla-León desde el Gobierno; así es como se nos ha contestado hoy en la Alta Cámara; así, sin miembros del Gobierno que suban aquí, sin Ministros que suban aquí, sin nadie que se responsabilice de la política autonómica. En esta encuesta el Gobierno no sabe, no contesta. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro pide la palabra y puede hacer uso de ella, ya que tiene derecho a intervenir en cualquier momento, si lo desea.

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, para una cuestión de orden. En el Reglamento no hay ninguna cláusula por la cual el señor Ministro pueda intervenir en el turno de preguntas. El señor Ministro, que es Presidente del Comité Regional de UCD de Castilla-León podía haber contestado a la pregunta del Senador Arévalo en nombre del Gobierno. Nosotros pensamos que en el Reglamento no hay ninguna cláusula a través de la cual un Ministro pueda intervenir

fuera del turno de la pregunta, que está concluido, reglamentariamente. El podía haber intervenido en lugar del Subsecretario, y quizá le hubiera ahorrado el «trago» que el señor Subsecretario ha tenido que pasar.

El señor PRESIDENTE: Vuelvo a insistir en que cuando la Cámara tenga otro Reglamento yo me atenderé a él. El artículo 72, 5, que habla del uso de la palabra, sin distinguir cuándo ni que se refiera a un acto parlamentario u otro, dice: «Los miembros del Gobierno podrán hacer uso de la palabra siempre que lo solicitaren». El señor Ministro de Transporte, en nombre del Gobierno, solicita hacer uso de la palabra y la Presidencia no se la puede negar. Así, pues, tiene la palabra el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones en nombre del Gobierno. (*Aplausos.*)

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, con todo el respeto considero que esto es una falta de cortesía parlamentaria, porque de esta manera la última palabra la tiene siempre el señor Ministro y, por tanto, la mayoría de UCD, mientras que a nosotros se nos niega el uso de la misma.

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra. (*Rumores.*)

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (Sánchez-Terán Hernández): Señor Presidente, me someto plenamente a los dictados de la Presidencia. No tengo ningún interés personal en intervenir, y si crea el más mínimo problema no hago uso de la palabra, y diré en público la respuesta a las inexactas y erróneas afirmaciones del Senador señor Arévalo.

Lo dejo en manos de la Presidencia.

El señor PRESIDENTE: No, perdón. La Presidencia no puede más que conceder la palabra al señor Ministro si la pide, y entonces el señor Ministro puede hacer uso de ella si quiere, o renuncia a ese derecho. No puedo alterar el Reglamento.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (Sánchez-Terán Hernández): Pues hago uso de mi derecho, señor Presidente.

Mi presencia circunstancial en este momento en la Cámara, motivada por la contestación a la pregunta realizada por los Senadores canarios respecto a la Compañía Trasmediterránea me ha permitido escuchar este debate, y quiero decir que respaldo plenamente las palabras del señor Subsecretario del Ministerio de Administración Territorial, que ha contestado en nombre del Gobierno. Pero como miembro del Gobierno asistente a este debate y con derecho a intervenir, como miembro del Partido, no puedo dejar pasar por alto algunas de las afirmaciones realizadas por el señor Senador.

En primer lugar, no es el Gobierno ni el Partido del Gobierno el que ha levantado los temores y los augurios de problemas en el acto de Villalar. Es conocida la historia de estos actos, y no tiene nada que ver el Gobierno ni el Partido del Gobierno con los tristes finales que otros años grupos determinados han provocado, de desórdenes y desmanes, como ocurrió el domingo pasado en el acto de Villalar. Es injusto, erróneo e inexacto hacer la imputación que ha hecho al Gobierno y al Partido del Gobierno.

En segundo lugar, no ha habido contradicciones en el Partido del Gobierno ni en el Gobierno en el trámite de esta autonomía. Dijimos que queríamos tramitarla por el artículo 143, y esto es lo que hemos llevado a cabo. Las contradicciones, señor Senador, corresponden al Partido Socialista, que ha dado un paso a un lado y un paso a otro, y hay declaraciones públicas que lo corroboran.

En tercer lugar, el problema del humanismo no es de hectáreas o de personas. No he oído una voz discrepante cuando la representación en el Estatuto del País Vasco es igualitaria por provincias. Esto es lo que ha propugnado el Consejo de Castilla y León, y el Partido del Gobierno lo ha respaldado, porque el tema no ha llegado al Gobierno, y es perfectamente legítimo, como lo ha sido en el País Vasco. Y no hay dinámica de obstáculos por parte de UCD, puesto que si algún Partido ha sacado adelante la autonomía de Castilla y León y el referendo a la iniciativa ha sido el Partido del Gobierno, que tiene mayoría en todas y cada una de las provincias. No hagamos demagogia de lo que es un hecho

evidente; las mayorías de UCD han hecho triunfar eso que hoy vemos con satisfacción: la iniciativa autonómica en las provincias de Castilla y León; y no elevemos el caso de Segovia a caso de Estado.

Está escrito que el PSOE decía: el PSOE de León decidía su postura en torno a su adhesión o no a la autonomía. Y eso es lo que hemos dicho respecto a la UCD de Segovia; se han hecho declaraciones públicas, las ha hecho el Comité Ejecutivo, de que hay una actitud positiva hacia Castilla y León, y hay que esperar un tiempo para una reflexión profunda sobre un tema decisivo para la provincia de Segovia.

Esto es todo. No hagamos afirmaciones inexactas o erróneas, y digamos la verdad de los hechos, de lo que ha ocurrido con el proceso autonómico de Castilla y León.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

— DE DON RAMIRO CERCOS PEREZ, DEL GRUPO MIXTO, SOBRE INMEDIATA PUESTA EN PLENO SERVICIO DE LA RESIDENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL YA CONSTRUIDA EN SORIA.

El señor PRESIDENTE: El señor Cercós Pérez tiene la palabra para explicar la última pregunta del punto segundo del orden del día, que versa sobre inmediata puesta en pleno servicio de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social ya construida en Soria, que fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 26, de fecha 9 de noviembre de 1979.

El señor CERCOS PEREZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, me acerco a esta tribuna para formular al Gobierno una pregunta que presenté como interpelación en esta Cámara el día 9 de noviembre —quiere decir que va para seis meses—, urgiendo al Gobierno la inmediata puesta en funcionamiento de la Residencia de la Seguridad Social en Soria.

Seis meses yo creo que ya de por sí es un período de tiempo suficientemente amplio

como para que se hubiera puesto en marcha esta Residencia Santaria.

En varias ocasiones he traído a esta tribuna a la provincia de Soria, por su situación y por los graves problemas que tiene planteados, a causa de la discriminación, relegación y abandono a que se encuentra sometida, temas que Sus Señorías recordarán: el internamiento en Soria de presuntos terroristas, el centro de investigación nuclear, cierre de ferrocarriles, cierre de escuelas, etc. Hoy la traemos por una discriminación más: Soria es la única provincia española, la única, que carece de Residencia de la Seguridad Social. Creemos que esto es una discriminación patente que nos gustaría que el Gobierno resolviera a la mayor brevedad posible.

El Instituto Nacional de la Salud en Soria, en este momento, no dispone de instituciones propias cerradas; únicamente tiene para la asistencia hospitalaria tres clínicas concertadas, de ellas una pública, dependiente de la Diputación, y dos privadas; la pública tiene 283 camas, y es la adaptación de un antiguo sanatorio antituberculoso que no cumple en la actualidad, ni racionalmente, según las líneas de funcionamiento de las instituciones sanitarias, ni en lo que se refiere a personal, porque no tiene su fuente personal, por lo menos de enfermeras, ni en instrumentos y equipamientos técnicos.

De las dos clínicas privadas una tiene 55 camas, y es la que tiene condiciones más idóneas, y la otra clínica privada tiene 17 camas en condiciones no aceptables en ningún caso. La situación real es que en el año 1980 Soria es la única provincia española que carece de residencia sanitaria de la Seguridad Social.

La historia del tema se remonta a varios años atrás. Existía el deseo de la población soriana y del Instituto Nacional de Previsión de instalar en Soria una residencia sanitaria; no obstante, fuerzas políticas provinciales e intereses personales obstaculizaron la instalación de la residencia. Por fin, el 23 de marzo de 1976 se adjudicó la contratación de las obras a una empresa, «Laing, S. A.», para que las ejecutara, comprometiéndose a hacerlas en catorce meses. ¡Catorce meses en 23 de marzo de 1976! Estamos en abril de 1980 y las obras siguen si estar concluidas. Algo de todo punto inaceptable, Señorías.

Se podría alegar que hubo que hacer proyectos adicionales de pequeña cuantía, como un paso elevado, túnel para urgencias, estación depuradora de aguas residuales, etc., pero el hecho es que hoy Soria carece de su Residencia. Posteriormente, en otoño de 1979, los servicios provinciales planteaban la crítica situación sanitaria de Soria a los servicios centrales del Instituto Nacional de la Salud. La residencia sanitaria prevista tenía sin concluir todavía sus instalaciones: dobles ventanas, faltaba la recepción provisional de la estación depuradora, estaban sin firmar los contratos de suministro eléctrico, etc. En noviembre de 1979, cuando presenté la interpe-lación, tenía asimismo sin terminar las obras de urbanización exterior, comprometidas por la empresa «Laing, S. A.» para el 30 de septiembre de 1979 —que pidió una prórroga de dos meses, y que fue rebasada— es decir, una generalidad de servicios, correspondientes a las instalaciones que estaban sin concluir. La empresa constructora no había terminado tampoco aspectos de pavimentación, pintura, jardinería, corrección de humedades, etc., en noviembre. Y, Señorías, me remito a noviembre, porque es la fecha en que presenté la interpe-lación, y me referiré a algunos aspectos, de los que algunos quizá se habrán subsanado pero, que quede claro, posteriormente. Pero deseo referirme como estaban las obras en noviembre de 1979, momento en que urgí al Gobierno la finalización de las mismas.

Hay más problemas: los equipamientos. En el concurso 1/78 se compró material mobiliario, pero en Soria, como resultado de un concurso centralizado, hecho a primeros del año 1977, había almacenados en la Residencia Sanitaria materiales del problema básico de montaje por un valor de cincuenta y un millones de pesetas, en noviembre de 1979. ¡Cincuenta y un millones de pesetas de material sanitario almacenado! Posteriormente se ampliaron las necesidades de material sanitario con una solicitud de ciento diez millones... y suprimo incidencias intermedias. El hecho real es que fueron reclamados por la provincia a través de los servicios provinciales del Instituto Nacional de la Salud, en enero de 1979, en febrero, mayo, julio, e incluso se llegó a apuntar que se habían de incluir en los Presupuestos del Estado para 1980. En

resumen, Señorías, al presentar la interpe-
lación, la Residencia de la Seguridad Social
de Soria no disponía del material sanitario
para su apertura.

La sensación de los sorianos les puedo ase-
gurar que es de auténtica frustración, pero
ya estamos acostumbrados a la marginación
como ponemos de manifiesto con todos los
temas que planteamos, y traemos a esta Cá-
mara. Únicamente podemos decir que esta si-
tuación es un eslabón más de una cadena de
injustos tratos a la provincia de Soria, que
yo quisiera llevar al ánimo de Sus Señorías,
porque una vez más no estamos dispuestos a
aceptarlo, y reclamamos para que no sólo el
Ministerio de Sanidad, sino también el Gobier-
no se planteen a fondo la situación de Soria y
formulen un programa de acciones urgentes y
especiales que con la colaboración de los so-
rianos lleva adelante a la provincia, a fin de
salir de la marginación y crítica situación de
desarrollo socioeconómico en que se encuen-
tra.

Yo quisiera preguntar al señor represen-
tante del Gobierno no una serie de cuestiones re-
lativas, especialmente, a la situación de las
obras de la Residencia, sino sobre la fecha
cierta en que la Residencia se va a poner en
marcha. No más palabras, sino compromiso de
hechos.

Se habló de la primavera de 1979, de sep-
tiembre; se ha hablado posteriormente, Se-
ñorías, de este mes para la apertura; pero
hasta la fecha nada de nada. Los concursos y
oposiciones para la provisión del personal se
han dividido en dos fases: como consecuen-
cia de la limitación de recursos, de diecisiete
especialidades que había proyectadas inicial-
mente han quedado sólo siete, habiéndose pu-
blicado la convocatoria del concurso para las
jefaturas de servicio en noviembre de 1978 y
en el mes de mayo de este año, concurso que
no se ha resuelto todavía, para todas las es-
pecialidades, por lo menos, a nivel de plazas
de Jefes de Sección y de Adjuntos. De perso-
nal no sanitario se convocaron las plazas, 63,
en marzo pasado, y se celebraron las oposicio-
nes el pasado mes de septiembre, adjudicán-
dose las plazas por los tribunales. Sin em-
bargo, en este momento este personal no tie-
ne la oportunidad de trabajar en la Residen-

cia Sanitaria, porque no se ha puesto en
marcha.

Esta es la situación que, sin cargar las tin-
tas, ha tratado de hacer llegar hasta el ánimo
de Sus Señorías en los breves cinco minutos
que me concede el Reglamento; una vez más
les he trasladado el malestar de nuestra pro-
vincia. Yo quisiera preguntar al señor repre-
sentante del Gobierno la fecha, por favor, la
fecha, en que se va a poner en marcha la Re-
sidencia Sanitaria. Todos los demás detalles
me sobran, es decir, la situación de las obras,
los trámites de concursos, resoluciones de je-
faturas de servicios, me sobran, a Soria le
sobran. Lo que quiere saber Soria es una fe-
cha concreta en que el Gobierno se compro-
meta a decir, señores, ponemos en marcha la
primera fase de siete especialidades, y, tam-
bién, una previsión para que la Residencia es-
té funcionando a pleno rendimiento con todas
sus especialidades previstas inicialmente. En-
tre tanto, si eso no se hace así, tengan la se-
guridad Sus Señorías de que Soria seguirá es-
tando desatendida sanitariamente, esto es, con
unas condiciones sanitarias que no son acep-
tables en criterio de las propias instituciones
médicas de la provincia, y que los sorianos
tampoco podemos aceptar ni aceptaremos.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra
el Secretario de Estado, señor Segovia, para
contestar en nombre del Gobierno.

El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA
LA SANIDAD (Segovia de Arana): Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, se-
ñor Ministro, con mucho gusto contesto a la
pregunta que hace el señor Senador acerca de
la puesta en marcha de la Residencia Sanita-
ria de Soria.

Efectivamente, desde el mes de noviem-
bre a aquí las cosas han pasado, han transcu-
rrido, se han complicado, y aunque el señor
Cercós se conformaría sólo con una fecha
—esa fecha se la voy a dar con mucho gus-
to— le voy a contestar a otra serie de deta-
lles que creo que le van a tranquilizar y qui-
tar esa sensación, un poco acomplexada, de
que Soria es una ciudad, una provincia no
atendida por el Gobierno.

Desde noviembre se ha avanzado mucho en todos los proyectos de puesta en marcha de la Residencia Sanitaria, que, como había ocurrido también a otras instituciones, había padecido en cierto modo los retrasos de un cambio de estructura del órgano ejecutivo que mantenía el Instituto Nacional de Previsión, sustituido por un instrumento que se consideraba más activo, más dinámico, más actualizado, que es el Instituto Nacional de la Salud. Esto, como factor importante; y ha sido necesario que se vayan restableciendo esos cauces de actuación para que los presupuestos, los planes de obras, la resolución de plantillas pudieran ponerse en marcha, como he dicho, que efectivamente se han empezado a poner. En este sentido, podemos decir que no se ha perdido el tiempo desde el mes de noviembre, porque poner en marcha un hospital moderno no es nada sencillo, ni muchísimo menos; aunque la coordinación se establezca —y aquí se ha establecido— es necesario tener en cuenta muchos factores, porque todos son factores importantes del funcionamiento. No basta sólo tener una parte de aquéllo que va a ser necesario para el hospital, sino que si todo el equipo, el conjunto, no reúne unos mínimos indispensables, el hospital o la residencia pueden ser peligrosos.

En ese sentido, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad han sido ayudados con la comprensión, el aviso, los consejos y el interés de una serie de personas que deseo ahora resaltar, a la cabeza de las cuales está el Gobernador civil, don Celestino Sendín Conejo, que indudablemente se ha preocupado mucho de este interés; también al Diputado señor Cisneros, y el señor García Arroyo, con sus visitas permanentes y su atención continua, han hecho que el Ministerio tuviera la conciencia muy clara acerca de cuáles eran las necesidades de la Residencia Sanitaria de Soria. Esto ha culminado recientemente en los nombramientos hechos de las autoridades del INSALUD dentro de Soria, y en este aspecto el Gobierno quiere expresar su satisfacción por toda la cooperación recibida.

Y paso ya a la pormenorización de este tema, y el señor Cercós me va a permitir que, en atención a Sus Señorías, no me limite a dar simplemente una fecha de inauguración,

sino que, como expresión de las actividades del Gobierno en este sentido, exponga una serie de detalles que ponen de manifiesto una mecánica operativa que creo que es importante que sea conocida por Sus Señorías.

Efectivamente, como ya había dicho antes, es muy compleja la puesta en marcha de un hospital moderno, con toda esa gran cantidad de detalles, de confluencia de esfuerzos, de tecnología, que se van aplicando cada vez con más coordinación. Es así como la acometida eléctrica, a que se ha referido el señor Cercós, ya se ha firmado, y la Compañía Iberduero ha establecido ya una conexión eléctrica, que permitirá, dentro de muy poco tiempo, dar la luz eléctrica a la Residencia.

Había también problema con las aguas residuales, cuya depuración era una exigencia sanitaria. Esto se ha solucionado perfectamente, y en la actualidad ya está resuelto.

Existía, y existe aún, una pequeña dificultad con un elevador mecánico de las aguas potables, ya que el nivel del suelo así lo exige. Pero el Ayuntamiento y la Residencia están estableciendo una serie de cooperaciones, y en este momento va a ser superado el problema.

Puedo decir que actualmente, en lo que se refiere a obras, no existe ninguna dificultad importante que impida la apertura de la citada Residencia.

Con respecto a dotaciones es también un apartado muy complejo para un hospital moderno, porque no es sólo el mobiliario, sino la instrumentación del más diverso orden, desde la necesaria para análisis clínicos hasta la dotación de quirófanos, etc., y todo esto supone algo que no es fácil encontrar de una forma continuada. Pero el hecho es que el programa básico de montaje de mobiliario, ropas, etc., está siendo adquirido previo los concursos reglamentarios de la Dirección Provincial de Administración de Soria, y subsiguientemente se irá instalando en la Residencia. Ha habido algunos pequeños fallos, por ejemplo, en cuanto al mobiliario de la capilla y del salón de actos. El concurso se declaró desierto, porque no hubo licitantes. Ahora se intentará hacer de forma directa.

En cuanto a plantillas, están convocadas, desde noviembre de 1978, las jefaturas de ser-

vicio de Medicina interna, Análisis clínicos, Radiología, Pediatría y Tocoginecología. Se cubrió la de Medicina interna el 12 de noviembre del pasado año; la de Pediatría el 24 de enero de este año; el 19 de diciembre del año pasado se cubrió la de Radiología. Están desiertas las plazas de Análisis clínicos y Tocoginecología, que volverán a ser convocadas en septiembre de este año. El año pasado se convocaron también plazas de Jefe de Servicio de Anestesia, de Medicina general, Hematología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología, Cirugía ortopédica y Urología, las cuales están programadas, como es reglamentario, para que el Tribunal Central las ocupe, y en el momento actual, presididos por el Inspector señor Vega de la Rosa, se están fijando los Tribunales provinciales para cubrir las vacantes de Jefe de Sección y Médicos adjuntos, debiendo estar todo esto terminado el 14 de mayo del presente año.

Por tanto, y ahora viene la fecha que el señor Cercós pedía, estamos en condiciones de decir que la inauguración de la primera parte de la Residencia Sanitaria de Soria, en lo que se refiere a los servicios generales, Radiología, Análisis clínicos, Medicina infantil, Tocoginecología y Medicina interna, se hará en la primera quincena del mes de julio, y, si tenemos un poco de suerte, el 24 de junio, fiesta de San Juan, Patrono de Soria. Posteriormente se irán poniendo en marcha los servicios de Traumatología, Encefalografía, Anatomía patológica, etc.

Quisiera pedir disculpas a Sus Señorías por esta enumeración grande de datos técnicos, pero quiero señalar que, independientemente de lo farragoso que pudiera parecer a algunas de Sus Señorías, una ciudad entrañable como es Soria, con una población realmente no muy abundante, dispone en estos momentos de un servicio hospitalario, de un hospital con la categoría que les estoy señalando, explicada por los servicios de especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, mencionados.

Desearía que, en estos momentos, en que tantas críticas se hacen a veces, se pusieran de manifiesto también estos aspectos positivos, diciendo que a Soria nunca le ha faltado una asistencia sanitaria muy buena, porque

el Hospital Provincial de Soria dispone de profesionales de una gran fama, de un gran renombre, y de una gran eficacia. No ha estado desatendida en este sentido, y ahora, al contar con la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, dará, indudablemente, a Soria una categoría de la que me congratulo, y espero que Sus Señorías también conmigo.

El señor PRESIDENTE: Para réplica, tiene la palabra el señor Cercós.

El señor CERCOS PEREZ: En primer lugar quiero dar las gracias al señor Secretario de Estado por su información. Me alegra esa relación nominal de hombres de UCD, el señor Gobernador civil y algunos queridos colegas que el señor Secretario de Estado en oportuna pirueta trata de incorporar al carro de las preocupaciones por la Residencia; quizá falten otros colegas que se han preocupado también, que yo aprecio, y que podrían entrar en esta oportuna lista abierta a última hora.

La realidad es que, presentada por quien tiene el honor de hablarle, la interpelación el día 9 de noviembre, a partir de ese momento, como ha reconocido el propio señor Secretario de Estado, se han convocado oposiciones, tribunales, rematado instalaciones, el 22 de diciembre pasado se ha aprobado un crédito de 110 millones de pesetas, para material sanitario, etc. Señorías, aunque sea modestamente, por lo menos creo que hay una utilidad y eficacia en las actuaciones parlamentarias.

Quisiera también decir que me uno a las palabras del señor Secretario de Estado en elogio de la clase médica provincial; lo que quiero decir es que la calificación de bajo, relativo nivel de asistencia, en Soria, ha sido hecha por los propios servicios del Instituto Nacional de la Salud en un informe remitido a los servicios centrales; por tanto, no digo nada nuevo. Los médicos pueden ser buenos, como lo son, pero los equipos y las instalaciones no son los idóneos para una población como la de Soria.

También quiero señalar que la asistencia hoy no descansa, en ningún caso, sobre instituciones propias del Instituto Nacional de la Salud; sea bueno o mala, quiero decir a Sus Señorías que Soria tiene indiscutible derecho,

como las otras provincias, a tener una Residencia de la Seguridad Social, y yo me alegro cuando aquí vienen a plantear algunos colegas las quejas de residencias que no funcionan; Señorías, la de Soria no ha existido hasta la fecha. Esto es lo que quería dejar claro y, que a pesar de la buena ayuda y colaboración de la clase médica provincial, es muy difícil hacer frente a todas las necesidades provinciales.

La fecha de inauguración que ha comprometido el señor Secretario de Estado me parece de lo más positivo. Me encanta y me alegra que sea el día de San Juan, y espero que no se defrauden, una vez más, las aspiraciones sorianas. Ciertos datos referidos al ritmo de cómo se van poniendo en marcha los servicios, me hacen sentir preocupación de que la de la Residencia en funcionamiento para ese día 24 de junio pueda ser una inauguración, como en otras épocas, sin todos los servicios completos o todos los equipamientos necesarios. Esto lo quiero dejar claro, constituirá una burla más al pueblo soriano, que reaccionará debidamente.

En segundo lugar, los sorianos también pedimos que se complete rápidamente el cuadro de especialidades, de la siete hasta la diecisiete; es decir, que Soria no se quede en el primer escalón, propio de países en vías de desarrollo, en ningún caso y ello exige, como sabe el señor Secretario de Estado, que se cubran las previsiones de plantillas iniciales, que luego fueron recortadas, como en el caso de ATS, que van a ser necesarias 155 plazas para la provincia de Soria y están dotadas presupuestariamente 117; auxiliares de clínica de 94 a 120, etc., y análogamente en el resto de los puestos de trabajo.

Pedimos, pues, que ese calendario del 24 de junio tenga inmediata continuación, pasado el verano lo más tarde y, por favor, que la Administración, el Gobierno, ponga en marcha los mecanismos para que la Residencia Sanitaria de Soria sea integral y perfecta en su funcionamiento, con sus especialidades y con todos los servicios técnicos y médicos completos, de acuerdo con las previsiones iniciales.

En todo caso, muchas gracias al señor Secretario de Estado.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SANIDAD (Segovia de Arana): Brevemente, para contestar a las palabras del señor Cercós y hacer dos pequeños comentarios o apostillas al hecho de que estemos discutiendo el número de especialidades que pueda haber en una residencia. Es una gran fortuna que podamos hablar de que haya siete, doce o catorce, cuando, créame, señor Cercós, existen muchos países, con mayor número de habitantes del que tiene Soria, que se sentirían felices, felicísimos, con siete especialidades. Pero yo quiero señalar también que lo importante es conseguir las cosas; no sé quienes puedan intervenir. Me inquieta un poco pensar que lo que estamos haciendo en la Secretaría de Estado para la Sanidad pueda estar inducido, empujado, catalizado por una acción más o menos exigente. Créame que nos hacen falta estímulos de este tipo, porque pensamos que la Sanidad de este país merece el máximo esfuerzo.

Aseguro que todo nuestro equipo está, con ayudas o sin ayudas, con peticiones o sin peticiones, deseoso de llegar al mejor fin de lo que nos proponemos.

Permítame el señor Cercós que comente también el hecho de que no se trata sólo de la sanidad de la Seguridad Social. Quisiera repetir, una vez más, que el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social es uno, y que los recursos sanitarios del país tienen que ser empleados, cualquiera que sea la propiedad patrimonial de aquellos hospitales, institutos o residencias. Esto es fundamental. Tenemos que cambiar de una vez esta idea, un poco reducida, de pensar que la medicina de la Seguridad Social es de una clase, y el resto de otra. Creemos que nuestro país vencerá un cierto grado de retraso sanitario, si conseguimos aunar los recursos coordinándolos inteligentemente por el bien común, y en este sentido creo que estamos todos de acuerdo.

Espero, confío que en esa noche de San Juan, cuando comiencen las famosas hogueras, la Residencia de Soria esté en funcionamiento, aunque sea simbólicamente, para el bien de Soria y de nuestro país.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISION DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY DE AUTOPSIAS CLINICAS (PUBLICADO EN EL «BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES»)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. El primero de ellos es el de la Comisión de Sanidad y Seguridad Social en relación con la proposición de Ley de Autopsias Clínicas publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» el día 25 de abril de 1980.

Se ha formulado un voto particular a la proposición de ley. ¿El Presidente de la Comisión de Sanidad y Seguridad hará la defensa del dictamen?

El señor TOLEDO RODRIGUEZ: Para la defensa del dictamen, la Comisión ha designado al Senador señor Dorrego González.

El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, Señorías, vamos a defender el dictamen que ha elaborado la Comisión de Sanidad y Seguridad Social del Senado en defensa de la Ley de Autopsias Clínicas. Pero antes de entrar puramente en lo que es la ley, yo quisiera hacer unas reflexiones de por qué era necesaria esta proposición de ley.

La medicina es una ciencia biológica y, por tanto, una ciencia experimental que necesita, de alguna manera, estar basada en unos sustratos estables, en unos sustratos morfológicos de los que después se puede ir, por el método deductivo, obteniendo unas conclusiones, unas veces estadísticas y, otras, ayudados por otras ciencias, para llegar a eso que todos deseamos, que es el mejoramiento de la salud de todos los hombres.

La medicina ha tenido muchas épocas en su evolución. No voy a hacer una historia

de la medicina, pero sí quiero señalar, para defender después esta ley, una serie de hechos.

En primer lugar, la medicina que se inició con ciertas bases científicas en la época de Atenas y Roma, dejó de ser científica y se transformó en empírica durante toda la Edad Media. Y eso se debió, señores, queramos o no, a que durante esta época las disecciones anatómicas y las necrosias estaban absolutamente prohibidas por motivo del pensamiento general de la época. Todas las ciencias han ido siempre, en cualquier momento, ligadas al pensamiento general de la época. Eso es inevitable. Y fue necesario llegar al Renacimiento, con las disecciones anatómicas; y fue necesario llegar al último tercio del siglo pasado y primer tercio de éste, con la escuela vienesa, para que se iniciaran las autopsias obligatorias y la medicina sentara esas bases morfológicas, esas bases anatomo-clínicas necesarias para que la medicina haya podido encontrar este desarrollo actual.

¿Qué ha pasado en España con el problema de las necrosias o de las autopsias? Pues, yo diría que hemos tenido una de las leyes más progresistas de toda Europa, pero que no se ha aplicado y, por tanto, ha sido, de alguna manera, un freno para el desarrollo de la medicina y la causa de que tantas veces (aunque la medicina española se ha mantenido en un tono digno, discreto y muchas veces brillante) se haya tenido que ir fuera de nuestra nación para aprender.

En 1902 se regulan, por primera vez, de una manera coherente las necrosias y, en esta ley se permite que en todos los centros benéficos se hagan necrosias, simplemente porque el director del centro o el médico que atiende al paciente desea hacerlo, pero esto, en cierto modo no se ha hecho.

No vamos a entrar en la legislación de Policía Mortuoria, de retoques de esta ley que está en vigor en este momento, pero sí podemos ver que, ahora en España, según las cifras más optimistas, sólo se hacen aproximadamente un 8 ó un 10 por ciento de autopsias; yo diría que son cifras demasiado optimistas. Quizá las cifras reales anden por un 2 ó 3 por ciento, mientras que en el resto de los países de Europa occidental próximo al nuestro andan alrededor de un 69 por

ciento, y en los países nórdicos de la misma Europa occidental alrededor del 89 por ciento. Bien es verdad que estas cifra se han estabilizado, que tienden de alguna manera a decrecer, porque los medios de exploración hacen que, muchas veces, las autopsias clínicas no sean tan necesarias como antes.

Por todo esto, creemos que traer esta proposición de ley en un momento en que queremos el desarrollo de la medicina y de la sanidad en España es absolutamente necesario. Nosotros creemos que esta ley es totalmente coherente, primero, porque permite la agilización de las autopsias. Segundo, porque en todos los casos deja en libertad a cada persona de expresar su oposición (no tiene que expresar su aceptación, sólo su oposición), para que la autopsia no se realice. En tercer lugar, la ley marca dónde se pueden realizar las autopsias, con el respeto debido que requiere este acto al que, de alguna manera, debemos acostumbrarnos y que es comparable, en todo, a lo que se realiza en un quirófano; se hace con el mismo respeto que una intervención quirúrgica. En cuarto lugar, prevé el traslado de los cadáveres agilizando los trámites de dicho traslado, evitando que haya problemas familiares de tipo sentimental y permitiendo la presencia de los familiares en las proximidades del sitio a donde se lleve el cadáver, igual que en los mortuorios ordinarios. En quinto lugar, y esto es importante, prevé una ley de financiación que hará que el traslado de cadáveres para la realización de la autopsia no sea gravoso para la familia.

Por todos estos puntos creemos que la ley es positiva, y entro ahora en un análisis muy rápido de su articulado.

Podemos decir que la ley es muy sencilla. En el primer artículo estudia las condiciones y la delimitación geográfica de cuáles van a ser los centros donde se realicen los estudios autópsicos. Indica que se fijen reglamentariamente cuáles van a ser estas condiciones.

A este artículo no se mantuvo ninguna enmienda de las veinte que se habían presentado, porque aunque había alguna que trataba de sustituir la palabra «regional» por «geográfica», creímos, en la Comisión, que era de poca entidad y, por tanto, se mantuvo íntegro el texto del Congreso.

El artículo 2.º de la ley empieza por arbitrar los medios para el traslado de cadáveres, diciendo que habría una ley, por descontado presupuestaria, que suministre los fondos necesarios para que estos traslados se puedan financiar.

El tercer punto regula, de alguna manera, qué utilidad van a tener los informes que se obtengan de la autopsia. Sobre estos informes quizá ha habido alguna modificación en relación con el texto del Congreso. Yo diría que la modificación que puede haber habido en ningún caso ha sido de fondo, sino de ordenamiento, diciendo que estos informes debe recibirlos, primero, el médico de cabecera, después, el Jefe de Servicio que ha pedido la autopsia y, finalmente, cuando lo solicite, la familia. Todo ello se ha ordenado en dos párrafos, de forma que, a nuestro juicio, queda mucho más claro, porque quizá el texto del Congreso era un poco farragoso y, en algún caso, ininteligible, pero indiscutiblemente se mantiene la misma filosofía de fondo que el texto remitido por el Congreso.

Quizá la labor más importante que ha hecho la Comisión haya sido en el artículo 3.º En el artículo 3.º existía un problema con el certificado médico, porque si se había extendido ya el certificado médico, prácticamente la necrosia no podría realizarse en la mayoría de los casos, siempre que el certificado se estableciera tal como está en la actualidad, en el que se pone que, efectivamente, existe la muerte, causa inmediata de muerte, causa fundamental y causa intermedia. En este caso la Comisión ha entendido que sería mucho más operativo que se extendiera un solo certificado en el que se dijera que la muerte está totalmente comprobada, y que no hace falta que se ponga la causa de la muerte, porque el certificado definitivo se va a rellenar a continuación con el resultado de la autopsia. Esto, creo, va a evitar muchos problemas y va a ser realmente operativo.

El punto más debatido al cual se presentó un voto particular (que no sé si, por razones burocráticas, puede mantener o no el Partido Socialista, a través de su Senador Alberto de Armas) sobre la supresión del párrafo tercero del artículo 3.º que, más o menos, decía que por orden ministerial se regularían aquellos hospitales en los que una vez ingre-

sada cualquier persona se sometería a la necrosia, quisiera o no, en todos los casos con carácter obligatorio.

A la Comisión nos pareció que esto no era defendible en una sociedad donde creemos que debe haber un respeto a la persona como tal, sobre todo porque, muchas veces, estos hospitales van a ser los más sofisticados en medios humanos y material y porque, de alguna manera, por el temor psicológico a la realización de la autopsia, los enfermos podrían retraerse, y tanto a los enfermos como a los familiares se les podía crear una tensión psicológica pensando en tal posibilidad. Por esto se suprimió este párrafo tercero.

En el artículo 4.º no se ha producido modificación alguna. En él se habla de que tendrá que tener un desarrollo reglamentario y, también, de que todo el material procedente de las autopsias estará a disposición de cualquier investigación científica, que, en definitiva, es para lo que se hace.

Se suprimió la Disposición adicional segunda porque estaba en relación con el párrafo tercero del artículo 3.º, y no hubiera tenido ningún sentido mantener esta adicional segunda cuando se había suprimido dicho párrafo.

Con esto, quisiera hacer un comentario también al título de la ley, al cual se había presentado alguna enmienda «in voce» por el Senador señor Vallejo, que no sé, también, si por trámites burocráticos de la Cámara se va a mantener como voto particular o no, pero que hablaba del cambio de la palabra «autopsia» por «estudio anatómico post mortem» o «estudio clínico post mortem». A la Comisión nos pareció que la palabra autopsia, a pesar de la carga emocional que puede tener en todo momento, era necesario mantenerla, porque de otra manera sería enmascarar y podrían acusarnos de querer engañar de alguna manera y desmitificar lo anterior.

Creo, señores, que si aprobamos esta ley, y todos tenemos buena voluntad, colaboraremos en la difusión y colaboraremos en la publicidad si explicamos en nuestras demarcaciones qué es una autopsia clínica, cuál es el interés que de ella se deriva, y así lograremos, de verdad, que esta cifra de necrosias en España aumente lo suficiente y permita

esa mejora de calidad de la medicina a que el Secretario de Estado para la Sanidad se refería hace unos momentos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Oída la defensa del dictamen, ¿existe algún turno a favor o en contra respecto de la totalidad del proyecto? (Pausa.)

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Corresponde usar de la palabra, en primer lugar, al Senador señor Vallejo, como portavoz del Grupo Socialista Andaluz.

El señor VALLEJO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en primer lugar vaya por delante la opinión del Grupo Parlamentario andaluz del PSOE, en el sentido de que votaremos afirmativamente esta proposición de Ley sobre Autopsias Clínicas.

Dicho esto, tenemos que decir que respecto a esta ley, para la ilustración de los señores Senadores, hay que diferenciar muy bien lo que son las autopsias médico-legales de las autopsias a que se refiere esta proposición de ley, a tal punto de que en la intervención anterior se ha dicho que en España hay un porcentaje muy pequeño, sobre las personas que fallecen, a las que se les hace la autopsia. Pero hay que decir que, generalmente, esas autopsias son de tipo médico legal, que, además, se hacen fundamentalmente en niños y que el número de autopsias que se hacen en España está en disminución.

Quiere decirse que las autopsias clínicas (con un nombre creo que poco afortunado, porque parece que el término clínico debe usarse para personas vivas y no para cadáveres) como dice el título de la ley, se refieren a estudios sobre cadáveres, y pueden ser autopsias o pueden ser simples estudios de algunos de los tejidos del cadáver.

En ese sentido, y respondiendo a la alusión que se nos ha hecho, el Grupo andaluz del PSOE presentamos dos enmiendas: una hacía expresa referencia al título de la ley que estamos tratando y que, efectivamente, por problemas burocráticos, no sé si se va a poder defender en el Pleno como era nuestra intención. Queríamos cambiar el título de la ley, de modo que en lugar de llamarse

proposición de Ley de Autopsias Clínicas se llamara proposición de Ley sobre Estudios Post Mortem». En primer lugar, porque el término científico era más correcto y, en segundo lugar, porque también era más exacto en relación con el contenido de la ley, al punto de que los estudios «post mortem» se pueden referir a un solo tejido del cuerpo humano y no necesariamente a una autopsia completa. Esto diferenciaría aún más esta proposición de ley de las autopsias médico-legales, ya que las autopsias generalmente se refieren a la apertura y análisis de las distintas cavidades y tejidos dentro del cuerpo humano (tórax, abdomen, cerebro, etc.), mientras que un estudio «post mortem» se puede referir exclusivamente al estudio de un solo tejido, y eso también se contemplaría con esta proposición de ley.

Por todo lo cual, nosotros no sólo pretendíamos cambiar el sentido mágico (para malo) que tienen en España las autopsias —decir que se ha hecho una autopsia a un cadáver—, sino también ser más exactos y utilizar un término más científico en el título de esta ley. Pero, desgraciadamente, porque el voto de UCD, mayoritario en la Comisión, fue contrario a esta tesis y porque, después, ha habido dificultades de tipo burocrático, no podemos defenderla hoy en este Pleno.

Había otra propuesta nuestra, no tan importante, pero que creemos también haría factible una mejora de esta ley, en el sentido de que los familiares no sólo concedieran permiso para que se hiciera un estudio necróscico del cadáver, sino que tuviesen participación voluntaria en la petición de que se hiciese ese estudio por interés familiar, o bien por interés de la ciencia del país.

Cuando estamos en España en una situación confusa, grave a nivel general, a nivel político, a nivel económico, etc., sale esta ley, que yo creo que tiene una incidencia fundamental, o puede tenerla si se cumple, para la investigación científica española.

Por eso vamos a votar a favor, porque la investigación es primordial, y esta Cámara lo ha tenido en cuenta y ha creado una comisión especial que estudie la situación de la investigación científica en España. Esta ley viene a favorecer esa investigación cientí-

fica, a pesar de que hay quien quiere ponerla en dificultades, con una de las enmiendas que un miembro de UCD va después a defender. Se quiere poner, todavía, mayores dificultades de tipo cultural de las que ya existen en España, para que la investigación científica «post mortem» (en cadáveres), con relación a tejidos concretos, no se lleve a cabo, aunque sea totalmente necesaria.

Esto nos aleja del mundo y de la cultura occidentales. Cuando en otros países el porcentaje de cadáveres que son examinados con autopsias o simples análisis de tejidos alcanza el 60, 70 u 80 por ciento, en España, como ya se ha dicho, tenemos un ocho o un diez, aunque yo creo que es una cifra falsa, que va en disminución, ya que prácticamente ahora sólo se hacen autopsias con carácter científico a los niños, mientras que a personas adultas no se hacen y no se investiga, en muchas ocasiones, cuál ha sido la causa de la defunción. Todos sabemos que por muy buena voluntad que ponga el médico o las personas que atiendan a los enfermos, algunas veces se mueren éstos sin saber exactamente de qué ha sido. Es necesario en muchas ocasiones estudiar las causas del fallecimiento, no sólo por estudiar, sino para favorecer a la sociedad, a los hombres y mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los mayores que están vivos. Creo que saber las causas del fallecimiento es lo que se persigue con esta ley.

En definitiva, a pesar de que esta ley, en contra de ese refrán que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno, se podía haber mejorado —creemos nosotros— con un par de enmiendas, vamos a votar a favor, porque nos parece que supone un progreso y un favor a la investigación científica, que tan necesaria es para el ser humano vivo en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Paulino, del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, tiene la palabra.

El señor PAULINO PEREZ: Señor Presidente, Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista del Senado va a votar afirmativamente el dictamen de la Comisión sobre la Ley de Autopsias.

Entendemos, y así lo han expresado los

que me han precedido en el uso de la palabra, que significa un evidente progreso, porque mediante los estudios de necrosia podemos conocer los errores de la clínica y podemos evitar el caer en ellos. Realmente el diagnóstico anatómico se funda en la medicina del barroco en los estudios de Landici y Borgioni que decían que el «aperto cadavere» era el signo positivo de saber lo que tenía un enfermo, ya que los hallazgos anatómicos eran ocasionales.

Nosotros creemos que esta ley, evidentemente, se podía haber perfeccionado como ha dicho mi compañero el Senador Vallejo, pero entendemos que también está bastante bien recogida la seguridad que hace que la gente huya de que se autopsien los cadáveres (no los cadáveres por acción médico-legal, sino los cadáveres muertos en enfermedad no médico-legal) por el temor a las actuaciones sobre casos de muerte aparente.

Ya en 1861, en un célebre caso de embalsamamiento prematuro de la calle del León, se dictó una Real Orden en la cual se manifestaba de un modo claro que las autopsias solamente podrían hacerse, así como los embalsamamientos, en las escuelas de medicina y cirugía.

Entendemos que pese a que en algunas naciones va reduciéndose el número de casos autopsiados, nosotros todavía no estamos en el momento en que la aparatología técnica de ayuda a la clínica puede hacer reducir las autopsias.

Creemos que es una ley positiva, y por esta razón vamos a votar afirmativamente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de UCD tiene la palabra el señor García Arroyo.

El señor GARCÍA ARROYO: Señor Presidente, Señorías, el proyecto de Ley de Autopsias Clínicas ha sido acogido con recelo por la sociedad donde vivimos, y por mi condición de profesional, pido licencia a Sus Señorías para leer mi intervención, porque quiero que mis palabras correspondan exactamente a mi pensamiento.

Intervenir en último lugar en el debate sobre un proyecto de ley en el que todos los

Grupos Parlamentarios están prácticamente de acuerdo, es bastante desairado, porque no queda otro camino que el de la repetición.

La proposición de Ley de Autopsias Clínicas, que se está sometiendo a la consideración de Sus Señorías, tiene, por una parte, una razón de ser: facilitar la realización de éstas en los centros hospitalarios por simples imperativos científicos y, por otra, una preocupación, el respeto a las personas que rechazan este procedimiento por distintos motivos.

Me van a permitir Sus Señorías que divida mi intervención en tres partes bien diferenciadas entre sí; la primera estará dedicada al proyecto de ley en sí, la segunda y tercera estarán dedicadas a estas personas que, por distintos motivos, rechazan la autopsia clínica.

El proyecto de ley consta de cuatro artículos, una Disposición adicional y una Disposición final.

En el artículo 1.º se determina de un modo claro y terminante que las autopsias se realizarán en los locales adecuados. Se facultará a los hospitales para que cuenten con estas salas especiales, atendidas por el personal propio, si se dispone de él, o compartido con otros centros, si no se dispone de él. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán crear centros regionales de Patología adscritos a un hospital regional, con el fin de obtener ventajas económicas y científicas con la concentración. Por último, se determina qué personal es el capacitado para realizar las autopsias, que, por supuesto, serán los anatomopatólogos.

En el artículo 4.º se determina la finalidad de las autopsias, al expresarse de un modo claro que en todo caso autopsiado y por el anatomopatólogo correspondiente se formularán los diagnósticos finales. En su párrafo segundo se ordena que cada caso autopsiado sea evaluado y el material puesto a disposición para la formación y la educación continuada.

En el artículo 2.º, a través de sus cuatro párrafos, se garantizan: la gratuidad para los familiares del procedimiento y traslado del cadáver en su caso; la financiación del traslado del cadáver se determinará por ley; la obligatoriedad y rapidez por parte del anato-

mopatólogo en emitir un informe de la autopsia, válido para la inhumación del cadáver sin retraso; y la facultad que se le da a los familiares de solicitar y recibir un informe de los datos de la autopsia.

En el artículo 3.º, párrafo primero, se garantiza la previa constatación y comprobación de la muerte cierta por un certificado especial expedido para este único fin como condición previa a la autopsia. En su párrafo segundo, la intangibilidad de los pacientes fallecidos que, por sí o a través de sus familiares, hayan manifestado o manifiesten su oposición.

Está claro que esta proposición de ley no es el ideal desde el punto de vista científico, el ideal sería sin duda la obligatoriedad, pero pensamos que al pasar de una situación donde la práctica de la autopsia en nuestros centros hospitalarios es muy escasa a la obligatoriedad de esta práctica, estaríamos poniendo en marcha otra vez la ley del péndulo, de la que tan funestas consecuencias siempre hemos tenido en España.

Las leyes no deben tener más finalidad que ordenar racionalmente la convivencia social, sometiendo la realidad a los moldes jurídicos. Cuando la realidad es conocida y aceptada, al legislador le es suficiente con utilizar la inteligencia y la voluntad; pero si la realidad no es conocida ni aceptada unánimemente, el legislador debe unir a la voluntad y a la inteligencia grandes dosis de prudencia.

En la ley que nos ocupa el legislador ha sabido armonizar estos dos conceptos: imperativo científico de autopsiar al mayor número posible de fallecidos y el respeto a las personas que no aceptan el procedimiento de las autopsias clínicas por colisión con su ideología, creencia religiosa o, por desgracia, como en algunos casos, por su incultura. Es difícil aceptar sin sorpresa que aún hoy haya personas que puedan sentir reparos insalvables para dar su consentimiento a la práctica de la autopsia clínica.

Como siempre es mucho mejor convencer que imponer, en esta segunda parte de mi intervención, que ahora inicio contando con la benevolencia de Sus Señorías, intentaré exponer nuestros criterios y razones, que son de cuatro tipos.

Primero, razones científicas. La autopsia es un procedimiento realizado en cadáveres, con diversas finalidades. Una puramente científica para conocer cómo está constituido el organismo humano. Otra puramente clínica para conocer la naturaleza de las causas de las enfermedades. Y quiero recalcar que la autopsia clínica es puramente para conocer la naturaleza de las causas de las enfermedades, nunca las causas de la muerte.

El primer tipo de autopsias no es objeto de este proyecto de ley. Históricamente se tiene información segura de que se está realizando desde finales de la Edad Media hasta nuestros días.

La segunda, la autopsia clínica, que sí es objeto de esta proposición de ley, es, junto con el archivo de historias clínicas, los dos factores que la legislación hospitalaria internacional utiliza para medir el control de calidad de un hospital. Solamente cuando un hospital dispone de un buen servicio de Anatomía patológica que autopsia a todos los fallecidos, determinando si fue cierto o no el diagnóstico establecido, a través de los hallazgos obtenidos por los estudios macroscópicos y microscópicos de los distintos sistemas, tejidos, etc., y cuando se dispone de un archivo de historias clínicas donde en el futuro se pueda estudiar con fines informativos y formativos, la calidad de ese hospital es efectiva.

Segundo tipo de razones. Razones de Derecho. La facultad de disponer de un cadáver para los servicios especializados competentes para realizar estudios autópsicos, ni pugna con los principios generales del Derecho ni es una novedad del proyecto de ley que se somete a la consideración de Sus Señorías.

Disposiciones legales reglamentarias vienen ordenando desde antiguo la práctica de la autopsia, bien cuando el fallecimiento tiene lugar en determinados centros, bien como requisito indispensable para el ejercicio de un derecho de los familiares del fallecido, nacido precisamente del hecho de esta muerte.

Basta citar como ejemplo, en el primer caso, el Real Decreto de 18 de noviembre de 1902, que ordenaba la práctica de la autopsia a todos los fallecidos en cualquier establecimiento de beneficencia general, provincial o

municipal y en las clínicas de Medicina, salvo cuando el médico que los hubiere atendido en vida ordenase lo contrario por entender que la causa de la muerte carecía de interés clínico. Sirva de ejemplo también el Reglamento del Hospital Clínico de San Carlos de 15 de junio de 1946, que igualmente ordena la autopsia en todos los casos de defunción que ocurran en el Hospital Clínico.

Como ejemplo del segundo caso se puede citar la Orden de 19 de julio de 1949, sobre enfermedades profesionales, que declara obligatoria la práctica de la autopsia para que pueda originarse pensión por fallecimiento del enfermo. La omisión de este requisito será causa bastante para denegar la pensión.

La proposición de ley, en consecuencia, no pretende regular la práctica de las autopsias en España. Pretende, completando y mejorando la legislación hasta ahora vigente, acomodarla a los tiempos actuales y ampliar su ámbito, no sólo a los supuestos de intervención de la justicia, no sólo a los supuestos de fallecimientos de indigentes en establecimientos de beneficencia, sino a todos los casos que el interés clínico lo demande, sin distinción de personas ni del lugar en que el fallecimiento ocurra.

Voy a citar ahora razones históricas. En la segunda mitad del siglo XVI figura como catedrático de la Universidad de Alcalá uno de los médicos más notables de la España Renacentista, Francisco Valles, que luego será protomédico de Felipe II, catedrático de prima. La cátedra prima de la Facultad es la que actualmente llamamos de Patología Médica. Francisco Valles hace venir a Alcalá a un anatómico valenciano, Pedro Gimeno, persona experta en la disección de cadáveres humanos, para que el profesor Valles pueda explicar la naturaleza y las causas de la enfermedad sobre el cadáver...

El señor PRESIDENTE: Señor Senador, le ruego que abrevie porque ha terminado su tiempo.

El señor GARCIA ARROYO: Le ruego, señor Presidente, que me deje medio minuto.

El señor PRESIDENTE: Si es medio minuto, por supuesto lo tiene concedido.

El señor GARCIA ARROYO: Termino esta relación de datos históricos y me van a permitir medio minuto para decir lo siguiente:

El Senador que les habla, que es médico y extremeño, de la provincia de Cáceres, no puede dejar pasar la oportunidad de hacer algunas consideraciones, aprovechando este momento en el que se somete a la Cámara Alta la proposición de Ley de Autopsias Clínicas, para romper una lanza en favor de mi tierra y de mi gente, generalmente tan maltratada por el analfabetismo ilustrado.

He sentido una gran satisfacción como extremeño de haber ocupado esta tribuna, y actuado como portavoz de mi Grupo en el debate de la proposición de Ley de Autopsias Clínicas, quinientos treinta y ocho años después de que en la Escuela de Medicina de Guadalupe se realizaran autopsias con fines clínicos y didácticos, por los frailes jerónimos, no ordenados «ad sacris», según una bula del Papa Eugenio IV, en 1442.

Tengan Sus Señorías en cuenta que esto se hizo cien años antes de los datos históricos que acabo de referir. Si a pesar de todas estas razones que he dicho aún hay personas que tienen recelo en dar consentimiento para sí o sus familiares a la autopsia clínica, lo siento, pero en nombre de UCD vamos a votar afirmativamente esta ley. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Se entra seguidamente en el debate del articulado del dictamen.

Los artículos 1.º y 2.º no fueron objeto de votos particulares. Procede, por tanto, someterlos directamente a votación.

¿Se pueden considerar conjuntamente? (Asentimiento.)

¿Se pueden considerar aprobados por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se declara.

El artículo 3.º tiene un voto particular, que reservó el Senador don Manuel Fábregas Gine, del Grupo de UCD, y se corresponde con la enmienda número 11, que postula la adición de un nuevo número 4, con el texto que figura en la publicación correspondiente.

El Senador señor Fábregas tiene la palabra, para defender su voto particular, por un tiempo máximo de quince minutos.

Artículos
1.º y 2.º

Artículo 3.º

El señor FABREGAS GINE: Señorías, la enmienda que someto a la consideración de la Cámara intenta exclusivamente que las leyes lleguen a conocimiento de los interesados en todo momento. Para ello creo que no hace falta acudir a legislación anterior, sino simplemente al sentido común de que todas las leyes quien debe utilizarlas será el legislativo, pero quien debe conocerlas es el pueblo.

La publicación de las normas jurídicas es una técnica jurídico-formal de exteriorización de las normas, imprescindible a los fines de hacer válido, y por ende exigible, el cumplimiento de cualquier manifestación normativa. La publicación de la norma, su exteriorización, constituye un principio cardinal de Derecho escrito; en otras palabras, un elemento ineludible, un requisito de inexcusable observancia para que cualquier norma jurídica escrita pueda considerarse válida.

En los proemios del «Digesto» o «Pandectas», promulgadas en el tercer Consulado de Justiniano, a 17 de las calendas de enero, se dice «mas con razón nos hemos apresurado a publicar estas leyes en nuestro tercer Consulado...». Y se insiste en la palabra «publicar» porque es el objeto de hacer referencia a este texto.

A continuación, en la refundición de toda la legislación romana, se dice claramente que «hemos considerado hacer patente a todos los hombres nuestro celo y cuidado por estas cosas, para que, libres de la anterior perturbación y confusión y de una legislación que no tenía término, gocen de leyes rectas y concisas, y todos fáciles de hallar, encaminadas a abreviar los litigios al alcance y fácilmente asequibles para todos los que las quieran».

Después dice: «Así pues, recibiendo todos los muy loados Magistrados de nuestro Imperio esa sacra Constitución» —y hace referencia a todos y cada uno de los Prefectos de Iliria y Africa, de Oriente y Occidente—; les ordena «hacer públicas estas cosas» —la publicación de las leyes— «por medio de edictos, a todos sus subordinados para su inexcusable conocimiento por todos sus súbditos...».

Si en determinadas épocas el Derecho es conocido de todos, en otras muchas, en cam-

bio, resulta prácticamente no sólo desconocido, sino incognoscible para la generalidad de las gentes, caso en el que posiblemente nos encontremos.

Desde la formulación de leyes en forma rítmica o en verso que hacían los antiguos tartesios y turdetanos con el fin de facilitar su aprendizaje y recitación y asegurar su transmisión; el grabado en tablas expuestas durante tres días consecutivos de mercado o los edictos en las plazas públicas que hacían los romanos; la fijación de carteles en las ciudades del distrito a que van destinadas que hacían los visigodos; la lectura pública en las plazas a voz de pregonero —cosas que todos hemos visto y oído—, son muestras del intento de que las leyes llegasen al conocimiento de los ciudadanos a los que iban destinadas. La ley destinada al pueblo debe ser conocida por el mismo, y solamente en regímenes absolutistas se obvia la publicación de la ley, por cuanto contemplan a las autoridades públicas como únicos destinatarios de la norma.

El Fuero Juzgo y el Fuero Real exigen que la ley debe ser manifiesta y que todo hombre la pueda entender. La resolución del Consejo Real dada el 1.º de abril de 1767, ratificada posteriormente por Carlos IV, decía así: «Ninguna ley, regla, o providencia general nueva se debe crear ni usar no estando intimada o publicada por pragmática, cédula, provisión, orden, edicto, pregón o bandos de la justicia o Magistrados públicos».

En todo caso se nota que hay una idea de que la ley llegue a conocimiento del que debe ser objeto de la misma. Esta enmienda no trata, en absoluto, de disminuir el alcance de esta ley, pues no exige nada nuevo para su aplicación. Sólo pretende que los ciudadanos tengan una información mayor de las leyes que les son de aplicación, y este deseo mío de que las leyes se den a conocer va encaminado a que las leyes que elaboran los representantes del pueblo, vuelvan a él para su conocimiento y asunción y, a ser posible, sean conocidas por todos los que pueden verse afectados.

Por otra parte, es norma general la difusión de las leyes que, como las leyes de tipo tributario, es precisa su divulgación si queremos que sean respetadas y asumidas. Se

me puede indicar que esta divulgación debiera hacerse también para otras leyes y que para esto es suficiente el «Boletín Oficial del Estado». Y yo digo que este medio de publicación es suficiente a los efectos legales, pero agradeceríamos que en todo momento se nos acerque su conocimiento a veces difícil y lejano. No se puede alegar ignorancia por no conocer el texto legal que figura en el «Boletín Oficial del Estado». Mas ¿no sería bueno disponer en cada momento de una separata que nos permitiera conocer las circunstancias en las que nos encontramos? Creo que sí; creo que nadie puede negarse a que la ley se dé a conocer entre aquellos a los que afecte; y si esta ley afecta a alguien, lo hace, normalmente, a los familiares, y la Ley de Autopsias Clínicas debe conocerse en los momentos próximos a su aplicación por sus posibles afectados, que asumirán su contenido si han tenido ocasión de conocerlas, y se sentirán sensiblemente dolidos, si no engañados, si no se les ha dado a conocer.

Desde mi punto de vista, el conocimiento de la ley permitirá en todo momento asumirla totalmente, ya que considero que ni la familia ni el interesado se van a manifestar en contra de algo que, bien razonado, va en favor de la ciencia y de la sociedad, pues de este tipo de trabajos pueden deducirse datos importantes, no solamente indispensables para el avance de la ciencia, sino concretamente para conocer por la familia del interesado los motivos ciertos de la muerte. Sé que esta ley es progresiva y que tal vez sea difícil de entender, pero menos se entenderá si no se divulga y, si es preciso, se explica. Y, Señorías, lo que no se entiende o lo que se oculta, no debe figurar en la ley.

Por todo ello solicito de esta Cámara la votación favorable a esta enmienda que, sin aportar nada nuevo de carácter técnico-médico, sólo pide que la ley se conozca por quienes pueden verse afectados por ella y que la ley, elaborada en las Cortes, sea asumida por el pueblo, único garante de su aplicación. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra, por el Grupo Socialista Andaluz, el señor Vallejo.

El señor VALLEJO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, efectivamente, para consumir un turno en contra y con la máxima brevedad.

El señor PRESIDENTE: Señor Vallejo, es turno de portavoces.

El señor VALLEJO RODRIGUEZ: Perdón, señor Presidente. En turno de portavoces, para anunciar que vamos a votar en contra de esta enmienda, pues en ella hay enormes contradicciones.

Hay que empezar diciendo que la proposición de ley de UCD es votada por UCD en la Comisión; los miembros de UCD en la Comisión votan en contra de esta enmienda, y ahora se anuncia que van a votar a favor. Uno no entiende por qué lo hacen; supongo que los miembros de UCD lo entenderán.

En cuanto a la forma de la enmienda, poco se puede decir. Muchas veces se dice que no se recogen enmiendas porque son temas de Reglamento. Efectivamente, éste es un tema claro de Reglamento interno del centro, de cómo se informa a los familiares o a los enfermos que ingresan en un centro, de sus derechos, de sus obligaciones.

No me voy a entretener en el contenido o la forma de cómo se expresa esta enmienda. Creo que el problema más grave es el de fondo y, como ha dicho antes el portavoz de UCD que habló en favor de la ley, lo que hay detrás de la sociedad española en contra de los estudios sobre tejidos de personas muertas es una, yo no diría incultura, sino una cultura determinada, una cultura regresiva que se va superando.

Yo creo que detrás de esta enmienda hay exactamente lo mismo. Hay un miedo, hay un sentido mágico de la palabra autopsia o cualquier estudio de un tejido de un cadáver, en contra del que están muchos miembros de UCD y, como no se atreven a expresarlo, ponen las mayores trabas posibles para que no haya estudios sobre tejidos de personas muertas. Este es el fondo de esta enmienda: poner las mayores dificultades posibles para que los estudios sobre cadáveres no se

lleven a cabo; cosa que va en contra de la investigación científica en el campo de la Medicina; va absolutamente en contra. Pero ésa es la responsabilidad del Grupo de UCD.

No les canso más. Como argumento de que esta enmienda tiene un contenido de fondo, tengo que decir a Sus Señorías que lamento se perdieran el debate en Comisión que la provocó, en el que un miembro de UCD empezó a hablar de una teoría del fascismo de la muerte. Una cosa increíble que no se podía explicar ni él mismo —me parecía a mí—, y un miembro de su propio Grupo le rectificó y consumió un turno en contra. Esta enmienda está llena de contradicciones y espero, como decía, para acabar, que en el Congreso se rechace esta enmienda, aunque aquí saliera desgraciadamente aprobada.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista del Senado y como portavoz tiene la palabra el señor Rodríguez López.

El señor RODRIGUEZ LOPEZ: Señorías, mi actitud se basa fundamentalmente en tres reconocimientos previos. Un reconocimiento personal fundamentado en el respeto a una opinión que no coincide con la mía. Un reconocimiento profesional, quizá base del anterior, en que es muy distinto ver estos problemas desde la profesionalidad médica que desde otras profesiones. Pero puedo asegurarles que la Ley de Autopsias Clínicas es necesaria, y es necesario que se efectúe con se primoroso respeto que los profesionales médicos infunden en sus actuaciones, sobre todo, mucho más que sobre los vivos, sobre el cadáver. Un reconocimiento médico-social, porque es opinión nuestra que el individuo, la persona, está revestida y sometida a una serie de derechos cívicos, y que esos derechos cívicos deben prodigarse cuando el individuo fallece, cuando deja de ser persona, por aquellas acciones que decíamos en su día de la solidaridad de los hombres y de otros reconocimientos espirituales que tenemos.

Realizados estos tres precios reconocimientos, creo que debemos analizar la ley, no con un criterio excesivamente orgánico, bajo el punto de vista legal o legístico, sino fundamentalmente como ciudadanos que somos y vivimos en una comunidad. Y ello nos lle-

varía, fundamentalmente, a observar que una ley que está preconizada para beneficio y para ser útil a las ciudadanos debe estar presidida por tres condiciones: debe ser una ley necesaria, debe ser una ley redactada para los ciudadanos que van a someterse a su atención y debe ser fundamentalmente útil.

Como médico puedo asegurar —y aquí ha quedado en evidencia— que la Ley de Autopsias Clínicas es una ley evidentemente necesaria, y necesaria en nuestro país donde tenía ya una legislación previa que parecía que las favorecía y que la realidad es que autopsias clínicas prácticamente no se realizan en nuestro país. Debe ser escrita teniendo en cuenta la condición de nuestros ciudadanos. Y, ¿cuál es la condición de nuestros ciudadanos, por las motivaciones que sean: religiosas, culturales, etc.? Nosotros somos una congregación de ciudadanos donde la mayoría acepta las autopsias médico-legales y no acepta las autopsias clínicas; acepta incluso la incineración para que las cenizas sean esparcidas por determinadas fincas o determinados lugares o sean, como hace poco tiempo en la provincia de Murcia, esparcidas en el mar para ser pasto de los peces; aceptamos, incluso, el fenómeno natural de la putrefacción, y nos quedamos impasibles pensando que el organismo que tanto veneramos va a ser alimento de gusanos. Sin embargo, no aceptamos el que nuestro cuerpo, después de haber consumido una vida en beneficio o en pro de la sociedad, rinda ese último tributo en beneficio de la ciencia.

Por estas motivaciones nosotros consideramos que la Ley de Autopsias Clínicas debe ser evidentemente útil. Nosotros tenemos la evidencia, respetando la opinión de nuestro compañero de UCD, el Senador Fábregas, respetando sus convicciones y las de los demás, nosotros tenemos la clarividencia de que esta enmienda inutiliza la ley; y al inutilizar la ley, si aceptamos esta enmienda, sería completamente ilógico que nosotros, tanto en el Congreso como aquí en el Senado, votásemos o hubiésemos avisado o anticipado que íbamos a votar la ley. Esta enmienda tenemos la evidencia de que la inutiliza totalmente en la práctica, y por ello nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda, asegurando lo que ya ha sido predicho por mis compa-

fieros anteriormente, de que estamos a favor del informe que elaboró la Ponencia por unanimidad, que elaboró la Comisión por unanimidad y nosotros, al menos en honor de una simple coherencia, vamos a votar a favor de la ley y en contra de la enmienda.

El señor PRESIDENTE: El Senador Bolea tiene la palabra, como portavoz del Grupo de UCD.

El señor BOLEA FORADADA: Señor Presidente, Señorías, señor Ministro, creo sinceramente que los dos Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, señores Vallejo y Rodríguez López, no han captado el alcance de la enmienda del señor Fábregas, y anticipo que mi Grupo, Unión de Centro Democrático, va a votar a favor de la enmienda. No se pretende impedir la marcha de la ley; aceptamos y respetamos la ley, únicamente se pretende con esta enmienda decir a los españoles si pueden ser objeto de una autopsia sin su conocimiento. Nada más y nada menos.

Quiero recordar que hoy, en la legislación española hay dos tipos de autopsias: las autopsias médico-legales, que están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad; autopsias que son obligatorias. No hay más que una excepción: en el procedimiento de urgencia del artículo 785, 8 f) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite omitir el trámite de autopsia cuando por el médico forense se dictamine cumplidamente la causa de la muerte. En la práctica, esta excepción se produce en los accidentes de tráfico y en las grandes tragedias.

Al lado de las autopsias médico-legales tenemos las autopsias clínicas, con fines eminentemente científicos, que son el objeto de esta proposición de ley.

Esta proposición de ley, señores Senadores, ha podido decir que las autopsias clínicas son obligatorias o voluntarias, ha podido decir que obligatoriamente todos los españoles deben someterse a la posibilidad de ser autopsiados, y no lo han dicho así ni el Congreso ni el Senado. La autopsia clínica se establece con carácter voluntario. Pero esta voluntad, ¿de quién depende? ¿Depende del médico? No

depende del médico. Depende, según la propia proposición de ley, del paciente o de los familiares. Porque el paciente o los familiares pueden manifestar su oposición, pero para ello lo primero que debe saber el interesado es que tiene este derecho, y esta enmienda sólo trata de que este derecho pueda ser ejercitado en la práctica. Es preciso para ejercitar un derecho conocerlo.

De acuerdo en que el artículo 6.º del Código Civil dice que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, pero, señores Senadores, esta es una proposición de ley que es de unánime posible aplicación, porque todos necesariamente hemos de morir, y todos los españoles podemos ser objeto de una autopsia.

Tengamos en cuenta también la situación psicológica del enfermo y de los familiares en un trance de muerte. No están en condiciones de poder decidir, sobre todo si no saben sus derechos, y tengamos en cuenta que un gran número de españoles tienen un bajo grado de cultura y llegan a los hospitales sin saber que pueden ejercitar el derecho a oponerse a ser autopsiados.

Esta enmienda no es un obstáculo a que la ley se aplique. Trata, simplemente, de que no se sorprenda a ningún español. Creo que da mayores garantías al médico. El médico que practica una autopsia la practica con conocimiento de que los familiares, o previamente el enfermo, han dicho que sí a que esta autopsia se pueda llevar a cabo, y esto da una garantía al médico de que no va a hacer autopsias por sorpresa.

Pretendemos simplemente que la oposición de los familiares pueda tener lugar antes de la autopsia y no después de ella, puesto que si la oposición de los familiares se manifiesta después de la autopsia porque no conocían el derecho a la oposición, va a ser una oposición violenta de un número importante de españoles que, por las razones que sean —religiosas, sociales o culturales—, tienen una idea de lo que es la muerte de sus familiares.

Pretendemos, señores Senadores, que ningún español, en el trascendente momento del fallecimiento de un familiar, pueda lamentarse de que su cónyuge, sus hijos o sus padres han sido autopsiados en contra de su volun-

tad, por una razón tan grave como el desconocimiento de su derecho a oponerse.

Señores Senadores, esta enmienda no supone dificultar la ciencia. Esta enmienda supone simplemente hacer que sea necesario el conocimiento de la ley para que sea eficaz el principio de que todos los españoles somos iguales ante ella. En el caso de la muerte, con mucha mayor razón. Es el respeto a la libertad humana, es el respeto a la libertad de todos los españoles y al ejercicio de un derecho, y creo que los Senadores debemos poner todos los medios posibles para que cuando se produce un fallecimiento en un hospital y los familiares del fallecido no saben que pueden oponerse a que aquél sea autopsiado, sea el propio médico o el propio hospital el que les pregunte: ¿Autorizan ustedes que su familiar sea autopsiado?

Después viene, por parte de todos nosotros, el elevar el grado de cultura de todos los españoles, para que todos, cuando nos encontremos en un supuesto de muerte de algún familiar, o antes de morir, digamos: Sí, queremos que esa autopsia se haga, porque eso es bueno para la ciencia. Pero no sorprendamos a ningún español, porque nos podemos encontrar con que alguien —posiblemente de poca cultura— pueda decir al Senado: El Senado tuvo la posibilidad y la oportunidad de advertirme de algo en lo que yo, por la razón que sea y todas son muy respetables, como español no hubiera consentido nunca. Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el voto particular que ha sido defendido por el señor Fábregas, que veo que pide la palabra, y supongo que será para una cuestión de orden.

El señor FABREGAS GINE: Por coherencia. Pediría, si es posible, que se sustituyera la palabra «hospitales» por «centros». En la enmienda se dice: «Los hospitales a que se refiere el apartado anterior», y debe sustituirse por «Los centros a que se refiere el apartado anterior».

El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente?

El señor DUARTE CENDAN: No se puede enmendar una enmienda.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente en que se ponga «centros» en vez de «hospitales»? (*Pausa.*)

Tiene la palabra el señor de Armas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Senado.

El señor DE ARMAS GARCIA: Nos oponemos a esta enmienda. He sentido haber estado fuera de la Cámara cuando tuve la oportunidad de haber defendido, como portavoz del Grupo, la proposición de ley.

Nosotros consideramos que ya que está puesto de esta manera no debe variar, sino seguir como está, ya que lo que es incoherente es la enmienda con respecto a esta proposición de ley.

El señor PRESIDENTE: He preguntado si había algún inconveniente en que se sustituyera «hospitales» por «centros». Tiene la palabra el señor Vallejo.

El señor VALLEJO RODRIGUEZ: No me refiero al fondo del tema, sino a lo que supone esa enmienda, que se va a aprobar, porque hay intención de hacerlo.

En el texto de la proposición de ley se hacía referencia a que las autopsias estaban dirigidas a las personas que falleciesen en hospitales, pero después en Comisión se cambió el sentido. Luego, para ser exacta y correcta la información, el texto de la enmienda debería decir, no a las personas que ingresen en los centros, sino a todo el mundo, porque esta proposición de ley hace referencia no a los fallecidos en los centros, sino a toda persona, fallezca donde fallezca.

Comprendo que esa es la intención de UCD, pero así lo puede hacer más correctamente.

El señor PRESIDENTE: ¿En qué quedamos, señor Vallejo? ¿Se puede cambiar «centros» por «hospitales»?

El señor VALLEJO RODRIGUEZ: No se puede cambiar.

El señor PRESIDENTE: Pues no se cambia, y se vota tal cual está en el texto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 76; en contra, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda aceptado el voto particular defendido por el señor Fábregas, que postula la adición de un nuevo número 4 al texto del dictamen de la Comisión, por lo que será incorporado al dictamen.

Se someten a votación los números 1, 2 y 3 del artículo 3.º

¿Se pueden entender aprobados por asentimiento? (Pausa.)

Se aprueban por asentimiento.

El número 4 es el que ha sido incorporado al dictamen en virtud de la aprobación del voto particular con el resultado de 76 votos a favor y 64 en contra.

Artículo 4.º
y Disposiciones
adicionales
y final

Pasamos al artículo 4.º, Disposición adicional y final. ¿Se aprueban por asentimiento de la Cámara? (Pausa.)

Quedan aprobados.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en los términos que procedan, en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

INTERPELACIONES:

— DE DON ANTONIO GARCIA DUARTE, DEL GRUPO SOCIALISTA ANDALUZ, SOBRE PLANES QUE TIENE PREVISTOS EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR EL GRAVE PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN LA PROVINCIA DE MALAGA.

El señor PRESIDENTE: Seguidamente, a petición del señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, aquí presente, dado que tiene necesidad de cumplimentar otro compromiso, con la conformidad de los portavoces consultados de los Grupos mayoritarios y con la aceptación del señor interpelante, Senador

don Antonio García Duarte, va a alterarse el orden del día. Por consiguiente, entramos en el punto 4, para conocer de la interpelación formulada por don Antonio García Duarte, del Grupo Socialista Andaluz, sobre planes que tiene previstos el Gobierno para solucionar el grave problema de la vivienda en la provincia de Málaga, publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» con fecha de 21 de diciembre pasado.

El señor MONGE RECALDE: Pido la palabra para una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Monge.

El señor MONGE RECALDE: Si no he entendido mal, hay un cambio en el orden del día, que parece ser ha sido consultado con los portavoces de los Grupos.

El señor PRESIDENTE: De los Grupos maritarios. Ha sido una cosa improvisada, atendiendo la petición del señor Ministro.

El señor MONGE RECALDE: Si hubiéramos sido consultados habríamos dado nuestra conformidad, pero como precedente no es bueno que se margine a los portavoces de los Grupos minoritarios. Ruego que no suceda.

El señor PRESIDENTE: La consigna que he dado es que se consultara a los portavoces. Si se ha omitido la consulta téngase por consultado y asume la Presidencia la responsabilidad. Lo tendré en cuenta para el futuro.

Tiene la palabra el señor García Duarte.

El señor GARCIA DUARTE: Después de tanto muerto vamos a ver si ahora hacemos algo para que vivan mejor los vivos.

Nuestra interpelación, que tiene fecha de 4 de diciembre de 1979, comienza así: «El problema de la vivienda en la provincia de Málaga ha alcanzado límites de angustia, y en la capital verdaderamente dramáticos. La degeneración extrema a que se llegó aquí en su sistema de crecimiento impuesto sobre todo por la desenfrenada especulación nacional y extranjera del suelo sin control urbanístico,

con apoyo y complicidad del aparato político de entonces, ha contribuido fundamentalmente a la situación actual».

Hay problemas —yo diría males— que son característicos en toda España pero, por desgracia, esos males se agudizan casi siempre en Andalucía; y el de la vivienda, tan ligado al del desempleo, al de la renta, al de la manera en que se vive y al comportamiento social, en Andalucía tiene todas las agravantes.

En Málaga, ese inmenso telón de cemento de la Costa del Sol, aunque trate de ocultarla, no logra impedir ver la realidad: los desafueros urbanísticos, las destrucciones a ciegas sin el menor respeto a los moradores de viejos barrios, a la peculiaridad de su estilo y a la historia, no tuvo la contrapartida de alojar convenientemente a todos los perjudicados ni la de realizar una planificación que tuviera en cuenta el estilo tradicional urbanístico de Málaga. A lo que quedó en pie ni siquiera se le restauró o adoptó a las nuevas necesidades de la vida moderna. Viviendas y calles abandonadas a su ruina, inhabitabilidad e incomodidad. Quizá se pretendiera ofrecer a los turistas el espectáculo de una Málaga de miseria e infortunio. El parque de viviendas de la capital es de los más viejos de España. Según estimaciones de la Dirección General de Ordenación Territorial del MOPU, el déficit de viviendas en la provincia en 1978 es de 60.511, el más elevado de Andalucía. El 56 por ciento de esas viviendas carece de aseos e higiene. Las viviendas sociales necesarias podrían ser la mitad de esa cifra.

En estos momentos hay en Málaga capital unas 9.000 demandas de viviendas. Es posible que existan algunas que estén repetidas y otras no debidamente justificadas, pero la cifra es alarmante. También es cierto que muchas familias que viven en condiciones lamentables ni siquiera solicitan viviendas porque sus recursos no les permiten aspirar a una vivienda social, y otras no las piden ante la certeza de que de todas maneras no las van a conseguir, puesto que no las hay. Entre las solicitudes hay bastantes de familias que habitan viviendas declaradas en ruina, que se niegan a abandonarlas, pues no se les da otra. Esto constituye un riesgo permanente de catástrofe, pero ¿a dónde van?

Tenemos nuestro rico muestrario de chabolas y de barracones, que se construyeron provisionalmente, en casos de emergencia, pero que terminan siendo fijos. El hacinamiento y la promiscuidad es una constante de muchísimas familias que habitan viviendas, donde toda insalubridad e incomodidad tiene su asiento. Las parejas de novios que esperan piso para contraer matrimonio, y los matrimonios jóvenes que esperan un hogar, son abundantísimos.

Esta situación no es exclusiva de Málaga, esto es claro. Sin embargo, nos distingue, y hasta nos da un triste privilegio, el entorno, el marco en que esa situación se da. En primer lugar, no es lo mismo soportar esas carencias en una zona de desarrollo que en Málaga, a la que muchos economistas califican como la capital del subdesarrollo andaluz. Después, porque el problema de la vivienda está absolutamente vinculado al del paro y, particularmente, al de la construcción.

Málaga está en el pelotón de cola en el ingreso «per capita», pese a su ubicación geográfica y estratégica. Aquí se basó todo en el binomio turismo-construcción, y tanto lo uno como lo otro no pueden ser más aleatorios y, por supuesto, insuficientes. La construcción, que es lo que más directamente nos afecta en este caso, representaba en 1973 el 55 por ciento de la población activa empleada en el sector secundario, cuando el promedio nacional era del 31 por ciento. Suponía en Málaga el 16 por ciento del total de la población activa, cuando la media nacional era del 10,9 por ciento.

El valor añadido bruto de la construcción en la provincia es del 40 por ciento sobre el valor de la producción industrial total, cuando la media nacional es del 25 por ciento.

Estos son datos del libro escrito por un grupo de universitarios y editado por la Caja de Ahorros Provincial, «Introducción a la economía malagueña». Esto nos demuestra que la contracción en la actividad constructora en Málaga origina una baja porcentual en la producción y en el empleo de un 60 por ciento, como mínimo, mayor con mucho que el equivalente a nivel nacional.

En Málaga hay más de 60.000 parados. Un tercio de los mismos son de la construcción. Para colmo de males, no cobran el subsidio

de desempleo el 62,79 por ciento de los parados. Y no es todavía más dramática la situación por la sangría de la emigración. En los treinta y cinco últimos años, Andalucía ha perdido dos millones de habitantes por emigración. A principios de siglo, Málaga era la provincia más poblada de Andalucía; hoy ha descendido al tercer puesto. El crecimiento vegetativo disminuye constantemente en los últimos años. El crecimiento demográfico está por debajo de la media nacional. Sin embargo, la emigración al extranjero tiene la contrapartida de una importante fuente de divisas para el Tesoro español.

La falta de viviendas, el alojamiento en malas condiciones, con insalubridad y falta de higiene, el paro, producen comportamientos antisociales en personas que padecen todo eso, con manifestación más notoria en el alcoholismo, droga, prostitución y elevado índice de delincuencia juvenil. Y es que el paro y la falta de viviendas adecuadas son un atentado a la dignidad del hombre y a su seguridad.

En este contexto de subdesarrollo y abandono se produce la visita a Málaga a mediados de marzo de 1978 del Ministro del Interior, señor Martín Villa, acompañado por todo un estado mayor compuesto de nueve directores generales, cinco subdirectores generales y un secretario general técnico, correspondientes a diez Ministerios. Por la presentación que tuvo esta visita a Málaga nos creímos que habían llegado los Reyes Magos, Santa Claus y Papá Noel, todos juntos. Un hermoso regalo para nuestra provincia. Todo quedó en un «bienvenido, mister Marshall».

Los planes que se presentaron y las promesas hechas fueron muchas y muy diversas; hoy nos interesan las relativas a la vivienda. Aseguró el señor Martín Villa que una vez al mes se reuniría con una comisión informal en Madrid, formada por las autoridades malagueñas con otras oficiales y él mismo, para tratar de toda esta serie de proyectos pendientes y de su realización, y cada tres meses él mismo iría a Málaga para ver sobre el terreno la marcha de dichas realizaciones. Nadie supo nada de esas reuniones mensuales ni el señor Martín Villa volvió más por Málaga.

El Instituto Nacional de la Vivienda pro-

metió solución a la financiación de 4.577 viviendas sociales de promoción privada, con un importe total de financiación por el Estado de 3.387 millones de pesetas, y construcción directa por el Estado de otras 1.312 viviendas sociales, con un importe total de 1.700 millones de pesetas.

El propio señor Martín Villa abundó en ello y hasta fue más lejos. Estas fueron sus palabras recogidas entrecomillado por la prensa malagueña: «Tenemos en estudio la construcción de 10.000 vivienda sociales de promoción privada, y el Instituto Nacional de la Vivienda tiene en este momento 1.300 viviendas en construcción, que se van a incrementar con la construcción de 900 más a iniciar dentro de este año» —1978—. «Con esto —sigue diciendo el Ministro— pondremos en oferta del orden de más de 2.000 viviendas, y también se ha estudiado la posibilidad de que una parte importante de la promoción financiada por el sector privado sea comprada por el Instituto Nacional de la Vivienda para ponerlas a disposición de la Comisión Provincial de Gobierno, para ser adjudicadas como viviendas de construcción directa, que son las más baratas». El Alcalde de Málaga entonces, hoy Presidente Provincial de UCD, rubricaría muy satisfecho: «Esto no se va a quedar en promesas».

Así las cosas se produce la tromba de agua de 10 de noviembre de 1978, con las graves inundaciones que revistieron caracteres catastróficos y dejaron sin vivienda a muchas familias y dañaron las de muchas más. No le faltaba a Málaga más que aquella inundación; inundación doble, porque a la física de la naturaleza se unió en seguida otra de nuevas promesas.

Ya es tradicional la inadecuada infraestructura de la ciudad de Málaga a merced de las tormentas. Preguntado el Alcalde de entonces sobre las previsiones tomadas ante esa fragilidad, dijo que estaba contemplada en un estudio de necesidades realizado por el Ayuntamiento, que fue en diferentes ocasiones expuesto al Gobierno. Concretamente —precisó— iba tal estudio técnico en el dossier que la Corporación Municipal malagueña presentó al Presidente Suárez a primeros de este mismo año 1978, y que luego, con motivo de la visita del Ministro del In-

terior, señor Martín Villa, fue reiterado en Málaga. Promesas e imprevisiones.

Se habló mucho también de la rápida adquisición de 800 viviendas, otros decían 900, para paliar la agravación del problema producido por la inundación. En una nota de los parlamentarios malagueños de UCD, que por segunda vez visitaron a Suárez, se dice que se ha ultimado un plan de choque en materia de viviendas. Otro Diputado del mismo Grupo dice días después que la acción especial que el Gobierno ha proyectado para Málaga supone un estudio exhaustivo, por parte de todos los Ministerios, de las necesidades de Málaga y de su comarca para poder iniciar su desarrollo integral durante los próximos cuatro años. Ya ha pasado año y medio y estamos igual que el primer día: sin nada o, mejor dicho, con promesas. Incluso el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo de entonces, señor Garrigues Walker (al que, dicho sea de paso, deseo un rápido y pronto restablecimiento), según me han dicho en un organismo del MOPU, llegó a prometer 3.000 viviendas para Málaga y terrenos para 4.000. Lo cierto es que, como consecuencia de aquella inundación, el MOPU ha adquirido tan sólo 318 viviendas, que ahora están terminándose de adjudicar, después de una serie de pegas y aplazamientos.

A los damnificados que perdieron su vivienda a causa de la inundación se ha tardado un año justo en adjudicarles hogar a las cuarenta últimas familias, después de una larga y triste peripecia de paso por pensiones y de protestas. Ahora —y esto sí que parece que es lo cierto— el MOPU tiene programadas en 1980 para la provincia de Málaga 1.600 viviendas sociales, de las cuales se destinan a la capital 141.

¿Dónde está la realización de todas esas y otras promesas? De vez en cuando una riada de promesas, cifras y planes hacen olvidar la riada precedente, pero la verdad está ahí, lacerante, como la acabo de exponer. Nos sobran ya en Málaga cifras, proyectos que se pierden, ideas, papeles, manifestaciones de interés, estudios que no sirven para nada, ofrecimientos verbales, parados, nos sobran promesas. Nos faltan viviendas, entre otras cosas, hechos: que se cumplan.

La vivienda es un bien de primera necesidad que sólo está precedido en la escala de las necesidades humanas por la alimentación. Sin vivienda adecuada es una quimera el más elemental de los derechos: el derecho a la vida. Nuestra Constitución, en su artículo 47, dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

Por todo ello, y en interés de todos los ciudadanos, mantenemos las siguientes preguntas: ¿por qué no se han cumplido las promesas sobre construcción de viviendas hechas por el Gobierno a raíz de las inundaciones de 1978? ¿Qué plan tiene el Gobierno para resolver o al menos reducir de manera sensible y con urgencia ese problema? ¿Por qué no establece rápidamente un plan especial para la adquisición y construcción de nuevas viviendas, teniendo en cuenta las peculiares características que aquí concurren?

Yo recomendaría a los señores Senadores que todavía no hayan tenido la feliz oportunidad de visitar Antequera, que lo hagan. Allí podrán admirar una obra sensacional, construida 2.500 años antes de Cristo, en el megalítico, dedicada al espíritu. Se trata de un hipogeo. Cuando toda Europa estaba sumida en la barbarie, en el sur de la península se desarrollaba una cultura que nos ha dejado el dolmen más grande de los que existen en el mundo: la Cueva de Menga. Es impresionante. Esa cultura fue extendiéndose hacia el norte y también hacia el sur por el norte de Africa. Los dólmenes y menhires se construyeron en Portugal, la Bretaña francesa, Inglaterra, en las orillas del Danubio y Países Bálticos, pero su raíz, y yo diría su catedral, es la Cueva de Menga, en Antequera. Hoy los descendientes de aquellos hombres, de aquella civilización, no pueden llevar fuera sus construcciones. Piden, sencillamente, que todos tengan un hogar decente y digno para vivir. *(El señor Vicepresidente ocupa la Presidencia.)*

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): En nombre del Gobierno responderá al interpelante el señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

El señor MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO (Sancho Rof): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en primer lugar, mi agradecimiento por la alteración del orden del día. Tengo un acto de Estado a las nueve, al que me temo que quizá no vaya a llegar tampoco.

Intentaré ser breve, refiriéndome exclusivamente a lo que entiendo que es motivo de la interpelación, que es el problema de la vivienda en Málaga y, concretamente, en relación con las inundaciones de 1978. El resto de la intervención del señor Senador interpelante entiendo que puede tener contestación por otros miembros del Gobierno o por mí mismo, pero es otro tema ajeno al cuerpo de la interpelación.

No quiero dejar de referirme, sin embargo, a los compromisos concretos del año 1978, en materia de vivienda, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, consecuentes con la riada. Tengo delante, y se podía dar copia al señor Senador, la carta del entonces Ministro de Obras Públicas y Urbanismo al Gobernador Civil de Málaga de entonces, de fecha 15 de noviembre de 1978, sobre las actuaciones concretas del Instituto Nacional de la Vivienda en aquel momento. Estas actuaciones eran envío inmediato de ajueres, por tres millones de pesetas, que se efectuó; 20 millones de pesetas para atender gastos de realojamiento e indemnización, que se ejecutó inmediatamente; cincuenta albergues prefabricados, que se enviaron a la semana siguiente; 400 millones de pesetas para reparación de viviendas del Instituto Nacional de la Vivienda, de la antigua Obra Sindical del Hogar, que se ejecutaron por procedimiento de urgencia de forma inmediata, y una subvención extraordinaria de 50 millones de pesetas para mejora de viviendas, que también se efectuó.

Y decía el punto 6.º: «Investigación urgente de las disponibilidades de viviendas de protección oficial existentes en Málaga, terminadas o próximas a terminarse, para programar una operación de compra de dichas

viviendas por el Instituto Nacional de la Vivienda para destinarlas a programas de realojamiento de familias damnificadas». Este era el compromiso y a él me referiré después.

El tema de viviendas en Málaga, efectivamente, como ha dicho el señor Senador, es preocupante, como lo es en muchos puntos de España, singularmente en varios de Andalucía y especialmente en Málaga, y en eso doy la razón al señor Senador que hace la interpelación. Ahora bien, las cifras hay que verlas en su conjunto. No hay que ver sólo lo que es la actuación de construcción directa del Instituto Nacional de la Vivienda, sino lo que es la construcción de viviendas subvencionadas con los Presupuestos del Estado, que no necesariamente tiene que hacer el Instituto Nacional de la Vivienda.

Según los datos que yo tengo, y estoy dispuesto a contrastarlos, en Málaga capital, viviendas de construcción directa por el Instituto Nacional de la Vivienda entre los años 1977, 1978 y 1979 son 1.308, detalladas en diferentes polígonos.

Por otra parte, como Sus Señorías saben, el Gobierno aprobó el año 1977 un plan extraordinario de viviendas para Andalucía, Extremadura y Canarias, el llamado Plan PACE, que se ejecutaba por promotores privados, pero con la financiación del Estado, del Instituto Nacional de la Vivienda. Ese plan previó, estableció y financió en la ciudad de Málaga 2.360 viviendas sociales, ahora viviendas de protección pública. Muchas de estas viviendas, por dificultades financieras de las propias empresas, están todavía en construcción, pero el esfuerzo del Estado fue el subvencionar la construcción de estas 2.360 viviendas.

En lo que se refiere a la compra de viviendas, efectivamente, cumpliendo aquel compromiso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de hacer la investigación y compra de viviendas, realizó un concurso, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de compra de viviendas en determinadas zonas del país (y, entre ellas, el municipio de Málaga era prioritario), por importe de 4.500 millones de pesetas, y en este momento está abierto otro concurso de compra de viviendas (y también una de las zonas prioritarias es Málaga capital), por importe de otros 4.500

millones de pesetas. Es un concurso publicado el 4 de febrero y que se cierra el 31 de mayo.

Lo que yo lamento es decir a la Cámara, y especialmente a Su Señoría, que en el anterior concurso sólo se ofertaron al Ministerio las viviendas a que se ha referido Su Señoría, esas 318. Y no se pudieron comprar rápidamente porque no estaban libres de cargas, sino que el constructor tenía una hipoteca, y hasta que no se liberó la hipoteca no se pudo comprar. Esto es lo que dice la legislación del Estado en cuanto a compra de viviendas, que tienen que estar libres de cargas, y lamentablemente —porque el Ministerio tenía sus previsiones para el nuevo concurso— hasta este momento nadie en el municipio de Málaga ha presentado ninguna oferta para comprarle viviendas. En ese sentido, lo que no puede hacer el Ministerio es comprar lo que no se le oferta. El concurso está abierto hasta el 31 de mayo y veremos si de aquí al 31 de mayo se ofrecen esas viviendas.

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo tiene programadas en Málaga, en este momento, sólo 141 viviendas, es cierto, y le voy a decir por qué: porque en Málaga no hay suelo. La historia que ha contado Su Señoría es cierta, es una historia que tenemos ahora, que el suelo no se puede inventar, y no hay suelo. Lo que sí puedo asegurar a Sus Señorías es que el Ministerio ha hecho todos los esfuerzos posibles con el Ayuntamiento de Málaga para llegar a una coordinación sobre la disposición de suelo para construcción de viviendas sociales, y si sólo se han programado 141 viviendas es porque no ha habido forma humana de encontrar suelo cuyo precio entre dentro del módulo de viviendas sociales o de protección oficial, que es el 15 por ciento del módulo para construcción.

Hace muy pocos días nos llegó una oferta, ya cerca de Torremolinos, de un terreno particular, que se está estudiando si entra en el precio del módulo para poder adquirirlo. Pero puedo decir a Sus Señorías que ha habido conversaciones particulares con el Alcalde de Málaga por parte del Subdirector General de la Promoción del Instituto Nacional de la Vivienda y por parte del Director General del Instituto Nacional de Urbanización para in-

tentar encontrar suelo calificado urbanizado y hasta ahora no hemos tenido más que la callada por respuesta.

Concretamente se le ha pedido al Ayuntamiento de Málaga el cambio de uso de una parte del polígono de Guadalhorce, porque entendemos que es un polígono industrial suficientemente amplio y que parte de ese polígono se podía calificar de uso residencial, y por ahora se nos dice que la actuación está pendiente por parte del Ayuntamiento. El escrito al Ayuntamiento de Málaga concretamente es una carta solicitando 25 hectáreas del polígono de Guadalhorce, señalando que podemos hacer inmediatamente 50 viviendas por hectárea si se transformara en suelo residencial, pero aún no hemos tenido contestación.

El 4 de octubre de 1979, antes de la interpelación, se solicitó al Ayuntamiento de Málaga otra vez esta calificación y cesión del suelo. La solicitud se ha reiterado el 18 de marzo, sin que se haya recibido contestación sobre el particular.

No entro en los problemas urbanísticos que lógicamente tiene Málaga, porque son competencia del Ayuntamiento, pero lo que sí aseguro a Sus Señorías es que el Ministerio está haciendo todos los esfuerzos posibles para encontrar en Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento, suelo para construcción de viviendas, y se podrían programar más viviendas en Málaga municipio si se encontrase ese suelo, pero no si no se nos facilita ese suelo que es imprescindible para construir las viviendas.

Yo confío y espero que también la preocupación que aquí se ha expuesto se traslade al Ayuntamiento de Málaga y esas conversaciones con el Ayuntamiento fructifiquen, bien en la recalificación de esas hectáreas del polígono de Guadalhorce o bien en una cesión de otro suelo a precio asequible en el que podamos construir, porque el problema, efectivamente, como decía Su Señoría, es especialmente grave.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Señores Senadores que como portavoces de sus Grupos deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)

Por el Grupo Socialista Andaluz tiene la palabra el señor Montaner Roselló.

El señor MONTANER ROSELLO: Señor Presidente, Señorías, señor Ministro, intervengo en nombre del Grupo de Senadores socialista de POSE para apoyar esta interpelación, que de forma genérica se podría ampliar a toda Andalucía.

En primer lugar, decir al señor Ministro que dentro de las obligaciones de Estado están también las obligaciones del representante del Gobierno con la Cámara, y que el problema de la vivienda en Andalucía, el problema de la vivienda en Málaga, es también una obligación de Estado y que como tal entendemos que es una obligación que hay que afrontar desde la Constitución, desde la responsabilidad del Ejecutivo y desde la presencia en esta Cámara, que en nombre de mi Grupo yo agradezco, del señor Ministro.

Indudablemente, éste es el momento de debatir los diferentes proyectos de ley que se están debatiendo en el Congreso y que, procedentes de los Ministerios, a través del Gobierno, afectan al urbanismo, a la ordenación del territorio, a la vivienda y al uso del suelo como soporte de la actividad humana.

Tampoco hoy vamos a instalar en esta Cámara una especie de tribuna que analice, que enjuicie o que critique la política que sobre vivienda hizo el régimen anterior y la instrumentación, a través de la extinguida Obra Sindical del Hogar, que hizo que la vivienda fuera utilizada como herramienta política, ya que las Corporaciones democráticas conocen esta realidad, los Colegios profesionales así lo han denunciado y lo han estudiado con la objetividad que corresponde a estas instituciones profesionales.

Como decía el compañero interpelante, señor García Duarte, ya disfrutamos de una Constitución que entre todos los españoles hemos hecho. En esa Constitución se reconoce, en su artículo 45, el derecho a disfrutar de una vivienda digna.

Hoy deseáramos recordar, de alguna manera, la intervención que los socialistas del PSOE tuvimos en la sesión de 27 de diciembre de 1979, cuando discutiendo los Presupuestos Generales del Estado, en la Sección 17,

que es del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, pedíamos precisamente que los fondos del INV, de 43.000 millones de pesetas, que el INV tiene dispuestos para el ejercicio del año 1980, pedíamos que de alguna manera se transfirieran, se colaborara, se trabajara coordinadamente con los entes pre-autonómicos, con los entes autonómicos y con los Ayuntamientos, y esto venía apoyado por otro artículo de la Constitución, el 148, apartado 3, que estipulaba que los entes pre-autonómicos tienen competencia en esta materia.

Sólo, apoyando la petición de los Senadores andaluces del PSOE, quisiera que el Gobierno explicara, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en cuanto a viviendas se refiere, la programación de viviendas, de alguna manera generalizada, que pudiera hacer en ese plan trienal que tan celosamente, que tan secretamente está llevando a cabo con miembros de su Comité Regional de UCD de Andalucía.

Yo no voy a hacer el relato que ha hecho mi compañero García Duarte sobre las promesas que en materia de programación de viviendas se han hecho a lo largo de estos últimos años. En el año 1976, el Ministro de Hacienda prometió para Andalucía más de 100.000 millones de pesetas a invertir en viviendas en un plan trienal; el Ministro Garrigues (y tengo los recortes de prensa) hablaba en el año 1978 de inversión de otros 140.000 millones de pesetas en viviendas, y últimamente se habla, por parte del Ministro de Hacienda, señor García Añoveros, y por parte del responsable de Obras Públicas y Urbanismo, de 140.000 millones de pesetas, que entendemos que es la parte sustancial que afecta a Andalucía que debería recogerse en el tema de viviendas.

Pedimos al Gobierno indudablemente que promueva viviendas en Andalucía, que nos diga cuántas, dónde y cuándo las piensa construir. No queremos entrar en la dinámica ni en la discusión de su programa político, porque entendemos que ése es su programa político y su responsabilidad; sólo queremos que Andalucía alcance esos niveles nacionales, pues, como ha dicho el compañero García Duarte, estamos por debajo de la media nacional. A modo de datos generales puedo

decir que Andalucía está, junto con Canarias, Galicia y Navarra, por debajo del índice de participación regional, que es la relación entre el número de viviendas que posee, respecto al total nacional, en razón al porcentaje de su población.

Según el Ministerio de la Vivienda, actual de Obras Públicas y Urbanismo, para 1975 se iba a poner en funcionamiento suelo para 1.500 viviendas, con sus correspondientes 30.000 hectáreas. A Andalucía le correspondían, en razón al suelo y en razón a una publicación del propio Ministerio, algo más de 200.000 viviendas. Según la documentación básica del IV Plan de Desarrollo, y según también programas de los órganos ejecutivos del Gobierno, se preveían unas necesidades para 1979 en Andalucía de casi 200.000 viviendas. Preguntamos qué es lo que ha ocurrido con estos proyectos.

El déficit de viviendas en toda Andalucía el 31 de diciembre de 1975 —son datos también del Ministerio de la Vivienda— era del 20 por ciento respecto al déficit del total nacional, cuando sólo en Andalucía representamos el 17 por ciento de la población y el 17 por ciento del territorio. Sin embargo, sí superamos ese porcentaje cuando hay que hablar de déficit de equipamiento y vivienda.

Respecto a la calidad de las viviendas de Málaga o cualquier provincia andaluza, debo coger también datos oficiales que no pueden establecer ninguna duda sobre su veracidad, ya que el Instituto Nacional de Estadística, en las encuestas de equipamiento y nivel cultural de la familia española da el dato de que Andalucía maneja los niveles más bajos de consumo y equipamiento de las regiones de España. La misma encuesta da el índice mayor de hacinamiento y el menor de superficie en metros cuadrados por vivienda.

A esto hay que añadir el retroceso que a lo largo de estos diez últimos años se ha producido, en pesetas constantes, en la financiación que daba el Instituto Nacional de la Vivienda a través de la asignación de fondos para promoción libre y promoción directa de viviendas, o de apoyo de créditos, y también de esta financiación a través del Instituto de Crédito Oficial y Banco de Crédito a la Construcción, que ha ido bajando y retrocediendo en estas pesetas constantes. Del retroceso de

este número de viviendas de protección oficial y promoción directa del Instituto Nacional de la Vivienda hay datos suficientes. Inicialmente podríamos decir, a modo orientativo, que en el año 64 el 90 por ciento de las viviendas que se ejecutaban eran de promoción oficial, y solamente el 10 por ciento eran libres. Ese 90 por ciento de promoción oficial eran viviendas subvencionadas, grupo primero y grupo segundo, y de gestión directa. En ese año 64 el 90 por ciento era de protección oficial y el 10 por ciento libres, y hemos pasado en el año 78 sólo al 45 por ciento de protección oficial y el 55 por ciento libres.

A juicio de los socialistas andaluces del PSOE, hay una dejación de responsabilidad, en cuanto que la Constitución reconoce que es una obligación del Estado, de la Administración, el conseguir una vivienda digna, que no se puede poner en manos exclusivamente de la iniciativa privada. A modo de ejemplo podemos decir —son datos que no pueden ser nunca tildados de subjetivos, de tendenciosos o partidistas, porque estoy manejando los datos de la Asociación Nacional de Promotores y Constructores y de las encuestas oficiales del antiguo Ministerio de la Vivienda, así como de la actual Dirección General de Urbanismo— que en el año 70 se terminan 308.049 viviendas, y en el 78 sólo se terminan 318.870, es decir, unas 10.000 viviendas más en toda España, al cabo de ocho años. Este retroceso, esta tendencia regresiva en el subsector vivienda, dentro del sector de la construcción, está denunciado con datos que desde los diferentes estamentos se han manifestado y se han dirigido siempre al Ministerio.

Todo esto, indudablemente viene apoyado por la necesidad de creación de puestos de trabajo. En Málaga son muy elocuentes los datos, a través del subsector vivienda, que es el que tiene capacidad para crear más puestos de trabajo, ya que por vivienda se crean 1,2 empleos directos y 0,6 de empleos inducidos, sin contar los empleos complementarios, que indudablemente hacen que por cada vivienda que se construya se esté potenciando la creación de casi dos puestos de trabajo directos. Eso sin entrar en la discusión de lo que pue-

de ser el estudio crítico de la situación de la economía andaluza en razón a la dependencia del resto de los territorios de Estado, en el sentido de que por no ser un sector autosuficiente, cualquier puesto de trabajo creado en el sector de la construcción en Andalucía crea otros puestos de trabajo fuera del territorio andaluz. Esto nos preocupa desde una óptica de solidaridad y de resolver los problemas de Andalucía.

Para terminar, con permiso del señor Presidente, quisiera agotar un par de minutos ante esta Cámara, diciéndole que el problema del paro ya denunciado en Málaga, se puede generalizar a Andalucía, en el sentido de que el sector de la construcción absorbe prácticamente el 25 por ciento del total de este paro. En Andalucía son casi 400.000 los parados, y al sector de la construcción pertenecen casi 110.000.

Pediríamos al Gobierno que, con la clarificación de ese programa de que tanto se está hablando en la prensa, iniciara la construcción de una cantidad mínima de 300.000 viviendas para Andalucía en el trienio 1980-83, que iniciara la inversión y creación de 120.000 puestos de trabajo directos a través de 100.000 viviendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Antes de darle la palabra al señor Pérez Fernández, pediría a la Cámara que excusase la ausencia del señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, pues consta a esta Presidencia que a las nueve se celebra una cena en el Palacio Real en honor del Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, que es huésped de honor del Estado español.

El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, yo creo que no tiene sentido la ausencia del señor Ministro en la interpelación, pues entonces por parte del Grupo interpelante prescindiríamos de la misma ahora y esperaríamos a hacerla con la presencia del señor Ministro.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Esta Presidencia va a hacer una sugerencia: que el Senador Pérez Fernández sea lo más breve posible, y después el Sena-

dor Villodres, que tiene pedida la palabra, también.

El señor Ministro de Obras Públicas tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO (Sancho Rof): Señor Presidente, agradezco mucho las palabras del señor Presidente y del Grupo Socialista. Yo lo que querría decir es que creo que el tema de la vivienda es un tema importante y preocupante, y que dentro del programa del Gobierno, de ese programa de 700.000 millones, que se explicará a la Cámara y a los Grupos que lo deseen, yo adquiero ese compromiso. A lo que me brindo al Senado es a tener una sesión sobre el tema de la vivienda, que es el que estamos debatiendo.

Los datos que han sido citados por el Senador que anteriormente ha hecho uso de la palabra, yo tendría que contrastarlos, porque tengo algunos datos que no coinciden con los suyos. El tema de la financiación del Estado no se refiere sólo al Instituto Nacional de la Vivienda, sino que entra también el Banco de Crédito a la Construcción, el Hipotecario, etc. Por todo ello, lo que ofrezco a la Cámara es que tuviéramos en una próxima sesión, en la semana que viene o en la siguiente, un debate, en Pleno o en Comisión, sobre el tema concreto de la vivienda, que creo que es importante que lo clarifiquemos entre todos.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Ante esta sugerencia del señor Ministro de Obras Públicas, entiendo esta Presidencia que cualquiera de los portavoces debe presentar una proposición no de ley respecto de toda la problemática y política en el sector de la vivienda para debatirla en una sesión a la cual, amablemente, se ofrece asistir el señor Ministro.

El señor García Duarte tiene la palabra.

El señor GARCIA DUARTE: Creo que tengo derecho a cinco minutos de rectificación, para liquidar el problema de la interpelación.

Querría puntualizar al señor Ministro que agradezco que haya tenido la deferencia de dar esas cifras; pero es que, en realidad, el problema está igual. Para este año no hay más que 141 viviendas en Málaga capital. Las 318

no son sino parte de las que se ofrecieron después de las inundaciones, sin contar las promesas anteriores a que antes he aludido.

No me parece correcto que se culpe al Ayuntamiento de Málaga de que no se construyan más viviendas, porque suponiendo que queden pendientes las veinticinco hectáreas del Polígono de Guadalhorce, lo cierto es que el Ayuntamiento lleva un año de existencia, que está haciendo un Plan de ordenación urbana, que tienen que producirse expropiaciones y que el Ayuntamiento no tiene un céntimo. Yo creo que antes de culpar a los Ayuntamientos de estas carencias, primeramente había que dotarlos de las competencias, de los recursos y de la autonomía; yo diría más: de la nueva ley que está haciendo falta, la nueva Ley de Administración Local. Eso es lo que creo que más falta está haciendo a los Ayuntamientos.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): El señor Ministro tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO (Sancho Rof): Muy brevemente, señor Presidente, para terminar el debate.

Yo no he culpado a nadie, sólo he constatado un hecho, el de que estamos entre todos intentando buscar suelo en Málaga. Las 25 hectáreas del Polígono de Guadalhorce no cuestan dinero al Ayuntamiento de Málaga; nada más que es un problema de recalificación.

Yo confío que este tema se podrá resolver, porque es un tema fácil de resolución. Si eso se resuelve, en una programación normal de 50 viviendas por hectárea, son 1.250 viviendas las que podríamos empezar a construir. En nuestro programa el incluir 141 no es porque sólo vayamos a hacer 141; es porque sólo tenemos suelo para hacer 141. Si ese tema de suelos se resuelve —y yo apelaría a la aportación del Grupo Socialista para empezar a resolverlo—, se pueden empezar a construir las 1.250. No sé si este año, pero por lo menos entre este año y el que viene.

No he acusado a nadie, únicamente he constatado un hecho.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL CUERPO ESPECIAL DE INSPECTORES TECNICOS DE FORMACION PROFESIONAL.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Concluida la interpelación, retrocedemos al punto tercero del orden del día, dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en relación con el proyecto de ley del Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de fecha 25 de abril de 1980.

Se han formulado diversos votos particulares a este proyecto de ley y, por lo tanto, tiene que haber defensa del dictamen por el portavoz o portavoces que a tal efecto haya designado la Comisión.

Pregunto al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura si la Comisión ha designado ponente para defender el dictamen.

El señor BROSETA PONT: Sí, señor Presidente, la Comisión designó por unanimidad al Senador don Feliciano Román.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): El Senador señor Román tiene la palabra.

El señor ROMAN RUIZ: Señor Presidente, Señorías, me corresponde el alto honor de presentar ante esta Cámara el dictamen de la Ponencia y de la Comisión, puesto que las dos veces he intervenido, respecto a este proyecto de Ley del Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional.

Brevísimamente, en un recuento histórico, diremos que esta ley, aunque fue enviada por el Gobierno con bastante anticipación, ha sido publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», correspondiente al Congreso, el 17 de octubre de 1979; el 4 de diciembre tenemos el informe de la Ponencia del Congreso; el 8 de enero el dictamen de la Comisión,

y el 4 de marzo publica el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», correspondiente al Congreso, el dictamen del Pleno del Congreso. En el «Boletín Oficial» de nuestra Cámara aparece el 7 de marzo ese texto remitido por el Congreso y muy rápidamente se constituye la Ponencia que empieza a estudiarlo.

En principio, en esta Ponencia la unanimidad parecía que iba a reinar. Y digo en principio porque apenas comienzan los trabajos de la Ponencia indudablemente hay acuerdo unánime en que se eleve el número de estos Inspectores Especiales del Cuerpo que se va a crear, de 135 a 180 plazas. Se argumenta —trato de hacer de relator de los hechos— que si por entonces, inicialmente se proponían 90, pasaron a 135 en el Congreso, y después hay alguna propuesta en favor de que sean 180, no hay en este momento ningún inconveniente, dada la circunstancia de que el Cuerpo de numerarios de Formación Profesional ha sido incrementado notablemente en los últimos tiempos. Siendo así, y puesto que la ley prevé que el número de Inspectores que se vayan creando vayan a ser detraídos de los numerarios, no parece que haya ningún problema en que se incremente el número de estos Inspectores.

Pero poco después, muy poco después de tener este acuerdo unánime en la Ponencia, ya empiezan las discrepancias, discrepancias que no son de fondo, en principio, que no son de filosofía, porque es curioso que, en cuanto a la filosofía, en cuanto a la intención que movía a los componentes de la Ponencia de la elevación del nivel de la Formación Profesional, eran absolutamente unánimes. Todos estábamos de acuerdo en que el futuro de la enseñanza y de la educación en España pasa por la Formación Profesional; que la potenciación de esta Formación Profesional es imprescindible para que en el futuro tengamos profesionales mejor dotados, profesiones mejor servidas e, indudablemente, una serie de campos que estén servidos por profesionales con mucha más capacitación. Todos estábamos de acuerdo en lo necesario que era potenciar esta Inspección de Formación Profesional por las peculiaridades que tiene tal enseñanza. Había unanimidad absoluta en entender que la labor de estos inspectores, cuyo cuerpo se trata de crear, no

era puramente la de hacer de guardias vigilantes de aquellas conductas que no fueron correctas, sino la de hacer de auténticos animadores en este campo de la Formación Profesional.

Entonces, el Senador que les habla y que tiene que hacer de relator en este momento, piensa que en el momento concreto de redactar el proyecto de ley, hay diferencias entre nosotros; diferencias, unas, puramente de redacción; otras, quizá de fondo; alguna diferencia que se vio a lo largo de la Ponencia quizá porque los representantes del Grupo Socialista en la Ponencia pretendían que hubiera una enumeración concreta de tres áreas y, quizá, los Ponentes por el Grupo de UCD entendíamos que era preferible que no existiera una enumeración muy exacta de tres áreas, aún cuando entendíamos que filosóficamente sí existían tales áreas —en la práctica, hoy por hoy, existen: Un área tecnológica, un área humanística y un área de prácticas—, pero que, a pesar de todo, convendría que dejáramos en la ley la puerta abierta a la posibilidad de que en un futuro más o menos inmediato hubiera necesidad de crear algún área más.

Por todo eso es por lo que defendíamos una fórmula que a algunos puede parecer ambigua, y es que, en vez de crear exactamente tres áreas, se diga «las que reglamentariamente se determinen».

Había alguna otra diferencia también —repito que estoy tratando de hacer de relator de lo que allí sucedió—; por ejemplo, los representantes del Grupo Socialista en la Ponencia estimaban que era necesario fijar que el número de plazas de cada área fuera el mismo.

Después de un intercambio de opiniones, llegamos a la conclusión de que eso hasta podía ser un grave inconveniente para aquellos centros de Formación Profesional donde las especialidades sean múltiples. Concretamente, por ejemplo, el área humanística tiene los mismos contenidos; el área tecnológica también contenidos más o menos semejantes, y, sin embargo, el área de prácticas pueda ser muy diversificada porque existan especialidades múltiples, lo que sucederá principalmente en las grandes áreas urbanas. Ahí, entonces, era fácil llegar a un acuerdo y era

preferible no citar exactamente que haya en cada área el mismo número de inspectores porque podría convenir que en algún momento en el área de prácticas hubiera más inspectores que en las otras áreas.

Por otra parte, si se especificaba de manera exacta y matemática que hubiera el mismo número y se nombraba además alguno de los estamentos que existen en la Formación Profesional, podría suceder que para los no nombrados fuera un poco vejatorio. Podría suceder —según la opinión de alguno de los componentes de la Ponencia y en concreto del Grupo de UCD— que citar a unos sí y a otros no, fuera discriminatorio. Entonces, por eso es por lo que estimábamos que sin volcarlos por lo corporativista, era preferible que quedara una fórmula que, aunque en principio y para una ley puede parecer ambigua, sin embargo, deja la puerta abierta a eso que de antemano decíamos que es tan especial y específico como la Formación Profesional, con una problemática absolutamente específica y absolutamente diversa de lo que entendemos por unas enseñanzas regladas que podían tener una trayectoria mucho más ambigua. Esto está en plena ebullición y posiblemente muy sujeto a cambios.

Pocos días después, el 23 de abril —trato de resumir lo que sucedió en la Comisión—, en la Comisión se repitió casi exactamente el intercambio de opiniones que se dio en la Ponencia y que acabo de relatar someramente.

No se aceptó por mayoría la enmienda socialista al artículo 3.º, que se reservó como voto particular. No se aceptó por mayoría —aunque sólo fuera en parte— la enmienda socialista al artículo 4, 1; no se aceptó la enmienda número 4 de la Senadora Pinedo; sí se aceptó en parte —aunque con unas palabras que fueron añadidas en la Comisión por mayoría, que son enormemente significativas— la enmienda número 5 de la Senadora Pinedo. En esa enmienda número 5 hubo bastante discusión y se trató de introducir, y por mayoría se aprobó, la que podríamos llamar coletilla: «salvo en las especialidades que reglamentariamente se determinen».

Yo quisiera, para ilustrar a los señores Senadores, especificar breve y sucintamente en qué consiste esa fórmula que puede parecer

en principio demasiado ambigua. Al decir «salvo en las especialidades que reglamentariamente se determinen» queda claro el sentido unánime de todos de que cualquier profesor perteneciente al estamento docente de Formación Profesional pueda acceder al Cuerpo de Inspectores; sin embargo, no es nombrar específicamente a ninguno de ellos.

La enmienda de la Senadora Pinedo hace alusión a una determinada titulación; pero la expresión «salvo en las especialidades que reglamentariamente se determinen» se aprobó por mayoría en la Comisión. Si esto es así, resulta que no es tan categórica la aceptación de la enmienda de la Senadora Pinedo sino que queda condicionada por estas especialidades que claramente se ve que tienen que estar en relación con el área de prácticas.

La enmienda número 6 del Senador Fábregas al artículo 5.º fue retirada por su propio autor en la Comisión.

Creo que fundamentalmente he tratado de hacer un resumen casi telegráfico y sucinto de lo que sucedió en Ponencia y en Comisión y en estos momentos no me corresponde a mí defender ni una ni otra postura de una manera puntual. Creo que quien deba defender las enmiendas que no fueran aceptadas y que reservó como voto particular lo hará, y lo hará con el brío que le corresponde. Y quien tenga que oponerse tendrá también la argumentación necesaria como para poder discutirlo. La Cámara es soberana para aceptar «a posteriori» el texto de la Comisión que en estos momentos propongo o las enmiendas que vendrán después por quien las defienda como voto particular.

Solicito a la Cámara la votación mayoritaria y que acepte los trabajos de Ponencia y de Comisión que se han propuesto a la Cámara en estos momentos y que se encuentran en el texto impreso. En nombre de la Comisión solicito de SS. SS. el voto unánime, pero como eso sería pedir algo que sé que es inalcanzable, siquiera solicito que el voto sea mayoritario y que la propuesta que hace la Comisión sea la que se apruebe. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Para un turno a favor de la tota-

lidad del dictamen. (Pausa.) Para un turno en contra. (Pausa.) Señores portavoces que deseen intervenir respecto a la totalidad del dictamen. (Pausa.)

Artículos 1.º y 2.º

Pasamos seguidamente al articulado del mismo. Los artículos 1.º y 2.º no han sido objeto de votos particulares. Pregunto a la Cámara si se aprueban por asentimiento. (Pausa.) Quedan aprobados por asentimiento los artículos 1.º y 2.º

Artículo 3.º

Al artículo 3.º existe un voto particular del Grupo Socialista que se corresponde con una enmienda «in voce» que propone una nueva redacción.

En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Beviá Pastor.

El señor BEVIA PASTOR: Señor Presidente, Señorías, la enmienda que el Grupo Socialista presentó en su momento, y que después, a lo largo de todo el proceso de discusión y debate en Ponencia y en Comisión, se modificó «in voce», como ha indicado el Senador Román Ruiz, que ha hecho la defensa del dictamen de la Comisión, tiene, básicamente, dos aspectos.

Es una enmienda al último párrafo del artículo 3.º, en donde en el texto se dice que «dicho Cuerpo —es decir, el Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional— tendrá las especialidades que reglamentariamente se determinen». Y nuestra enmienda tiende a sustituir y, por tanto, a concretar este último párrafo en dos aspectos.

Por una parte, señalar ahí unas áreas concretas de especialidad que están indeterminadas en el texto y que consideramos que, por lo menos, un mínimo de ellas deben ser ya establecidas en la propia ley.

Y, por otra parte, una vez supuesto que es conveniente, que es necesario que ya la propia ley marque, al menos, algunas áreas de especialidad, que se asigne un mínimo de plazas, al menos en aquella área que consideramos básica, que consideramos fundamental, como es el área de prácticas, a la que también ha aludido en este mismo sentido el Senador Román Ruiz.

Cuando nosotros hablábamos —y hablamos— en nuestro voto particular de proponer tres áreas de especialidad (por una parte, el

área humanística o filológica y de ciencias sociales; por otra parte, el área técnico-científica, y, por otra, el área de prácticas) estamos utilizando estos términos en un sentido amplio; es decir, no nos estamos refiriendo —éramos muy conscientes de que no podíamos referirnos— a las actuales áreas que existen en Formación Profesional de primer grado.

En primer lugar, porque no todas las materias que aparecen en el segundo grado de Formación Profesional o las materias que pueden surgir después de un nuevo cambio de plan de estudios están recogidas en esas áreas concretas de primer grado. Nuestra enmienda era, pues, marcar unas áreas en sentido amplio, en donde, por ejemplo, la organización empresarial, en donde la seguridad o higiene en el trabajo y el dibujo o cualquier otra quedaban perfectamente en esta área segunda que llamábamos nosotros técnico-científica. El objetivo no era otro que contribuir a normalizar, a dignificar, a que la Formación Profesional en nuestro país adquiriera la eficacia que está necesitando. Y éramos muy conscientes de que un proyecto de ley por el que se crea un Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional no va a ser la panacea, no va a resolver todas las múltiples y áridas cuestiones que tiene planteada la Formación Profesional, porque éramos y somos conscientes de que la Formación Profesional atraviesa una situación muy crítica y que, a pesar de que se haya producido en los últimos seis o siete años un crecimiento importante en el número de puestos escolares, la realidad es que falta interés por parte del alumnado hacia ella.

Yo puedo indicar, porque conozco más de cerca la situación de la Formación Profesional en la provincia de Alicante, que de 19.000 puestos de Formación Profesional que existen solamente hay 13.000 alumnos; es decir, la demanda no llega siquiera al 70 por ciento de los puestos que se ofrecen.

Pero esa falta de interés por parte del alumnado está encima acusada por una falta de interés, por parte de las empresas, hacia los titulados de Formación Profesional; porque hay además una ausencia de evaluaciones estimativas de las necesidades profesio-

nales de nuestro país; porque hay una elevada tasa de abandono de los estudios; es decir, tal como está planteada la Formación Profesional en España, esa Formación Profesional no sirve. Sirve, si acaso, para valer de máscara, durante un cierto tiempo, al paro juvenil; sirve para reconducir un poco, de alguna manera, los fracasos escolares; sirve para cumplir una función discriminatoria que en gran medida la doble vía de escolarización en nuestro país en los niveles obligatorios está manteniendo.

Yo tengo aquí unos datos de un centro de la provincia de Sevilla por los que se deduce que el nivel de estudios de los padres de los alumnos de este centro, solamente en un 20 por ciento, son padres que han tenido acceso o que tienen estudios superiores o medios, y el 80 por ciento son padres que han tenido sólo estudios primarios o no han tenido absolutamente ningún estudio, que nada menos arroja un índice del 33,11 por ciento, y la procedencia de esos alumnos de Formación Profesional de primer grado, el 94,8 por ciento, es de esa red de escolarización que carece de medios, que ha sido mal tratada, que está siendo mal tratada, que, por desgracia, quizá, si se aprueba el Estatuto de Centros Escolares, va a seguir siendo mal tratada, y que, repito, esos alumnos, en un 94,8 por ciento, procede de la red de escolarización estatal u oficial.

A pesar de que este proyecto de ley, efectivamente, no puede servir para resolver todos los problemas, ni mucho menos, de la Formación Profesional, y que ésta exige que se atiendan esos problemas, sin duda este proyecto de ley, como el Senador Román Ruiz indicaba, puede servir para detectar carencias, para detectar insuficiencias, para hacer una planificación más acorde con la realidad. Puede servir para que las funciones que realice la Inspección no sean exclusivamente esas generales, y, quizá, más burocráticas de velar por el cumplimiento de la normativa legal, o incluso de una planificación, sino que pueda cumplir las funciones específicas de cualquier inspección, que sean las de asesoramiento científico-pedagógico, las de coordinación, las de orientación o de estilo, y, sin embargo, nos encontramos con que no se acepta nuestra propuesta.

A pesar de que se dice que estábamos al principio de acuerdo del todo, y al final, en el fondo, de acuerdo, yo creo que al final no estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo en las palabras, pero no en absoluto en el fondo o en los contenidos.

Nosotros procuramos ir adaptando nuestra enmienda a todo aquel proceso, pero más que discusión fue de diálogo, y poner cada uno, en la Ponencia sobre todo, nuestros conocimientos y opiniones en común, y llegamos a la necesidad de que había que asegurar que un área de prácticas estuviera perfectamente clara, que había que asegurar que estuviera perfectamente clara un área técnico-científica, y que, indistintamente o con independencia de que más adelante pudieran surgir nuevas especialidades, estas áreas eran lo suficientemente amplias para poder, realmente, dar cabida a todas esas nuevas especialidades.

Y como consecuencia de eso propusimos la última parte de nuestra enmienda, que era garantizar que esa área que considerábamos básica o pieza clave en la Formación Profesional, que es el área en este sentido amplio de que hablábamos, de prácticas, tuviera como mínimo el mismo número de plazas que el área técnico-científica. Y tampoco se nos aceptó.

Y después de la enmienda y de la Comisión tratamos de llegar a una solución transaccional, tratamos de mantener el texto del dictamen de la Comisión, por el que se piensa que reglamentariamente pueden establecerse las especialidades que se quieran; pero, al menos, que se concretaran como mínimo estas tres áreas, y eso tampoco se nos ha aceptado.

Señoras y señores Senadores, el Cuerpo de Inspección no va a resolver los problemas de la Formación Profesional; pero el Cuerpo de Inspección puede contribuir en una medida importante a racionalizar, a señalar las necesidades, a orientar, a estimular y a animar a los distintos sectores del profesorado. Sería fundamental que existieran esas áreas de especialidad del Cuerpo de Inspectores y que existieran también unos mínimos, seguros y garantizados ya por la ley, para aquellos aspectos, repito, que parecen más convenientes.

No estamos ante este caso en una cuestión política, estamos ante una cuestión exclusivamente de eficacia técnica. Pensamos que todos los intentos nuevos de aproximación eran intentos de llegar a una mayor eficacia técnica, a algo que en una cierta medida pudiera contribuir a esa dignificación de la Formación Profesional, y, sin embargo, eso no se nos ha aceptado.

No hay, pues, más que acuerdos de palabras, o yo diría que hay una especie de contradicción entre lo que se dice y lo que al final uno está dispuesto a reflejar en el texto de una ley. Sinceramente, al oír reiteradamente estas no diferencias grandes existentes entre uno y otro Grupo, realmente nosotros estamos en situación de perplejidad, porque no sabemos a qué tipo de ejercicios ascéticos se dedica la UCD para estar de acuerdo en el fondo y no aceptar, o no poder llegar a un acuerdo en la redacción formal ya de los textos. Y como no entendemos eso, de verdad a nosotros nos produce una profunda situación de perplejidad.

Pensaba que todavía hoy habría una posibilidad de que en la medida en que este proyecto de ley puede influir, realmente saliera lo mejor posible, y es una sensación de no comprender nada de lo que ocurre, cuando se reitera una y otra vez que estamos básicamente de acuerdo, al ver que este proyecto de ley va a ser de alguna forma un intento fallido, no va a proporcionar aquellos elementos que podría proporcionar para una adecuada reestructuración en este campo, en el campo de la inspección de los cometidos y funciones que tiene la Formación Profesional. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zuzunegui): ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista Andaluz.

La señora CASTRO GARCIA: Señor Presidente, Señorías. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista presentó un voto particular al artículo 3.º, donde se proponía la sustitución del último párrafo, que dice: «Dicho Cuerpo tendrá las especialidades que reglamentariamente se determinen» por este

otro, que diría: «Dichos Cuerpos tendrán tres áreas de especialidad: la humanística o filológica, la técnico-científica y la de prácticas, y como mínimo el área de prácticas tendrá el mismo número de plazas que la técnico-científica», teniendo en cuenta que la incidencia real de cada una de las áreas en la enseñanza de Formación Profesional, y teniendo en cuenta también que para que sea eficaz y productivo el trabajo de los inspectores, éstos tienen que tener un conocimiento directo y profundo sobre las materias que vayan a inspeccionar.

Es claro que un maestro de taller conoce con más profundidad las dificultades reales que presenta cada una de las clases, que cualquier otro profesor cuya especialidad sea más científica o más teórica. No llegamos a entender cómo en la Ponencia el Grupo de UCD admite la enmienda que presentó el Grupo Socialista en el aumento de plazas, teniendo en cuenta que a este texto el sentido del voto lo particulariza el texto propuesto.

No es que nosotros queramos cambiar por sí los inspectores; no es que queramos cambiar, sino que lo que se trata de conseguir es una Inspección que sea instrumento de mejora para la Formación Profesional. No es que sólo funcione en el número, sino en la cualificación. Claro es que si sólo quieren inspectores para que verifiquen burocráticamente el cumplimiento de las normas, en ese caso bastaría con cualquier funcionario; pero, si se quiere una inspección eficaz para la Formación Profesional, que tanto en el campo de la enseñanza pública como en la privada inspeccione la letra y el espíritu de las normas y sirva de acicate al resto de los profesionales de esta enseñanza, entonces entendemos que es necesario ese conocimiento real adquirido por la propia experiencia de las dificultades que le da cada una de las clases que por su especialidad la hacen más distinta. Seguramente a esto los señores de Unión de Centro Democrático nos podrían decir que sería necesario un inspector para cada una de las asignaturas. Esto no sería necesario, sería una complicación innecesaria; pero, tal vez, cuando seamos una sociedad más avanzada, no sería una idea descabellada. En serio, señores, creemos que nuestra pro-

puesta es razonable, que es un cambio de mejoras para la Formación Profesional, que no es oneroso para la Administración y que, por tanto, tendría que ser aprobada. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Tras la intervención de la señora Castro García no hay más petición de palabra que la del señor Valdecantos por el Grupo de UCD. ¿Es así? (*Asentimiento.*) En ese caso, tiene la palabra el Senador señor Valdecantos.

El señor VALDECANTOS GARCIA: Señor Presidente, Señorías, en la línea que me oferta, yo diría que en la línea subyacente de mi compañero de profesión y amigo de preocupación, el Senador Beviá, a estas alturas yo tengo que acusar como sensación personal cómo prevalece en mí un temor, un cierto miedo que viene acompañándome al contacto con los temas que han sido, que son mi profesión y la del Senador Beviá y seguramente mi particular entendimiento por especiales dedicaciones, tanto en la enseñanza como en cuanto a la administración educativa de ámbito provincial.

Tengo miedo, señoras y señores Senadores, a que nos estemos equivocando, a que por no asumir el futuro de manera clara estemos demasiado amarrados a las circunstancias del presente; a que la incertidumbre de la categoría nos esté haciendo cohabitar en demasía con las sucesivas anécdotas que se superponen en nuestra realidad inmediata, cada una de ellas tirando de la manta en esfuerzos protagonistas con evidencia egoísta.

Tengo miedo, Señorías, a que nos estemos engañando unos y otros en un demencial e ininterrumpido proceso electoral y a que no acertemos a dar cumplida respuesta, con dignidad, con humildad, con entereza a la tremenda demanda de las generaciones del mañana.

De acuerdo con que se trata de un proyecto de ley que viene a cubrir unas deficiencias, sin más aspiraciones; pero resulta que se trata de una pieza más de lo que debiera ser en conjunto un proyecto educativo y en todo o en cualquier proyecto viene a ser difícil separar el todo de las partes, los aspectos del

conjunto, y andamos por las partes y no por el conjunto, de donde pueden deducirse consecuencias imprevistas el día en que tengamos —y es algo que no admite esperas— todo el armazón aducativo, incluso en la propia mecánica legislativa de nuestra responsabilidad, en la que nos podemos ver forzados a un juego no deseable de tejer y destejer nuestra propia tarea.

Como ya se ha dicho y se evidenció en el trabajo, tanto de la Ponencia como de la Comisión, surgieron tres escollos o divergencias: el de las especialidades, el del acceso y titulación precisa para el mismo y el de la forma de dicho acceso. En realidad, los tres están entramados entre sí y la contestación y el aplauso afecta por igual a cada tratamiento.

Tengo que confesarles que en estos días, desde mi rincón gaditano, he podido comprobar, he vivido con intensidad, con comprensión y con cierto dolor cómo afloran con armas de razonamientos, de amenazas y de insultos, a la menor alarma, el mundo de los derechos, el corporativismo de los Cuerpos; licenciados contra titulados medios, éstos contra los maestros de taller, unos contra otros, todos contra todos en este crónica espectáculo de la vida española.

Creo en la firmeza de los instrumentos cuando se tienen claros los destinos y los objetivos. Da igual definir o no definir las áreas o especialidades, aclarar o no aclarar las titulaciones, precisar o no precisar la forma de acceso. Lo realmente importante es saber qué Formación Profesional queremos, en respuesta clara a lo que necesita la sociedad. Estar convencidos de que este nivel —aunque algunos le nieguen tal carácter desde los enunciados de la Ley General de Educación— es un bloque imprescindible en el mecanismo educativo, en el mecanismo profesional, dignificador de la actividad individual y de la convivencia social.

De esta parcialidad, unos nos desenvolvemos en el interés de darle, en correlación, la máxima categoría al Cuerpo especial que se pretende crear. Otros, en el afán de apurar los elementos prácticos y manuales con garantías igualatorias. Pero, en realidad, tenemos que reconocer que ninguno sabemos expresamente qué proyectos hay para la For-

mación Profesional, su inclusión y papel que representa en la reestructuración de las enseñanzas medias. En definitiva se trata de la imperiosa necesidad de regenerarla, recrearla como respuesta positiva a una demanda real de una sociedad en cambio, que, no obstante y en parte, vuelve sus ojos hacia atrás en la defensa de inmovilismos corporativos y garantías individuales, todos legítimos y todos atendibles, pero accesorios y de otra vía en unos planteamientos nuevos e imprescindibles.

Toda persona y toda profesión nos merecen el mayor respeto, la mejor defensa de sus intereses, pero, Señorías, aquí, aunque no lo parzca ni se pretenda, está en juego el mañana, y las generaciones o promociones en curso o declive tenemos que ceder ante el imperativo de las que emergen. No se trata, aunque se trate, de quién tiene derecho a desempeñar la inspección, sino de qué tipo de inspección queremos, para qué y en qué sistema educativo se entronca la Enseñanza Profesional, la Formación Profesional, siempre, de una forma u otra, sobre el protagonismo de las superestructuras.

Hemos puesto el protagonismo de las superestructuras como losas el protagonismo de las realidades; y en este caso, y en otros muchos, la realidad es la formación de los niños y los jóvenes, por un proceso educativo justo y equilibrado.

Si los Maestros de Taller están, como están, injustamente discriminados por un sistema retributivo inadecuado, tendremos ocasión, incluso por la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista en el Congreso o por cualquier otro medio, de remediar esa injusticia. Si los Ingenieros Técnicos han aportado su experiencia y práctica a los Centros de Formación Profesional, con saldo positivo, agradezcámoslo suficientemente, y no despreciemos su aportación en los nuevos derroteros de estas enseñanzas. Si los Licenciados sufren el paro, tratemos de resolverlo, pero no parece justo ni positivo aprovechar cualquier resquicio para afirmar aspiraciones, quejas o soluciones en principio ajenas a los objetivos que se persiguen, o que deben ser perseguidos.

Nuestro Grupo, más allá de la estética, intentando hacer abstracción de la perplejidad,

se opone a la enmienda socialista al artículo 3.º de este proyecto, que brillantemente han defendido el Senador señor Beviá y la Senadora señora Castro. Y se opone por tres razones fundamentales.

La primera, en orden a la indefinición del futuro de la Formación Profesional. Se ha alegado que, en cualquier caso, habrá tres tipos o áreas de especialidades; y nosotros creemos que puede haber tres, más o menos, según veamos los cometidos o misiones de la función inspectora, que, en ningún caso —coincido con los presentadores de la enmienda—, debe ser exclusivamente un tipo de policía o apoyo de la Administración educativa, o una extensión de habilidades, sino una tarea científica, evaluadora, animadora de técnicas pedagógicas y de procedimientos educativos.

La segunda razón, porque la precisión de las áreas y la asignación de los inspectores a ellas significaría un elemento más de diversificación de las realidades inspectoras en relación con los otros niveles. La inspección de Básica está, en realidad, totalmente globalizada; la de Bachillerato, teóricamente especializada por materias. No añadamos, al menos nosotros, más confusión sobre la confusión existente.

En tercer lugar, porque al Gobierno le corresponde a facultad reglamentaria y, en este caso, por el carácter parcial del proyecto, no teníamos motivo para adentrarnos suficientemente en el asunto de tal manera que pudiéramos prefigurar a la Administración, al Gobierno, unas pautas legislativas precisas y que, indudablemente, vienen a ser necesarias.

Por último, el defender la casuística del número de plazas por áreas —aunque, negado lo anterior, queda esto decaído y sin sentido—, sería como recontar la cosecha antes de sembrarla, añadiendo también nuevos motivos de incertidumbre.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Vamos a proceder a la votación del voto particular, del Grupo Socialista, al artículo 3.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 60; en contra, 79.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista al artículo 3.º

Pasamos, por tanto, a la votación del texto del dictamen en lo que respecta al artículo 3.º

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 79; abstenciones, 60.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Queda aprobado el artículo 3.º

Artículo 4.º

Pasamos al artículo 4.º al que está interpuesto un voto particular del Grupo Socialista, que se corresponde con una enmienda «in voce» del mismo Grupo Socialista y que será defendido por el señor Beviá en nombre de su Grupo.

El señor BEVIA PASTOR: En la enmienda anterior, que no ha sido aceptada, como ya presumíamos, podíamos pensar que, efectivamente, en principio, desde una enorme ingenuidad, eran válidos todos los planteamientos, desde una enorme ingenuidad, puede pensarse que eso es acumular confusión sobre confusión. En esta enmienda las cosas son muy distintas, aquí hay dos aspectos que plantea nuestra enmienda. Efectivamente, inclinar el voto en un sentido o en otro, no es levantar confusionismo sobre confusionismo, sino marcar claramente la postura con respecto a todos esos proyectos de largo alcance, con los que nosotros estamos de acuerdo. El futuro, señor Valdecantos, hay que tenerlo siempre en cuenta, pero hay que partir de la realidad; de esta realidad que tiene muchas veces aristas cortantes y muchas asperezas.

Vamos a ser claros y ver qué posición adoptamos respecto a las dos cuestiones fundamentales que encierra la enmienda que presentamos al número 1 del artículo 4.º y al número 2, nuevo, que fue incluido en el informe de la Ponencia aquí en el Senado.

Concretamente en el número 1 lo que nosotros solicitamos es que desaparezca, como procedimiento para el ingreso en el Cuerpo de Inspectores, el concurso de méritos. Pensamos que está suficientemente garantizado el derecho adquirido de cualquier profesional. Está suficientemente garantizado el mé-

rito especial que pueda significar tener determinada titulación mediante el otro procedimiento, el único que nosotros proponemos, que es el concurso-oposición.

Hay que tener en cuenta cuál ha sido el proceso en el debate en el Congreso; la pequeña historia de la aparición del concurso de méritos en este texto. Cuando se había hecho el dictamen de la Ponencia, al finalizar la votación del texto en la Comisión del Congreso, apareció una enmienda «in voce» solicitando que se incluyera también, como una segunda vía de acceso (no sé qué manías nos ha dado con las vías, no hemos salido suficientemente escarmentados con las vías de la autonomía que también aquí marcamos unas dobles vías), el concurso de méritos. Y eso significa una novedad; una radical novedad en el sistema de ingreso en los Cuerpos de Inspección de la Administración Civil del Estado.

Tengo aquí delante unos datos que afectan a quince cuerpos de Inspección de distintos Departamentos de la Administración Civil del Estado. Unos dependientes del Ministerio de Hacienda, otros de los Ministerios de Obras Públicas, Trabajo, Comercio, Educación. Pues bien, de esos quince Cuerpos diferentes, el acceso a nueve de ellos está marcado exclusivamente por el sistema de oposición, y seis por el de concurso-oposición.

Efectivamente se argüirá y tenemos que reconocer que hay un precedente. Después de publicarse, en el verano del año pasado, la convocatoria para el acceso al Cuerpo de Inspectores Técnicos de Enseñanza Media, en el mes de noviembre, aparece un Real Decreto, el 2.543/1979, por el que, para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Enseñanza Media, por primera vez, al lado de la vía ordinaria del concurso-oposición, se establece una segunda vía que es la de concurso de méritos. Mucho se habló en el Congreso. Podíamos repetir hoy aquí cuáles pudieron ser los motivos, las presiones (esas presiones de las que se alarmaba el señor Valdecantos), porque andamos sobre este suelo, no por un mundo de nubes y, efectivamente, tenemos que hacer frente a unas y otras presiones. En muchos casos a unas y otras presiones que están como sobrecargadas de razón, llenas de harturas de discriminación, de harturas de

ver que esas discriminaciones se multiplican. Por ello, es muy normal que nosotros recibamos determinadas presiones, y no podemos andar por ahí rasgándonos las vertiduras, porque se trata de gente que está cansada, y cuando está cansada, o bien queda en la apatía más tremenda, y por tanto presta un flaco servicio a la tarea que está realizando; o bien llega a un momento de crispación.

Pues bien, se habló de un posible acuerdo del anterior encargado del Departamento de Educación con la Asociación de Catedráticos. No sé si es así o no; lo que sé es que los coordinadores de Formación Profesional —una especie de preinspectores—, que se establecieron en 1972, y que al comienzo de curso no llegaron a la cifra de 60, en los últimos meses han crecido a un ritmo inusitadamente acelerado. A uno, que tiene su gran dosis de ingenuidad, también le queda dentro una respetable dosis de suspicacia. Piensa que se están consiguiendo o tratando de adquirir lealtades a una organización determinada de un departamento, y esto también son previsiones, por lo que otros profesores, que están viviendo día a día de la clase de prácticas, de tecnología, de Letras o de lo que sea, que están viviendo día a día desesperadamente la triste realidad de la Formación Profesional, es normal que estos señores se revelen. Yo no sé cuáles son los motivos, pero sí comprendo que haya un mínimo de suspicacia.

Además, había que señalar otra cosa; el Real Decreto citado, que establece esas dos vías para el acceso a la Inspección de Enseñanza Media, fija o exige requisitos distintos: para el concurso-oposición pide exclusivamente tres años de servicios; para el concurso de méritos pide cinco años, y establece en el artículo 4.º, número 1, unos criterios concretos. Pero en este proyecto de ley no hay exigencias distintas ni se marcan cuáles van a ser los criterios específicos por los que se va a regular ese concurso y méritos y podemos sospechar, muchos profesores sospechan, que se trata de consagrar unos privilegios. Por supuesto; que en el Cuerpo actual o en el colectivo de coordinadores habrá personas de una tremenda eficacia; pero también hay motivos para sospechar que pue-

de haber quien, a través de esa vía, consiga una situación de privilegio.

Se nos ha argumentado que podía ser más contundente, que podría ser definitivo, el hecho de que la Ley General de Educación en el artículo 143, número 1, dice que al Cuerpo —allí habla del Servicio Técnico de Inspección de Educación— se accederá mediante concurso. Y se nos manifestaba que allí dice concurso, no dice concurso-oposición, efectivamente, pero tampoco dice concurso de méritos.

Yo recomiendo a Sus Señorías que hagan como yo, tomarse la molestia de coger el Diccionario de la Real Academia, y, por lo menos, en la edición 19.ª, del año 1970, que yo he podido ojear dice: concurso: oposición que por medio de ejercicios científicos, artísticos o literarios o alegando mérito, se hace a prebendas, cátedras o premios.

Así pues, el artículo 143 deja las puertas abiertas a que exista, únicamente, una oposición sin más; deja las puertas abiertas a que exista un concurso-oposición, y deja, por supuesto, las puertas abiertas a que exista un concurso de méritos.

Yo no sé, en último término —y perdonen que rice el rizo de la suspicacia—, si realmente lo que se está buscando en determinados sectores es pensar que se dispone una plataforma un poco más amplia ahora, porque ya no son, compañera Virtudes, solamente 135 puestos a ofertar; ya hay 180 puestos que ofertar como prebendas, y el diccionario dice que prebenda viene a ser un sinónimo de canongía; concretamente, en su aceptación cuarta dice: oficio, empleo o ministerio lucrativo y poco trabajoso. (Risas.)

El otro aspecto que yo quería señalar es el de los requisitos para el acceso, es la introducción de ese apartado 2. (Se enciende la luz que determina la duración de las interpelaciones.) Me sabe mal que la luz se encienda; parece que algunas veces va más despacio.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): No se preocupe; la Presidencia lo tendrá en contra.

El señor BEVIA PASTOR: El número 2 que señala los requisitos para el acceso es radi-

calmente restrictivo y contradice, de alguna manera, lo que se indica en el número 1. Dicho apartado mantiene el texto del Congreso. Allí se dice que cualquier profesor perteneciente a uno de los Cuerpos docentes de las escuelas de Maestría Industrial puede tener acceso, si cumple esos tres años, al Cuerpo de inspectores. Y ahora viene el tío Paco con la rebaja; porque en el número 2 añadimos que se exigirá, como norma, el título de licenciado universitario, el título de Arquitecto o de Ingeniero. Es decir, bajo otra forma, el título de universitario superior.

Pues muy bien. Y estas cosas ¿en qué se apoyan? ¿En qué se basan? Resulta que el portavoz de Unión de Centro Democrático en el Congreso, señor Arnau —yo he recogido aquí palabras literales de su intervención como explicación del voto al final del debate—, dice que debemos sentirnos satisfechos porque su contenido, el de la ley, afecta a todo el profesorado, colocando en su justo lugar a los Maestros de Taller, pieza clave de esta enseñanza, y los Maestros de Taller, que representan una cifra de 4.265 personas sobre un colectivo de 11.354, solamente tienen como una pequeña puertecita de esperanza en esa excepción que se salva y no tienen seguridad de si les va a afectar a ellos o no.

Pero no es solamente el colectivo de cuatro mil y pico Maestros de Taller, son también todos los profesores de cualquier otra disciplina de cualquier otra materia a quienes se les exigió, como requisito para el acceso como numerarios de esos cuerpos docentes, estar en posesión de otros títulos, por ejemplo, el título universitario de grado medio y que también van a quedarse ahí, en esa especie de contemplación. Debemos ver el gran marco y no el sendero para comprobar si les va a tocar una pequeña parcela, un ladrillo de esa puertecita que se puede abrir si los reglamentos se dignan a ello.

Se nos dijo también y se adujo la legalidad. Se nos dijo y se nos recordó que la Ley General de Educación, en el artículo 143, exige el título de licenciado universitario, de Arquitecto o Ingeniero. Y es verdad. Literalmente dice esto: «El servicio de Inspección Técnica de Educación estará constituido por especialistas de los distintos niveles de ense-

ñanzas establecidos en el artículo 12». Antes ha hablado del título. Se exige el título previamente, y después aclara que será constituido por especialistas de los distintos niveles de enseñanza establecidos en el artículo 12. Y ¿qué niveles establece el artículo 12? He dado un paseo a través de la Ley General de Educación, ya tan vieja, quizá más denostada por los Senadores de Unión de Centro Democrático que por los Socialistas, pero que continuamente la estamos utilizando y como maza acudimos a ella para en dos o tres golpes de Ley General de Educación rebatir cualquier otro argumento, y el artículo 12 dice: «El sistema educativo se desarrollará a través de los niveles de Educación Pre-escolar, EGB, Bachillerato y educación universitaria»; añadiendo: «y de la Formación Profesional y de la educación permanente de adultos».

Al leer esto me quedó una duda: ¿Están o no dentro de los niveles de Formación Profesional la educación permanente de adultos? Porque si están, esta ley, al menos desde un punto de vista legalista, sí que exige un título universitario para ser inspector de esos niveles. Pero mi asombro fue grande cuando cogí nada más que el índice de la Ley General de Educación y dice: Capítulo II, Niveles educativos, Sección 1.ª, Educación pre-escolar, artículos tal a tal. Sección 2.ª, Educación General Básica, artículos de tal a cual. Sección 3.ª, Bachillerato, artículos tal a tal. Sección 4.ª, Educación Universitaria. Y aquí se ha acabado el Capítulo. Dice después: Capítulo II, Formación Profesional. Capítulo IV, Educación permanente de adultos. Resulta que, según la denostada Ley General de Educación, como la Formación Profesional no es uno de los niveles establecidos por esa misma Ley General de Educación, no es aplicable a ella la exigencia del título universitario superior.

Pero es que si no se aceptara eso y se dijera que es nivel en sentido amplio, entonces muy bien, apliquemos estrictamente el artículo 143, que dice que existirá un Servicio de inspección técnica de Educación, un Servicio, y no estemos ahora multiplicando los cuerpos. Antes teníamos un Cuerpo de Inspectores de Educación General Básica y otro de Enseñanza Media; ahora creamos un cuer-

pecito de talla gentil, porque tiene poco número, de Inspectores de Formación Profesional. Dejemos eso a un lado, dejemos de mirar esta cuestión con una óptica que más que legal es una óptica un poco leguleya. Dejemos de mirarla en ese sentido y entremos de lleno en el tema.

El tema es quién va a cumplir, y se preguntaba el señor Valdecantos ¿qué inspección es la que queremos? Nosotros tenemos la idea muy clara. Queremos una inspección viva, que esté en contacto con la realidad diaria de la clase, que se nutra de profesores que han vivido esa realidad, que sepan cuáles son las dificultades, cuál es la realidad auténtica, dura, áspera, desgarrada muchas veces, de esa Formación Profesional, y a partir de ella, con unos requisitos que les pedimos a través de un concurso-oposición. Estos señores serán los que podrán tratar el tema desde su área y en la medida de sus fuerzas —y en eso estamos de acuerdo que no es todo—, esos señores deberán aportar un análisis real a esa Formación Profesional para tratar de resolverla.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Perdón, señor Beviá, se termina su tiempo.

El señor BEVIA PASTOR: Termino en seguida, señor Presidente.

Quería finalizar recordando unas palabras que el Vicepresidente del Gobierno, señor Abril Martorell, dijo en el debate del Congreso: Dijo que la Formación Profesional en nuestro país está mal, probablemente mucho peor de lo que se dice, y añadió que 1980 es un año importante para la Formación Profesional; creemos que en el plazo de dos o tres meses deben darse pasos importantes y decisivos, en relación con esta necesidad. Señoras y señores Senadores, si nosotros aprobamos el artículo tal y como ha sido dictaminado por la Comisión en el Senado, si seguimos manteniendo el concurso de méritos, si seguimos discriminando a ese sector tan importante y que conoce tan real y vivamente la Formación Profesional, creo que estamos dando traspiés, pero no ningún paso importante, para esa consolidación y dignificación de la Formación Profesional.

Parecía que el señor Abril Martorell venía a decir algo así como que el año 1980 era el año de la Formación Profesional, y la verdad es que con estas posiciones, no sé, pero creo que no sería el año de la Formación Profesional, sino algo así como creer que el año de la Formación Profesional es igual al día de los enamorados. Y la cosa no está para eso, señores. Desgraciadamente, la Formación Profesional no está para andarse con romances. Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Turnos a favor? (*Pausa.*) ¿Turnos en contra? (*Pausa.*) ¿Señores portavoces que desean intervenir? (*Pausa.*)

El señor Estrella, por el Grupo Socialista Andaluz, tiene la palabra.

El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en esta Cámara y, en general, entre los parlamentarios, a veces caemos en un vicio y es el de avanzar posturas chauvinistas aquí en el Parlamento, de defensa a ultranza de nuestra tierra, y esto es lógico, puesto que estamos aquí representando a unos circunscripciones; en otras ocasiones se cae en posturas corporativistas, y podemos ver cómo, por ejemplo, los Corredores de Comercio, o los Farmacéuticos, tratan de traer aquí los problemas del sector profesional a que pertenecen —y quede claro que estoy poniendo ejemplos en general—; en otras ocasiones —esto es más triste—, caemos en traer aquí, al Parlamento, nuestros problemas personales, y esto es, quizá lo que ha ocurrido en este caso, donde a un Parlamentario del Grupo de UCD, al señor Arnáu, que, al mismo tiempo, era y es Coordinador de Formación Profesional —esa figura que ha descrito el señor Beviá—, se le ocurrió que también debían estar defendidos sus propios derechos personales en esta ley y para ello introdujo una enmienda que creaba una nueva figura, el concurso de méritos, que, lógicamente, a personas que como él han estado un largo período desarrollando esa función inspectora, les podía permitir acceder, a través de esa vía de los méritos, con absoluta facilidad, a las

funciones inspectoras en el cuerpo que se crea por medio de este proyecto de ley. Esto me parece lamentable y, como ha dicho el Senador señor Beviá, supone un caso absolutamente inusitado, inédito, que solamente tiene un antecedente, de oscura justificación, en el Cuerpo de Inspectores de Enseñanza Media, y que tuvo su origen, al parecer, en un pacto que puso fin a la huelga de Catedráticos de Enseñanza Media el año pasado. Esto, repito, resulta bastante triste.

Si por parte del portavoz de UCD se nos justificase el motivo para introducir aquí esta figura del concurso de méritos, si se nos justificase por qué ahora aquí, en el Senado, se ha excluido a ese sector, que lleva sobre sí un peso importante de la Formación Profesional, quizá lo trascendental, puesto que es la formación técnica de taller, si se nos justificase por qué estos cambios, por qué se introduce esa figura completamente inusitada en los Cuerpos de Inspección del Estado y por qué se excluye de esa posibilidad de acceso a la función inspectora a los Maestros de taller, si se nos diesen argumentos, probablemente podríamos cambiar nuestro criterio. Dado que considero que no existen argumentos, espero que sea el Grupo de UCD el que cambie su propio criterio respecto a esta doble enmienda que ha presentado el Grupo Socialista.

Por otra parte, quisiera decir algo más, y es que el tema de la Formación Profesional—como ya se ha dicho aquí— desborda, por supuesto, ampliamente el contenido de la presente ley, que solamente afecta a una parte muy limitada de la misma; pero que, sin embargo, el Gobierno tiene la responsabilidad de afrontar ese problema, el problema de la Formación Profesional. Aquí se han dado datos sobre la situación en que se encuentra y sobre cuál es el criterio del propio Vicepresidente económico actual con relación al tema de la Formación Profesional. Habría que añadir más; habría que decir que existe una absoluta desconexión, que se ha ido agravando progresivamente, entre el papel que tiene la Formación Profesional, como vaciadero del exceso de población en edad escolar, y el papel que realmente debiera tener en su relación con el proceso productivo, en su relación con las necesidades del mercado de

mano de obra en su relación con el desarrollo económico del país.

Actualmente, las Escuelas de Formación Profesional solamente cumplen, en gran medida, una función, que es la de crear frustraciones en capas muy amplias de la generación que llega a esa edad y que se ve abocada a la Formación Profesional, porque se le ofrece un futuro más o menos esperanzador, y luego se encuentra, en muchos casos, con que ni siquiera llega a terminar esta enseñanza.

En el caso de Andalucía, donde existe un número relativamente importante de Centros de Formación Profesional, pero no la correspondencia de un desarrollo industrial suficiente para absorber esa mano de obra que, en teoría, se está formando técnicamente, el nivel, el grado y la extensión de esa frustración resultan mucho mayores.

Yo no sé si coincidir con el señor Beviá en la posible mala intención que pueda haber detrás de esa fácil aceptación por parte del Gobierno, del Grupo de UCD en este caso, de la elevación progresiva del número de plazas con que va a contar este Cuerpo, desde las 90 iniciales a las 135 que se aprobaron finalmente en el Congreso de los Diputados y las 180 que vamos a aprobar aquí hoy. No sé si pensar que eso es una manera de disponer de más prebendas a repartir, o si pensar, por el contrario, que se trata de un reflejo de la improvisación, de la falta de planificación del Ministerio de Educación y Ciencia, que lleva al Parlamento un proyecto de ley en el que hace unas previsiones, que se ven más que duplicadas en el plazo escaso de dos meses.

En definitiva, quisiera pedirles que no acepten el que se traigan aquí, al Parlamento, los problemas personales; que no traigamos al Parlamento nuestros problemas personales y, sobre todo, que no se hagan la Cámara ni sus Grupos Parlamentarios eco de esos problemas personales.

El señor BEVIA PASTOR: Señor Presidente, pido la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Para qué solicita el señor Beviá la palabra?

El señor BEVIA PASTOR: Para una cuestión de orden, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): La tiene Su Señoría.

El señor BEVIA PASTOR: En nuestra enmienda había dos partes. La primera consistía en la supresión del concurso de méritos. La segunda se entendía como un texto alternativo con relación al número 2, que ha sido introducido en el informe de la Ponencia.

Ahora bien, como esta segunda parte estaba en íntima relación con la enmienda anterior, que no ha podido pasar el trámite de aprobación, tal como está, lógicamente, no tiene sentido, y pienso que, como si se tratara de un texto alternativo, hay que entender esta segunda parte a partir de la séptima línea, empezando por el final, donde dice «a cada una de las áreas» (ya que esto es indefendible de no prosperar la enmienda anterior), simplemente, repito, hay que entenderla como supresión del número 2. Entiendo que es lógico que, al no prosperar la enmienda anterior, nuestra enmienda quedaría reflejada en estos momentos bajo dos aspectos: primero, el que afecta al número 1 y que se refiere a la eliminación del concurso de méritos, y el segundo aspecto (dado que esto sería absurdo que prosperase, no puede prosperar) y como alternativa, repito, del número 2, se entiende actualmente como eliminación de ese número 2.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): Señor Beviá, antes de preguntar a los portavoces de los Grupos Parlamentarios su opinión al respecto, ¿sería sustituir el número 1 por «la selección para el ingreso en el Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional, etcétera» hasta donde termina «o aquellos en que éstos puedan integrarse»?

El señor BEVIA PASTOR: Exactamente, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): Señores portavoces, su criterio, por favor.

El señor VILLODRES GARCIA: Señor Presidente, hace unos momentos el Grupo Parlamentario Socialista nos ha ilustrado sobre que no era posible modificar un voto particular, cuando se solicitó el cambio de «hospitales» por «centros». Considero que manteniendo su propio criterio no procede ningún tipo de modificación. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): En ese caso... (*El señor Beviá pide la palabra.*) Puede hablar Su Señoría.

El señor BEVIA PASTOR: Es para una cuestión de orden nada más. Quería decir que, en este caso, nosotros retiraríamos de la enmienda a partir de «a cada una de las áreas», y dejáramos exclusivamente nuestra enmienda referida a la primera parte, solamente a la supresión del concurso de méritos.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): Si están de acuerdo los señores portavoces del Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático y del Grupo Parlamentario Mixto, esta Presidencia lo aceptaría, pero si cualquiera de los dos no lo acepta, sintiéndolo mucho esta Presidencia no puede admitirlo.

El señor VILLODRES GARCIA: Señor Presidente, yo creo que lo hemos expresado con toda claridad. Hace unos momentos el Grupo Parlamentario Socialista nos ha ilustrado sobre que no es posible modificar un voto particular.

El señor LABORDA MARTIN: Pero no es lo mismo, porque en la cuestión que el señor Villodres ha suscitado, era un texto diferente, mientras que creo que es facultad de un Grupo retirar parte de su enmienda y dejar viva la parte que le interesa. Por tanto, nadie puede negarnos el que retiremos la parte que ha indicado el señor Beviá.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): Esta Presidencia entiende que el Grupo Parlamentario Socialista puede retirar la enmienda completa. De lo contrario, si no están de acuerdo los portavoces de los otros

Grupos, se tienen que entender los dos párrafos completos, es decir, la sustitución, porque es un solo voto particular. Así figura en el «Boletín Oficial de las Cortes»... (El señor Bevia pide la palabra.) Señor Bevia, un momento, que luego le daré la palabra. Decía que figura como un voto particular donde postula la sustitución de los números 1 y 2.

Tiene la palabra el señor Beviá.

El señor BEVIA PASTOR: Señor Presidente, creo que este es un caso absolutamente distinto. Es decir, la enmienda la ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista y pienso que es él mismo quien puede retirarla íntegramente o una parte de ella.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Vamos a terminar con esta discusión. Esta Presidencia entiende que, por supuesto, el Grupo Parlamentario Socialista puede retirar la totalidad de la enmienda. Lo que no puede hacer es retirar una parte de la enmienda, porque podría tener un sentido diferente dejar solamente una primera parte y no la segunda, salvo que los portavoces de los otros Grupos Parlamentarios estuvieran de acuerdo en ello. Como se han manifestado los portavoces en sentido de que no están de acuerdo, lo siente mucho esta Presidencia, pero vamos a pasar a dar la palabra al Senador señor Román Ceba, como portavoz del Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático.

El señor ROMAN CEBAS: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en nombre y como portavoz del Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático, voy a ir contestando una a una a las intervenciones que ha hecho nuestro compañero el Senador Beviá y nuestro compañero el Senador Estrella.

En primer lugar quiero leer a ustedes, con relación a la doble vía concurso de méritos y concurso-oposición, el artículo 143, 1 de la Ley General de Educación, pero completo. Dice lo siguiente: «El servicio de Inspección Técnica de Educación estará constituido por especialistas de los distintos niveles de enseñanza, establecidos en el artículo 12. Los inspectores de las distintas especialidades se-

rán seleccionados mediante concurso». (Donde abre la doble vía concurso de méritos, concurso-oposición.) «Entre los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos docentes del Departamento, según el nivel de especialidad correspondiente. Habrán de tener como mínimo tres años de práctica docente» (hago una pausa, porque ya es una cautela), «en centros del nivel a que concursan; poseer el título de Licenciado universitario, Ingeniero o Arquitecto, y haber seguido los cursos especiales de los Institutos de Ciencias de la Educación».

Es decir, estamos a favor de la doble vía por tres razones. En primer lugar, porque una ley de hace casi diez años ya abre la puerta del concurso. Y nosotros nos hemos metido todos mucho con la Ley General de Educación, que hemos dicho que era una ley franquista, y la Ley General de Educación, en su artículo 143, 1, es más progresiva que lo que se está defendiendo en esta Cámara aquí, esta noche, porque abre la posibilidad del concurso. Ahora hablaremos de por qué defendemos lo del concurso de méritos.

En segundo lugar se nos ha dicho el término «novedoso», «novedad», y se nos ha citado un Decreto, el Real Decreto 2.543/79, de 28 de septiembre, «Boletín Oficial» del 7 de noviembre de 1979. Se refiere a la Inspección de Enseñanza Media del Estado. Pues bien, en su preámbulo dice: «La conveniencia de potenciar un clima de estímulo en la carrera docente, aconseja arbitrar un procedimiento paralelo al del concurso-oposición, de modo que sea posible el acceso directo al Cuerpo por vía de concurso de méritos». Pero luego, en su artículo 4.º, habla de que tienen que estar en servicio activo. A continuación incluso da normas o criterios, es decir, cómo se va a resolver ese concurso. Ese concurso se resuelve viendo los antecedentes académicos y méritos de carácter científico, los servicios prestados en los centros, incluidas las funciones directrices.

Por otra parte, fija las condiciones personales y profesionales demostradas por cada candidato en el ejercicio de sus funciones, con especial referencia a las aptitudes necesarias para el mejor desempeño de la función inspectora. Pero es que luego establece una Comisión calificadora, y además obliga a que

se haga un baremo mediante Orden Ministerial, que, por lo menos, dure tres años, para saber a qué atenerse. Y, por último, establece un año de provisionalidad.

Aquí se ha aludido a términos como «mala intención», a como «cautela». ¿Dónde está esa mala intención si ya establece tres años? Se ha empleado el término «coordinadores de Formación Profesional». Saben ustedes que han pasado de sesenta a menos de noventa, y muchos de ellos no llevan más de un año de coordinadores de Formación Profesional.

Por otra parte, nosotros creemos que el concurso de méritos no es una vía restringida a los actuales coordinadores, sino que contempla todo el colectivo docente con méritos para tal opción. Es decir, no se excluye a nadie. Creemos que no podemos retroceder a diez años, con lo que ya la propia Ley General de Educación establecía.

Con relación al Senador Estrella, quisiera decirle que no ha leído el proyecto, y no ha leído las enmiendas, porque nosotros no hemos introducido en el Senado lo del concurso de méritos, sino que ya venía en el texto del Congreso. Es más, no se ha dado cuenta de que no hemos sido nosotros los que hemos metido elevar el número a 180, sino que es una enmienda del Grupo Socialista del Senado.

Quiero terminar diciéndole a mi compañero el Senador Beviá, que, si hoy fuese San Valentín, y quizá lo fuese, que no se preocupe tanto, que hemos encontrado en nuestro Grupo, muy preocupados con la Formación Profesional, una solución al segundo aspecto, que no comento porque ha sido suficientemente debatido. Muchas gracias.

El señor ESTRELLA PEDROLA: Pido la palabra para alusiones.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Tiene la palabra el señor Estrella para alusiones, aunque no ha habido alusiones en sentido estricto; han sido alusiones a la argumentación.

El señor ESTRELLA PEDROLA: Muy brevemente. Me parece que el señor Román no ha estado escuchando mientras yo hablaba,

porque he dicho que fue el señor Arnáu el que introdujo en el Congreso de los Diputados la modalidad del concurso de méritos. Por otra parte, no he dicho que haya sido el Grupo de UCD el que ha propuesto el aumento. Tengo muy claro que no fue él quien propuso elevar el número a 135 en el Congreso y a 180 en el Senado. Hemos sido nosotros.

He hablado de la posible improvisación de un Ministro...

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Perdón, eso ya no son alusiones personales.

Vamos a proceder a la votación de la enmienda.

El señor BEVIA PASTOR: Pido la palabra para una cuestión de orden.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Tiene la palabra el señor Beviá.

El señor BEVIA PASTOR: Es sobre la votación de la enmienda. El Grupo Socialista desea pedir a la Presidencia que nuestra enmienda se vote por separado. Una primera votación hasta donde ha leído antes el señor Presidente, «pueden integrarse», y una segunda votación desde ahí al final. Pienso que sobre partir un texto para votar hay precedentes más que suficientes en esta Cámara.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Entiende esta Presidencia —ya lo he dicho antes— que son párrafos de una misma enmienda. Por tanto, vamos a votar la enmienda en su conjunto. No son apartados del texto del dictamen, que ahí es donde normalmente solemos votar separadamente.

El señor BEVIA PASTOR: Perdón, señor Presidente...

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Lo siento, señor Beviá, pero vamos a votar en conjunto la enmienda.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 64; en contra, 76.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): Queda rechazado el voto particular al artículo 4.º

Pasamos, seguidamente, a votar el texto del artículo 4.º Pregunto al señor Beviá o al portavoz del Grupo Socialista, si quiere que se vote separadamente cada uno de los apartados.

El señor BEVIA PASTOR: Nuestro Grupo piensa que debe aplicarse la misma norma.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): De acuerdo. Entonces, procedemos a votar en su totalidad el texto del dictamen del artículo 4.º

El señor VILLODRES GARCIA: Pido la palabra para una cuestión de orden. (*Rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): Tiene la palabra el señor Villodres.

El señor VILLODRES GARCIA: Para solicitar que el texto del dictamen se vote por apartados. (*Rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): Efectivamente, los antecedentes en esta Cámara son que cuando un portavoz pide que se voten los apartados separadamente, así se haga. Ahora, yo también pediría al portavoz del Grupo de Unión de Centro Democrático que desistiera y votáramos el artículo en su conjunto.

El señor VILLODRES GARCIA: No, señor Presidente. (*Rumores.*), reiteradamente solicitamos la votación separada por apartados para este artículo.

El señor LABORDA MARTIN: Pido la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): ¿Para una cuestión de orden?

El señor LABORDA MARTIN: No, señor Presidente, simplemente para decir que se está actuando con cierta parcialidad desde la Presidencia, y lo digo con todo respeto; el

señor Presidente tiene facultad para interpretar el Reglamento e imponerlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): Con todo respeto contesto al señor Laborda que esta Presidencia no actúa con parcialidad, y que en algunos momentos, concretamente antes, ha consultado a otros miembros de la Mesa para tomar su decisión.

Por tanto, vamos a votar por apartados. Primero, el número 1; después, el 2, y, por último, el 3.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 73; en contra, 63; ninguna abstención.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): En consecuencia, queda aprobado el número 1 del artículo 4.º

Pasamos seguidamente al número 2.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 139.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): Queda rechazado el apartado 2 por asentimiento.

Pasamos al apartado 3.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado votos a favor, 76; abstenciones, 64.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zununegui): En consecuencia, queda aprobado el número 3 del artículo 4.º

Por tanto, del artículo 4.º quedan aprobados el número 1 y el número 3, que pasa a ser 2. ¿De acuerdo? (*Asentimiento.*)

En lo que respecta al artículo 5.º y Disposiciones finales primera a tercera, no han sido objeto de votos particulares. Procede, por tanto, someterlos a votación directamente.

Pregunto a la Cámara si se puede proceder a la votación conjunta del artículo 5.º y las Disposiciones finales primera a tercera. (*Asentimiento.*)

¿Se aprueban por asentimiento? (*Pausa.*)
Quedan aprobados.

**Artículo 5.º
y Disposiciones
finales
primera a
tercera**

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas propuestas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en los términos que procedan, en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

En estos momentos han transcurrido cinco horas de sesión. Esta mañana, en la reunión de la Presidencia con la Junta de Portavoces, los portavoces eran partidarios de que la sesión continuara esta noche hasta terminar el orden del día. Pregunto a los señores portavoces y pido permiso a la Cámara para continuar la sesión. (*Asentimiento.*)

PETICION DE CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION:

— SOBRE LOS TRABAJADORES EMIGRADOS.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zuzunegui): Entonces, pasamos al punto quinto del orden del día, petición de creación de Comisiones especiales de investigación, Comisión Especial de Investigación de los Trabajadores emigrados, que ha sido firmada, en primer lugar, por los Senadores señores Laborda Martín y Villodres García, y publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de fecha 18 de abril de 1980.

Cabe un turno a favor y otro en contra, así como las intervenciones de los portavoces.

¿Para turno a favor? (*Pausa.*) El Senador señor Martínez Ovejero tiene la palabra.

El señor MARTINEZ OVEJERO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, dado lo avanzado de la hora, mi intervención va a ser muy breve, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre del cual hablo en esta tribuna y en este momento, con respecto a la formación de una Comisión de Investigación Especial sobre la situación de los trabajadores emigrados.

En principio, decir que el Grupo Parlamentario Socialista se alegra de que esta iniciativa para que se constituya una Comisión de Investigación para averiguar la situación en

que trabajan, en que viven, en que se educan nuestros emigrantes, haya tenido el apoyo de los grupos mayoritarios de esta Cámara y se vaya a constituir. Lo que queremos los socialistas es que esta Comisión que se constituya no quede aparcada, que esta Comisión trabaje que esta Comisión funcione. Y es urgente que funcione porque en estos momentos hay un millón doscientos mil trabajadores emigrantes españoles en Europa, de los cuales doscientos mil son trabajadores emigrantes temporeros; trabajadores emigrantes que quieren seguir siendo y sintiéndose españoles allí donde ahora viven y trabajan, manteniendo su identidad cultural y ejerciendo sus derechos políticos. Este deseo irrenunciable para ese colectivo numeroso de españoles que viven y trabajan fuera de nuestras fronteras tiene que convertirse en realidad y a ello debe contribuir el trabajo de esta Comisión. Los emigrantes deben dejar de ser meros generadores de divisas y comenzar a recibir las contraprestaciones que la nación, que el país, que el resto de los españoles les debemos. Y para eso hay que hacer un repaso mínimo a todas aquellas cuestiones que, en estos momentos, en el nivel legislativo, cultural y social están planteadas.

El Gobierno aún no ha llevado al Parlamento la Ley de Emigración que prometió y que tenía que haber entrado en el Congreso de los Diputados en febrero de este mismo año; ahí está todavía dormida la Ley de Retorno que los socialistas presentamos en el Congreso. Tenemos unos convenios bilaterales establecidos con numerosos países que, en estos momentos, se encuentran obsoletos y algunos son verdaderos ejemplares incunables, porque fueron realizados durante la dictadura pasada y aquellas condiciones no eran las más apropiadas para ejercer y defender los derechos de los trabajadores en Europa, sino para abrir puertas a Europa. Y, así, tenemos planteados problemas como, por ejemplo, el de los trabajadores fronterizos que, actualmente, son despedidos de sus empresas, y como viven en un país y trabajan en otro, no tienen derecho al seguro de desempleo. Tenemos, por ejemplo, cómo se establece una desigualdad manifiesta, por ejemplo, entre los trabajadores alemanes y los españoles que perciben subsidios de familia dis-

tintos según los hijos que tiene cada uno en función de que los hijos estén en Alemania o aquí en España, habiendo cotizado a la Seguridad Social por lo mismo.

Tenemos pendiente la inserción de nuestros trabajadores cuando ingresemos en el Mercado Común Europeo, la libre circulación de trabajadores, de mano de obra, que actualmente se quiere retrasar. Esperemos que una buena parte de estos objetivos —que indudablemente están en manos del poder legislativo y, sobre todo, en manos del Gobierno— se planteen en la reunión que del 6 al 8 de mayo van a tener los Ministros de Trabajo de los 21 países del Consejo de Europa y que van a examinar esta situación. No sería un mal comienzo para esta Comisión de Investigación que a ella se presentara el Ministro responsable —creemos que es el Ministro de Trabajo— para que diera cuenta de la política que el Gobierno va a seguir con respecto a los temas antes mencionados: Ley de Emigración, Ley de Retorno, renegociación de acuerdos y situación de negociaciones con el Mercado Común con respecto a los trabajadores; cómo se han planteado estos problemas y qué soluciones se les dan después de la reunión que dentro de una semana se va a tener en Estrasburgo.

Por último, a nivel general habría que decir que esta comisión tendría que solicitar información, o investigar sobre el propio terreno, las condiciones de vida, agrupación familiar, formación profesional y educación de los hijos de los emigrantes; investigar sobre el mantenimiento de la identidad cultural, sobre el ejercicio de los derechos cívicos y políticos, y en este sentido tenemos que recordar en esta Cámara que todavía no está hecho un censo de los trabajadores emigrantes que viven fuera de nuestras fronteras y que a la hora de ejercer sus derechos políticos aquí, en España, tienen enormes dificultades.

También el hecho de ir procurando que los emigrantes participen en la vida pública del país donde vivan, mediante el reconocimiento del derecho al voto en el área municipal. En este momento sólo en Suecia, en algunos «landers» alemanes y, quizá, en Holanda esto se reconoce.

En cualquier caso, y para terminar, hacer

trabajar a esta Comisión, hacer que los problemas de los trabajadores emigrantes entren en esta Cámara, nos parece que sería, aparte de que esta Cámara sintonizara con la realidad evidente de un millón de españoles, que esta Cámara sintonizara también con la letra y el espíritu del artículo 42 de nuestra Constitución, que, como saben Sus Señorías, dice que «el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores en el extranjero...».

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Ferrer, por el Grupo socialista catalán.

El señor FERRER I GIRONES: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muy brevemente, para apoyar, desde nuestro Grupo, la constitución de esta Comisión Especial de Investigación de los Trabajadores Emigrados.

Personalmente, y con motivo de la promulgación de la Constitución española, tuve la posibilidad de ir a hablar en distintos núcleos del sur de Francia, donde había muchos emigrantes españoles y donde conocí la realidad que vivían. Ellos me decían: «Es la primera vez que vemos a alguien que nos viene a hablar de España». Y es que estos hombres han estado olvidados, durante muchos años, por el Estado, que casi, podríamos decir, se descuida de que existen tantos millones de personas que están trabajando fuera.

A partir de aquellos viajes, hice un ruego al Gobierno sobre muchos puntos; uno de los cuales era, por ejemplo, la emisión de divisas; qué destino se le daba aquí en España, sobre todo para preparar el retorno de tantos emigrantes. Otro punto era lo cultural: qué hacía el Estado español para mantener las raíces culturales con todos estos núcleos de emigrantes en el resto de Europa, y, sobre todo, qué hacía el Estado español por todos aquellos trabajadores que no eran de la cultura oficial del Estado español, que los tenía absolutamente olvidados, en especial en el caso concreto de una entidad formada por catalanes exilados, refugiados y emigrantes,

a los que no daban ninguna subvención para todas sus actividades culturales.

Todos estos puntos creemos que están vivos, que aún deben resolverse. Por eso nuestro Grupo está de acuerdo en constituir esta Comisión para trabajar, en primer lugar, para que no existan emigrantes y para que, ya que existen, al menos que no se desarraiguen del Estado, y, en segundo lugar, para que tengan una ley de retorno que les permita volver siempre que ellos lo crean necesario.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunuzegui): Como portavoz de UCD tiene la palabra el señor Villodres.

El señor VILLODRES GARCIA: Con la venia del señor Presidente, voy a hablar desde el escaño. Quiero expresar, en breves palabras, nuestro apoyo más absoluto a la creación de esta Comisión relativa a los emigrantes.

Nuestra Constitución se preocupa, en diversos artículos, de los emigrantes; por ejemplo, en el 11, sobre la doble nacionalidad; en el 40, sobre que el Estado orientará su política hacia el pleno empleo; en el 42, sobre que el Estado velará especialmente por los derechos sociales y económicos de los trabajadores españoles en el extranjero y por su retorno, y en el artículo 68, en su número 5, sobre el derecho de sufragio de los españoles que se encuentren en el extranjero.

Durante los trabajos de la Constitución, en algún momento se llegó a efectuar el cambio de la expresión «los españoles» por la de «nadie», y empezaron algunos artículos diciendo que nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias religiosas; nadie puede ser condenado por actos u omisiones ejecutados en un momento en que no estaban tipificados; nadie puede ser privado de sus bienes y derechos —artículo 33—, salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización o contraprestación, y de acuerdo con lo expuesto en las leyes.

Cuando se cambió la expresión «los españoles» por «nadie», aunque de una forma directa se pensaba en unos derechos para los extranjeros en España, en el fondo latía la

defensa de nuestros emigrantes, para que ellos pudieran utilizar esta reciprocidad.

Pero, en definitiva, a nuestros emigrantes les interesan sobre todo los problemas concretos; y así, con motivo de este reciente viaje, en el catálogo de problemas expuestos en Bonn por emigrantes españoles en Alemania, un Senador se ha referido anteriormente al subsidio familiar, que es inferior para los hijos que residen en España. Les preocupa el problema de los asesores laborales, que llevan más de veinte años ejerciendo en defensa de nuestros emigrantes. Hace unos días, un Tribunal de Düsseldorf, por sentencia, prohíbe la actuación de un asesor, precisamente el Presidente de la Asociación de Profesionales Españoles Asesores Laborales. No obstante, tienen esperanzas nuestros emigrantes, porque las asistencias de asesores laborales en Alemania en el pasado año 1979 han sido cerca de 2.500. Les preocupa el mantenimiento del empleo, debido al fuerte ritmo de industrialización; por el contrario, muchos de nuestros emigrantes, un porcentaje muy alto, carece del certificado de estudios primarios. Les preocupa la equiparación de certificados y titulaciones, así como la próxima Ley de Emigración, y el que no estén representados en el Consejo Nacional de Emigración, y muchos problemas escolares, tanto de niños como de profesores.

Los emigrantes siguen aportando a España del orden de 1.000 millones de dólares anuales, y en los años 1973 y 1974 mucho más. Estos envíos se hacen por dos modalidades: por las llamadas remesas, que es el giro postal internacional, que puede llegar hasta los 2.000 francos oro, es decir, hasta 45.000 pesetas, que corresponde a los envíos mensuales y periódicos que efectúan, y por transferencias de capital, que responden ya a un ahorro acumulado, y que han de hacer por conducto de bancos, siendo contabilizados por el Instituto Español de Moneda Extranjera.

En definitiva, nos preocupan los problemas de nuestros emigrantes. Creo haber oído la cifra de un millón de emigrantes, pero la triste realidad es que los emigrantes españoles llegan a cerca de tres millones, esto es, que representan, aproximadamente, el 10 por ciento de nuestra población.

Y nada más, sino insistir en nuestro apoyo absoluto a la creación de esta Comisión.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Oídos los portavoces de los diferentes Grupos, esta Presidencia entiende que, por asentimiento, la Cámara aprueba la creación de la Comisión Especial de Investigación de los Trabajadores Emigrados. ¿Es así? (Asentimiento.) Queda aprobada, pues, por asentimiento, la creación de la citada Comisión, y se ruega a los señores portavoces que, a la mayor brevedad, den relación de los Senadores de cada uno de los Grupos que vayan a formar parte de la misma.

CONOCIMIENTO DIRECTO DEL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR POLACA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL CAPITAL.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Pasamos al punto sexto del orden del día: Conocimiento directo del Pleno de Tratados y Convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.

En primer lugar, el Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular Polaca para evitar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Capital.

¿Señores portavoces que deseen intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Subirats, por el Grupo Cataluña, Democracia y Socialismo.

El señor SUBIRATS PIÑANA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, doy por supuesto que vamos a aprobar el Convenio para evitar la doble imposición entre España y Polonia. Me pregunto, sin embargo, si este Convenio y los ya firmados habrá necesidad de modificarlos para extenderlos a la tributación propia de las Comunidades Autónomas.

Hasta ahora los mencionados Convenios internacionales sólo se referían, por el lado español, a los impuestos estatales, sin mencionar, porque no existía, la fiscalidad de las Comunidades Autónomas. Con el pleno ejercicio, en su día, de las competencias establecidas en los Estatutos de Cataluña y País Vasco y los que les sigan, la coexistencia de tributos autonómicos y estatales añade un elemento nuevo a tener en cuenta en los tratados sobre doble imposición internacional. Lo que se habrá pagado aquí a una y a otra Administración tributarias, sumado, es lo que se tendrá que deducir en el país de residencia del perceptor, y viceversa; no solamente lo pagado por el Estado, y que conste que no entramos en la teoría de que las Comunidades Autónomas también son Estado.

La UCD recoge el problema que aquí se plantea, y así, en el artículo 2.º del modelo de Convenio incluye los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, tanto si son exigidos por cada uno de los Estados contratantes como si lo son por los órganos de sus subdivisiones políticas —entiéndase Comunidades en nuestro caso—, incluso si quienes los exigen son autoridades locales.

En Europa, el caso más ilustrativo es el de Suiza, que incluye todos sus impuestos cantonales en los tratados internacionales sobre la doble imposición. También lo hacen, por los tributos de sus subdivisiones políticas, Suecia y Noruega. Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo, no incluye los impuestos de sus estados; sólo lleva los tributos federales a los tratados.

La cuestión de la doble imposición internacional tiene mayor importancia que antaño. La libertad de circulación de capitales y los movimientos migratorios de los trabajadores pueden originar, respecto de las retribuciones generadas, su sometimiento simultáneo a distintas Administraciones tributarias. Hasta que no se alcance la debida armonización en materia tributaria, a nivel europeo por lo menos, ya sabemos que un mismo ingreso será, y es, gravado con más rigor en un país que en otro; pero de lo que se trata es de evitar que resulte gravado por partida doble, cuando no hay tratado o éste omite la presión fiscal de las subdivisiones políticas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Como portavoz del Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático, tiene la palabra el Senador señor Sevilla.

El señor SEVILLA CORELLA: Señor Presidente, Señorías, dejando en el aire la respuesta a la segunda pregunta del Senador señor Subirats, habida cuenta de que las Comunidades Autónomas todavía no han establecido ningún tipo de impuestos y, en consecuencia, no sabemos si este tipo de impuestos podrá o no producir alguna superposición con los impuestos de otras naciones; y dando por supuesto también que, efectivamente, esta Cámara va a aprobar el Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular Polaca para evitar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Capital; teniendo en cuenta que los antecedentes que nos llegan en cuanto a la no presentación de enmiendas en el Senado y en cuanto a que en el Congreso ni siquiera se produjo debate sobre este Convenio, siendo aprobado por una mayoría abrumadora de 291 votos de los 294 en total emitidos, voy a relatar muy brevemente cuál es la estructura de este Convenio.

Este Convenio, que se inicia en conversaciones, primero, en Varsovia, en octubre de 1978, y posteriormente en Madrid, en junio de 1979, se firmó «ad referendum» el 15 de noviembre pasado. Se presenta redactado siguiendo el modelo de la OCDE y contempla, por parte de España, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Patrimonio, mientras que por la parte polaca contempla el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto sobre Sueldos y Salarios y el recargo sobre el impuesto sobre la Renta o sobre el Impuesto sobre la Renta o sobre el Impuesto de Sueldos y Salarios.

Se apoya la idea general en que la tributación se lleve a cabo en el Estado de residencia del contribuyente o en el Estado en donde radiquen los bienes que han de tributar. Por esto, en su artículo 4.º establece la definición de qué se entiende por residente, y se detiene a matizar algunos casos que podían plantear duda en su interpretación. A lo largo de los artículos 6.º a 21 va describiendo cada uno

de los ingresos y tributaciones que ellos pueden producir y establece un mecanismo para evitar la doble imposición y para eliminar las diferencias que en las distintas interpretaciones podrían plantearse. Finalmente, establece un mecanismo de intercambio de información entre los Estados; fija el ámbito personal y excluye del mismo al personal funcionario, diplomático y consular, habida cuenta de lo que para ellos establece la legislación internacional. En cuanto al ámbito territorial, establece que será el de España o Polonia, el de los fondos submarinos correspondientes a sus aguas territoriales, e incluso el de los fondos submarinos correspondientes a las aguas territoriales, que en su caso podrían reivindicar teniendo en cuenta la legislación internacional aplicable al respecto.

Su entrada en vigor está prevista a continuación del intercambio de los instrumentos de ratificación, como es usual en estos casos, y la duración prevista inicialmente es indefinida, estableciendo que habrá que mediar previamente una denuncia por parte de uno de los dos Estados contratantes pasados los primeros cinco años de aplicación.

Razones para aprobarlo existen muchísimas, pero fundamentalmente la oportunidad de incrementar las relaciones entre España y Polonia, tanto en el ámbito cultural como comercial, etc.; de incrementar el tráfico entre los dos países, tanto a nivel marítimo como de establecimiento de líneas aéreas permanentes. En total, un conjunto de circunstancias que indican que en este momento es oportuno, sobre todo por la idea general que subyace en todos estos conciertos, y sobre la que todos los Grupos Parlamentarios estamos de acuerdo, al considerarlos como una serie de piezas que van contribuyendo a la creación del entramado del Derecho Internacional al que se someten las relaciones entre los pueblos, contribuyendo así a eliminar las tensiones entre los pueblos, a su acercamiento y, en último término, al establecimiento de un orden internacional más justo y de una paz más estable.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Oídas las intervenciones de los diferentes portavoces de los Grupos Parlamentarios, esta Presidencia pregunta a la Cáma-

ra si se puede autorizar por asentimiento la ratificación de este Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular de Polonia, para evitar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Capital. ¿Es así? (*Asentimiento.*) Queda autorizada la ratificación por asentimiento.

— ACUERDOS ALCANZADOS DURANTE LAS NEGOCIACIONES CONDUCTENTES AL ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LOS PAISES DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE CAMBIO.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zuzunegui): Pasamos seguidamente a los Acuerdos alcanzados durante las negociaciones conducentes al Acuerdo entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Cambio.

¿Señores portavoces que deseen intervenir? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Baeza.

El señor BAEZA MARTOS: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, a la altura de esta sesión y con la fatiga, sin duda, reflejada en los semblantes, «puedo prometer y prometo» que trataré de ser breve.

El texto que nos fue remitido por el Congreso de los Diputados y que se titula, redundantemente sin duda, «Acuerdos alcanzados durante las negociaciones conducentes al Acuerdo entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio», y que fue aprobado sin debate en la Cámara de los Diputados, sobre 293 votos, con 291 a favor y sólo dos en contra, representa modificaciones importantes que agilizan muy considerablemente los términos del anterior Acuerdo, del vigente Acuerdo, por supuesto, entre España y las siete naciones que constituyen la Asociación Europea de Libre Comercio, y que son: Suiza, Suecia, Noruega, Austria, Portugal, Finlandia e Islandia. Como se recordará, se retiraron de la «European Free Trade Association», conocida generalmente por EFTA, el Reino Unido y Dinamarca, al ingre-

sar en la Comunidad Económica Europea. Pues bien, estos siete países, que representan cerca de 40 millones de habitantes —aproximadamente la séptima parte de la población de la Comunidad—, varios de ellos tienen, evidentemente, una alta tecnología, particularmente Suecia, Suiza y Austria.

Cuando hace un mes estuve en Viena se me preguntó, reiteradamente, cuándo se iba a aprobar finalmente en ambas Cámaras este Acuerdo, porque —y aquí está la curiosa historia— el 4 de octubre del año pasado se ordenó la remisión a la Comisión del Congreso de los Diputados por la Presidencia del Congreso, sin indicar la entrada en la Cámara del proyecto que nos ocupa. El 20 de diciembre se publicó dicha remisión en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», y sólo el 71 de abril de este año ha tenido entrada en el Senado el proyecto de ley de que ahora tratamos.

Pues bien, dicho texto de ley, si leemos el final del mismo, vemos que está suscrito en Madrid. Dice literalmente: «Hecho en Madrid el 26 de junio de 1979». Ha tardado, por tanto, diez meses desde que fue suscrito por las partes hasta que ha sido o va a ser aprobado en esta Cámara. ¿Cómo se explica por parte del Gobierno esta demora? ¿Qué intereses han actuado para que así haya sucedido? Porque si se lee el texto de algunas de las modificaciones, no deja de extrañar que se haga particular énfasis, como veremos, en la importancia que tiene para nuestras relaciones con Portugal. Se dice en la página 31, en relación con el anejo p): «Si España otorga a las Comunidades Europeas nuevas concesiones en productos industriales cubiertos por las disposiciones del anejo p), otorgará, al menos, un trato igual a los mismos productos originarios de Portugal».

España ha aceptado hacer todo lo posible para mantener una preferencia en favor de Portugal, teniendo en cuenta los límites establecidos para la eliminación de los derechos arancelarios durante cada una de las fases a las que se refiere el anejo p).

Pues bien, si esa preferencia en favor de Portugal tarda, como en este caso, diez meses en hacerse patente, realmente nuestra política internacional deja mucho que desear en

nuestras relaciones comerciales. Habría que leer varios párrafos. No es ahora el caso, sobre todo porque no tenemos ante nosotros el texto del Acuerdo que se reforma, que sería absolutamente necesario y que nos llevaría un dilatado período de tiempo. Pero también debemos realzar que en el artículo 28 del Tratado que se reforma se explicita: «España declara su intención de que el Acuerdo entre en vigor cuando pueda ser aplicado por un número importante de países signatarios». Quiere decirse que probablemente es España el único país que queda por suscribir legalmente —y perdónenme la redundancia—, por aprobarse por el legislativo este Acuerdo para que pueda entrar en vigor.

Nos preguntamos si es que el Ministerio, el flamante Ministerio de Asuntos Exteriores, no ha tenido interés en que el Partido del Gobierno retrase la firma de este Tratado en la esperanza, que evidentemente se ha visto defraudada, de que avanzasen notablemente nuestras negociaciones comunitarias. Es una simple suposición, pero la dejo caer sobre esta Cámara.

En cualquier caso, vuelvo a repetir que me gustaría haber podido realzar mayormente, otorgar mayor importancia, si no fuese por lo avanzado de la hora, a los Acuerdos que aquí se ratifican.

Los países con los cuales vamos a suscribir estos Acuerdos representan un volumen comercial mucho mayor que el relativo a su población global. He querido para ello acudir al Anuario del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año pasado, pero no he podido globalizar el intercambio comercial, porque éste, sorprendentemente para quienes no manejen con frecuencia el Anuario Estadístico, da el balance comercial en las monedas de los países con los que se ha negociado, es decir, en chelines austríacos o en cualquier otra moneda de las siete naciones correspondientes en este caso; no solamente no lo da en dólares o en pesetas, sino ni siquiera en precios constantes, con lo cual la comparación con los años anteriores es imposible y la valoración global es poco menos que aventurada.

Y nada más. Después del largo viaje, del periplo que hemos hecho hoy por Europa,

mejor dicho, por España, pasando de las Canarias a Málaga y a Soria, con un breve y peligroso descenso a la sima de Plutón, creo que el referirse a Europa, el saltar a la Europa vecina, que sin duda es nuestro horizonte más próximo, es siempre algo que congratula, y en esta congratulación me confirmo ante Sus Señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zuzunegui): Como portavoz del Grupo de Unión de Centro Democrático, el Senador Alonso Almodóvar tiene la palabra.

El señor ALONSO ALMODOVAR: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, me corresponde hoy el honor de defender ante Sus Señorías varios Acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno de España con los países miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio.

Además de estos Acuerdos que recoge el apartado dos de este punto del orden del día, a que tan brillantemente se ha referido el Senador Baeza, quiero englobar también, con el permiso de la Presidencia (puesto que constituyen prácticamente un bloque único, sin cuyo análisis conjunto no se pueden ver en toda su plenitud el alcance de ellos), los que se incluyen en el apartado cuarto de este mismo punto del orden del día, que dice así: «Acuerdos entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Cambio y sobre la validez del Acuerdo entre los países de la Asociación Europea de Libre Cambio y España para el Principado de Liechtenstein».

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zuzunegui): De acuerdo, pero le ruego que en los diez minutos, si es posible.

El señor ALONSO ALMODOVAR: Indudablemente. Muchas gracias.

Se trata, por tanto, de un Acuerdo básico entre España y la Asociación Europea de Libre Cambio, por el que nuestra nación fortalece notablemente sus relaciones económicas con aquella comunidad, y después otros diversos Acuerdos complementarios, aunque algunos de ellos de extraordinaria importancia, así como uno más con el Principado de Liechtenstein, por el que las cláusulas ante-

riormente aprobadas afectarán también al referido Principado, de la misma forma en que los Acuerdos se apliquen a Suiza, país que se halla vinculado a Liechtenstein por una unión aduanera establecida por el tratado bilateral de ambas naciones de 29 de marzo de 1923, a cuya vigencia se supedita ahora la futura duración del nuevo Acuerdo.

De esta misma exposición se deduce que, en definitiva, el Acuerdo realmente importante para España es el primero, debiendo considerar los otros, en cierto modo, como anejos o complementos del principal, al cual voy a referirme fundamentalmente.

No se trata, a mi juicio —y coincido plenamente con el criterio manifestado en este sentido por el Senador Baeza—, de un mero trámite legislativo, como los de muchos textos internacionales, que en ocasiones se someten a una ratificación casi mecánica de la Cámara. Creo que nos hallamos, por el contrario, ante un documento de indudable valor político, en momentos en que nuestra vocación europea y nuestro proceso de integración en las instituciones y estructuras comunitarias colocan en lugar muy primordial de nuestra acción exterior una más decidida participación española en las organizaciones políticas y económicas de Europa.

Como es bien sabido, la Asociación Europea de Libre Cambio está constituida por Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza, es decir, prácticamente todas las naciones de la Europa occidental no integradas en el Mercado Común.

Mediante este importante Acuerdo, que hoy se somete a nuestro conocimiento y ratificación, se dan unos valiosos pasos hacia la activa participación de España en el libre cambio europeo, absolutamente compatibles y complementarios de nuestro actual proceso de negociación con la CEE.

En el mismo preámbulo del documento se dice literalmente que es común deseo que «España participe progresivamente en el Libre Cambio, fortaleciendo de ese modo las relaciones económicas entre los países europeos». Añadiendo después su propósito de dictar las disposiciones necesarias para la abolición progresiva de los obstáculos para el comercio entre España y la Asociación Eu-

ropea de Libre Cambio, según las normas del acuerdo general sobre aranceles y comercio relativas al establecimiento de zonas de libre cambio.

El acuerdo, por consiguiente, tiene un contenido particularmente técnico, con disposiciones y cláusulas tendentes a la realización del objetivo del mismo, señalado en su artículo 1.º en los siguientes términos: «reducir progresivamente y eliminar los obstáculos para lo esencial de los intercambios entre España y los países de la Asociación».

Para desarrollar este propósito se extiende, a lo largo de 28 artículos, en una minuciosa serie de precisiones sobre aranceles, derechos de exportación, medidas fiscales, reglas de origen, comercio de productos agrícolas, pagos, excepciones generales, normas de competencia, etc., así como la determinación del ámbito territorial de aplicación del acuerdo, entrada en vigor y causas de retirada y expiración de aquél.

Se trata, en síntesis, de un instrumento comercial y económico de indudable importancia para nuestra nación que, aunque naturalmente no represente más que un primer paso en nuestras aspiraciones europeístas, permite un «modus operandi» de gran interés para intensificar nuestras relaciones con los Estados miembros de la Asociación de Libre Cambio, al tiempo que debe continuar sirviendo de «rodaje» a la economía española para su definitiva y esperada integración futura en las Comunidades Europeas.

Por todo ello, señoras y señores Senadores, solicito su voto favorable para la aprobación de estos acuerdos, facultando al Gobierno para su ratificación y entrada en vigor. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zuzunegui): Oídos los portavoces de los diferentes Grupos, esta Presidencia entiende y pregunta a la Cámara si se puede autorizar por asentimiento la ratificación de los acuerdos alcanzados tendentes a las negociaciones que conducirán al acuerdo entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Cambio. ¿Se aprueba? (Asentimiento.) Queda aprobado por asentimiento.

— ACUERDOS BILATERALES SOBRE COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS ENTRE ESPAÑA Y AUSTRIA; ESPAÑA Y FINLANDIA; ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE PORTUGAL; ESPAÑA Y SUECIA; ESPAÑA Y LA CONFEDERACION SUIZA, ASI COMO EL INTERCAMBIO DE CARTAS ENTRE ESPAÑA Y NORUEGA SOBRE EL COMERCIO DE DICHS PRODUCTOS.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Pasamos a los Acuerdos bilaterales sobre comercio de productos agrícolas entre España y Austria; España y Finlandia; España y la República de Portugal; España y Suecia; España y la Confederación Suiza, así como el intercambio de cartas entre España y Noruega sobre el comercio de dichos productos.

¿Señores portavoces que deseen intervenir? (Pausa.)

La señora Raposo tiene la palabra, como portavoz del Grupo Unión de Centro Democrático.

La señora RAPOSO LLOBET: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, para todas aquellas personas, seamos o no parlamentario, que tenemos una mínima sensibilidad a los problemas agrícolas, y que estamos ahora preocupados por la baja rentabilidad y los problemas que afectan a este sector, es importante en este momento el traer aquí, a esta Alta Cámara, una ratificación a los acuerdos bilaterales sobre comercio de productos agrícolas entre España y Austria; España y Finlandia; España y la República de Portugal; España y Suecia; España y la Confederación Suiza, así como el intercambio de cartas entre España y Noruega sobre el comercio de dichos productos. Y digo que esto es siempre importante porque es una manera indirecta de intentar un relanzamiento de nuestro sector agrario, siempre tan deprimido. Y ello es así porque aunque sea de una manera indirecta, todos estos Acuerdos bilaterales van a fomentar un comercio entre todos los países que he mencionado y España para la exportación de productos agrícolas.

Estos Acuerdos simplemente se limitan a dar una relación de los productos que van a tener unos beneficios en cuanto a la importa-

ción y a la exportación. Respecto a la importación, para España son productos de los que somos totalmente deficitarios y, algunos de ellos, son incluso productos de comercio de Estado; y, sin embargo, para nuestra exportación son productos agrarios en los que francamente es importante que, poco a poco, se vayan abriendo nuevos mercados en Europa.

Dentro de la gran lista de productos que podemos exportar, con la aprobación de estos Acuerdos bilaterales, están como muy importantes —y es una opinión totalmente mía, pero creo que es asumida por la Cámara— los agrios, que todos sabemos su importancia; los vinos, que también sabemos, además, el problema de excedentes que tenemos ahora mismo; y las flores que, de alguna manera, también es importante por el gran cultivo que hay de ellas y que yo creo que pueden dar una nota de sensibilidad en todo, porque va a ser un comercio especial el de la exportación de flores con Suiza.

Por ello, y como he dicho anteriormente, porque puede suponer una manera indirecta de fomentar una nueva apertura de nuestros productos agrícolas hacia el mercado europeo, pido a este Pleno de la Cámara que, en nombre de todos se ratifiquen estos Acuerdos bilaterales y se autorice al Gobierno para que los ponga en vigor.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Se pueden aprobar por asentimiento los Acuerdos bilaterales sobre comercio de productos agrícolas entre España y Austria; España y Finlandia; España y la República de Portugal; España y Suecia; España y la Confederación Suiza, así como el intercambio de cartas entre España y Noruega sobre el comercio de dichos productos? (Pausa.) Quedan aprobados por asentimiento.

— ACUERDOS ENTRE ESPAÑA Y LOS PAISES DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE CAMBIO Y SOBRE LA VALIDEZ DEL ACUERDO ENTRE LOS PAISES DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE CAMBIO Y ESPAÑA PARA EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Se entiende que han sido ya de-

fendidos por parte del Portavoz de Unión de Centro Democrático? (*Asentimiento.*)

¿Algún Portavoz más quiere intervenir? (*Pausa.*)

¿Se aprueba por asentimiento? (*Pausa.*)

En ese caso, quedan aprobados por asentimiento los Acuerdos entre España y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y sobre la validez del Acuerdo entre los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y España para el Principado de Liechtenstein.

— TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPOSITO DE MICROORGANISMO A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PATENTES.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Señores Senadores que deseen intervenir como Portavoces de sus Grupos?

El señor Baguena tiene la palabra.

El señor BAGUENA CANDELA: Señor Presidente, Señorías, brevemente, pues cuando el Senador que tiene el honor de dirigirles la palabra haya terminado, ya es hora de irse a descansar. Esta noche el Senador Baguena coge el farol rojo para informarles por unos minutos solamente sobre este Tratado, el cual se ampara en unos problemas de patentes. Las patentes se defienden con documentos, fotografías, planos, esquemas, dibujos, etc.; pero se da el caso que una patente puede estar basada en la estructura de los seres vivos, en el comportamiento de los seres vivos, concretamente en las bacterias, bien sea por procedimientos de síntesis industrial o bien por procedimientos derivados por la propia vida de los gérmenes.

Este Tratado, enormemente complicado tecnológicamente, intenta defender todos los conceptos que se refieren a patentes de invención científica, de invención de utilidad, etc. Es un Convenio o un Tratado enormemente complicado, como digo, que prevé la creación de las llamadas Uniones de Depósito en las cuales se tienen que mantener depósitos de microorganismos en condiciones de productividad y de reproductividad sin

contaminación, incluso durante treinta años, por lo cual no envidio a ningún bacteriólogo por la faena que tenga que hacer. Pero ahora la Cámara no se tiene que definir sobre los métodos para mantener sin contaminar los gérmenes durante treinta años.

Y es en función de todas estas circunstancias por lo que, fiado en el buen juicio, en el buen quehacer y en la propia conciencia de Sus Señorías, me atrevo a pedir que se conceda la autorización solicitada por el Gobierno y prevista en el artículo 24 de la Constitución para que el Estado pueda prestar el consentimiento a obligarse por medio de la ratificación del Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos, a los fines del procedimiento en materia de patentes.

Muchas gracias.

El VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Se puede aprobar por asentimiento la autorización para el Tratado de Budapest? (*Asentimiento.*)

Queda aprobado.

— CONVENIO BASICO DE COLABORACION CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Pasamos al último Convenio, Convenio Básico de Colaboración Científica y Técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Cuba.

Señores Senadores que desean hacer uso de la palabra. (*Pausa.*) El señor Díaz-Marta tiene la palabra.

El señor DIAZ-MARTA PINILLA: Señores Senadores, voy a hablar en defensa de que se corrobore el Convenio básico de colaboración científica y técnica entre el Gobierno de España y el de Cuba.

Muchas son las razones para abonar la ratificación de este Convenio. En primer lugar, nuestro Grupo y todos los Grupo del Senado creo que son partidarios de estos Convenios

de colaboración técnica y científica. Hemos vivido mucho tiempo en España y casi en todos los países de tradición y cultura española aislados en el terreno cultural y mucho más en el terreno de las investigaciones científicas y técnicas. Por tanto, cualquier Convenio de esto es necesario para desarrollar la propia cultura y la necesaria investigación y el desarrollo técnico.

En este caso, es especialmente importante el Convenio de España y de Cuba. De España, porque acaba de salir de una época de aislamiento en este sentido, y de Cuba porque, probablemente, o seguramente, está en este momento en una época de aislamiento. Se relaciona con una parte del mundo, con una cierta cultura, y tiene las relaciones muy limitadas con la otra.

Conozco algo de esto porque estando yo en Naciones Unidas asistí en Polonia a una misión de dicho organismo, precisamente para un intercambio cultural. Los polacos tenían influencia en un solo sentido, y miraban a las Naciones Unidas porque era la influencia con Occidente.

Esto es, como digo, igualmente interesante para España y para Cuba.

En otro orden de cosas, quiero señalar que en el artículo he visto con complacencia que no sólo se refiere a un intercambio de técnicos, sino que se refiere también a proyectos concretos de investigación.

Por mi experiencia anterior en Naciones Unidas, también sé que empezaron estos programas de asistencia técnica por intercambios de técnicos con personas agregadas a una investigación, y acabó formándose otro grupo que era para proyectos concretos, con una finalidad delimitada, con un presupuesto también bien estudiado y con unas asignaciones bien convenidas por un país y un organismo. Esto llegó a ser tan importante que absorbió al otro organismo que se preocupaba de intercambiar técnicos y becas.

Entonces, en este proyecto he visto con complacencia que se refiere a proyectos concretos.

De manera que creo que no hay nada más que decir sobre el asunto. El caso de Cuba y el de España es especial. Tenemos que ayudar a que salga del aislamiento ese país,

que siempre será bien de sus ciudadanos, nos guste o no nos guste su sistema de gobierno.

Así es que no hace falta pedir el voto afirmativo, porque creo que está asegurado, pero me complace extraordinariamente que me haya correspondido hablar sobre este asunto.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Tiene la palabra el señor Román Ceba, como portavoz del Grupo UCD.

El señor ROMAN CEBAS: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, como Portavoz del Grupo de Unión de Centro Democrático pido a vuestras Señorías el voto favorable para autorizar al Gobierno la ratificación del Convenio básico de colaboración científica y técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Cuba, firmado en La Habana el 10 de septiembre de 1978.

Ambas partes, convencidas de la necesidad de reforzar los lazos de amistad que unen a los dos países, se comprometen a favorecer y facilitar la realización de programas y proyectos específicos de colaboración científico-técnica y el intercambio tanto de experiencias técnicas como de información científica y tecnológica.

La colaboración prevista con vistas a contribuir al desarrollo económico y social de ambos países podrá comprender, entre otras formas de colaboración científico-técnica, las de: intercambio de becarios; envío de expertos, técnicos y especialistas; intercambio de misiones de especialistas; entrega de los materiales y de los equipos necesarios para la realización de los programas y proyectos acordados, realización en común de trabajos de investigación, así como de la utilización en común de instalaciones científicas y técnicas.

Mediante el Protocolo anejo se fijan las condiciones de realización del Convenio básico, así como las responsabilidades del Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno del Reino de España.

Cuba tiene una población de unos 8.900.000 habitantes, y cuenta con unos 3.133.000 estudiantes a todos los niveles, de los cuales 106.000 son de Educación Técnica Profesional, y 77.000 de Educación Universitaria.

Los programas de asistencia técnica y científica son realizados predominantemente por la Unión Soviética y la República Democrática Alemana y otros países de la influencia soviética y la investigación está orientada en especial hacia el desarrollo tecnológico, a la agricultura tropical y a la medicina tropical.

Desde 1961 a 1975, unos 1.500 cubanos han completado estudios en la Unión Soviética, el 85 por ciento en el campo de la ingeniería y el 15 por ciento en el campo de la pedagogía, y un gran número de profesores soviéticos enseñan en universidades cubanas y cooperan en el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica en el campo de la bioquímica, fisiología, histología y minería. Existe amplia colaboración entre las universidades de Moscú y La Habana; Leningrado y Oriente, y Quiev y Las Villas.

Nuestro nivel medio de desarrollo, unido a las afinidades históricas, culturales, afectivas e idiomáticas que existen entre España y Cuba nos sitúa en condiciones privilegiadas y en obligación de lograr transferencias tecnológicas y una auténtica colaboración científica con menos costo y mejor asimilación y poder así abarcar múltiples proyectos de los más variados campos: agricultura, recursos naturales, ecología, alimentación, bioquímica, biomedicina, etc.

En la declaración del Gobierno sobre política exterior española, con relación a Ibero-

américa, en especial en los órdenes comercial, científico y tecnológico, que se produjo en el Pleno de esta Cámara el día 8 de abril de 1980, el señor Ministro de Asuntos Exteriores decía: «Somos conscientes de que los medios que estamos poniendo al servicio de la cooperación con Iberoamérica son claramente insuficientes, ello permite incluso que en muchos casos otros países ocupen posiciones que nosotros no estamos en condiciones de abarcar. Sin embargo, las expectativas siguen siendo superiores a las realizaciones. Pero creemos estar en el buen camino».

Y esto es, Señorías, lo que se hace con Cuba al ratificar el Convenio que nos ocupa: estar en el buen camino.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Hay conformidad de la Cámara para que se entienda concedida la ratificación del Convenio básico de colaboración científica y técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Cuba? (Asentimiento.)

Antes de levantar la sesión quiero comunicar a los señores Senadores que la próxima tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo.

Se levanta la sesión.

Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.

Precio del ejemplar 30 ptas.
Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.,

Paseo de Onésimo Redondo, 36

Teléfono 247-23-00. Madrid (6)

Depósito legal: M. 12.500 - 1951

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID